



Observatorio de Políticas Públicas



Coordinación General del Cuerpo de
ADMINISTRADORES GUBERNAMENTALES
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

POLITICAS GUBERNAMENTALES RESPECTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CAT. OPP/CAG/2005-08

LA COMISIÓN NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACIÓN DE
LAS PERSONAS DISCAPACITADAS (CoNADis)

LA LEY DE CHEQUE

ORGANISMOS QUE APLICAN O DEBERÍAN APLICAR LAS POLÍTICAS
MENCIONES CONSTITUCIONALES SOBRE LA DISCAPACIDAD

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN

DISCRIMINACIÓN: EL INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN,
LA XENOFOBIA Y EL RACISMO.

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y URBANÍSTICAS

DICIEMBRE DE 2005



POLITICAS GUBERNAMENTALES
RESPECTO DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
CAT. OPP/CAG/2005-08

Autores:

AG Norma Gil
AG Carlos Roget
AG Daniel Lopez
AG Daniel Paolillo
AG Silvia Sorichetti
AG Alejandro Vidal

Este documento fue producido por los responsables del Area Temática "Discapacidad" del Observatorio de Políticas Públicas del Cuerpo de Administradores Gubernamentales de la Jefatura de Gabinete de Ministros en el mes de diciembre del año 2005.

El Observatorio de Políticas Públicas del Cuerpo de Administradores Gubernamentales inició sus actividades en el año 2002 en jurisdicción de la Coordinación General del C.A.G., sus documentos son publicados en el sitio oficial de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Sitio Oficial: www.cag.jgm.gov.ar

AG V. Daniel Piemonte
Coordinador General
Cuerpo de Administradores Gubernamentales

AG Guillermo J. Alabés
Coordinador Ejecutivo
Observatorio de Políticas Públicas

"... Como parte del proceso continuo de capacitación se formaron cuidadores domiciliarios en todo el país para atender personas con discapacidad o con patología terminal. Se concretaron 74 proyectos especiales de apoyo a organizaciones de discapacitados.... "

Discurso del Señor Presidente de la Nación Dr. Néstor Carlos Kirchner ante la Asamblea Legislativa, en la Apertura de las 123° Sesiones del Congreso.

INTRODUCCIÓN y DEFINICIÓN DEL ÁREA TEMÁTICA

Si bien se tiende a denominar a las personas con "discapacidad" como con "necesidades especiales", hemos optado por continuar la denominación tradicional, que es la seguida por el principal organismo dentro del Estado en relación con la temática (Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas Discapacitadas - CoNADis).

La problemática real de las personas discapacitadas en nuestro país dista de ser un tema advertido en su exacta dimensión e importancia, a pesar de que los datos indican que representan el 7,1 % del total de la población, porcentaje que se eleva al 20% si consideramos también a su entorno familiar. Y si consideramos que persona discapacitada es cualquier ser humano que, en forma permanente o transitoria, padece alteraciones que reducen su movilidad (niños en cochecitos, mujeres embarazadas, personas enyesadas, ancianos, etc.), el porcentaje estimado asciende al 40% de la población total.

En Diciembre de 2004 se publicaron los primeros resultados del Censo Nacional de Población en relación con el tema. Estos datos fueron recopilados en forma complementaria en la Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2002-2003 (ENDI).

Los primeros resultados informan que la población con discapacidad representa, como ya dijimos, el 7,1 por ciento de la población total que vive en localidades de 5.000 habitantes y más y la prevalencia es levemente superior en las mujeres (7,3%) que en los varones (6,8%). En números absolutos el total de las personas con discapacidad asciende a 2.176.123 (1.010.572 varones y 1.165.551 mujeres).

La ENDI fue relevada entre noviembre de 2002 y abril de 2003 en una muestra de alrededor de 67.000 hogares urbanos de todo el país. El universo de la muestra es

la población residente en localidades de al menos 5.000 habitantes, que representa el 96% de la población urbana del país y el 84% de la población total.

El presente informe tiene como base el presentado en septiembre de 2004, el cual ha sido corregido y actualizado, incorporando inclusive algunas perspectivas no analizadas en el anterior, como ser organismos no analizados o un capítulo dedicado a las barreras arquitectónicas.

El área temática abarca las políticas públicas realizadas en relación con el tema, teniendo en cuenta tanto la definición de discapacidad como el universo definido en párrafos previos. Es posible observar que al analizar las actividades de distintos organismos, se producen cruzamientos por lo que determinados aspectos se observarán en la exposición de varias unidades o subunidades de análisis. Un ejemplo típico al respecto es el de la Ley de Cheque, que se explica como tema autónomo en cuanto a política pública, pero del que se analiza la ejecución de programas que bajo su financiación realizan organismos públicos, a la vez que se incluye entre las cuestiones abordadas por el Defensor del Pueblo.

1.- UNIDAD DE ANÁLISIS: LA COMISIÓN NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS (CoNADis)

El Decreto N° 984 del año 1992 aprueba la estructura de la CoNADis y establece entre otras funciones, las siguientes: *Formular consensuadamente con organismos gubernamentales las políticas específicas y proponer su aprobación por los órganos que correspondan, participar en la elaboración de las iniciativas que sobre el tema proyecten las áreas de RR HH, manteniendo un **seguimiento permanente**, evaluar el cumplimiento de la Ley N° 22.431 y demás normas vinculadas al tema y analizar y proponer la conveniencia de que se dicten otras que complementen o modifiquen éstas si resultase conveniente, participar en el seguimiento y estudio del cumplimiento de dichas normas, constituirse como órgano de consulta en la coordinación de las labores que desarrollen sobre el tema entidades públicas y privadas de todo el país, participar conjuntamente con los organismos correspondientes en el estudio de las necesidades y formulación de pautas para la formación y perfeccionamiento de RR HH especializados en la asistencia de personas con discapacidad, articular el desarrollo de la temática específica con otros programas de bienestar o desarrollo de la comunidad, fomentar y desarrollar campañas permanentes de información, concientización y motivación comunitaria, estimular, apoyar y facilitar proyectos y trabajos de investigación y organizar y mantener actualizado un Centro de Información y Documentación computarizado en relación con el tema.*

Y todos estos roles deben ser cumplimentados con el auxilio de una masa de personal que en el año 2004 era de veinte (20) personas de las cuales cuatro (4) solamente eran de planta permanente.

A eso se le suma su bajo peso específico: es una comisión ASESORA y no EJECUTORA. Es opinión de las autoridades de la CoNADis que el tema de la discapacidad no ocupa un lugar destacado en las agendas de los funcionarios ajenos a la Comisión. Las distintas áreas del Estado nacional actúan en relación con el tema en forma espasmódica y muchas veces sin conectarse con la CoNADis. Paradójicamente se puede hablar de un comportamiento autista de organismos estatales y ONGs respecto al tema de la discapacidad. Y se reconoce también que las ONGs. desarrollan en muchos casos una ardua tarea, con el agravante de que ocupan roles que deberían corresponderle al Estado Nacional.

El Consejo Federal de la Discapacidad creado en 1996 por la Ley 24.657 actúa en el tema, pero se sabe que el tratamiento en las distintas provincias es disímil, siendo materia de elogio las acciones que se desarrollan en las Provincias de Mendoza, Neuquén y Santa Fe. Podemos citar que se ha realizado la XXVI asamblea ordinaria del Consejo Federal de la Discapacidad entre los días 23 a 25 de junio del corriente año en la Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, con la participación de representantes provinciales y de Organizaciones No Gubernamentales vinculadas a la problemática. Es de destacar que el Presidente de la CoNADis, Dr. Jorge Mascheroni convocó a tener “una mirada más amplia, una mirada de derecho que nazca de la Constitución Nacional que nos dice que todos somos ciudadanos iguales”.

En la CoNADis se entiende que cualquier política sobre la discapacidad se inicia en concordancia con las políticas de salud, los efectos del suceso que produzca en la persona como secuela la discapacidad se atenuarían en gran medida por la atención temprana. Se analizan planes y estrategias a fin de lograr el objetivo primario que es colocar el tema de la discapacidad en un plano prioritario. A tal efecto deberán encararse acciones tendientes a una culturalización del tema, con el objeto de involucrar al propio discapacitado, a su familia, a los profesionales tratantes y a quienes de una u otra manera deben interactuar con él.

Este enfoque se relaciona con el rol que el decreto N° 762/1997 le asigna a la CoNADis como organismo regulador del Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.

Por otra parte, y también como tarea central de la CoNADis, se actúa para la eliminación de barreras culturales y físicas que se oponen habitualmente a la integración de personas con discapacidad, habiéndose puesto un especial énfasis en este aspecto. Para ello se trabaja en el Plan Nacional de Accesibilidad Urbana, Edilicia, Comunicacional y del Transporte a través de convenios, realizando cursos o seminarios y asesorando sobre el particular.

La CoNADis además elaboró un PLAN POLÍTICO DE ACCIONES INTEGRALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2004-2007. Este Plan procura lograr para las personas con discapacidad el máximo de autonomía e independencia personal además de su presencia activa en la vida familiar, económica y social. La estructura del plan macro es en base a cuatro planes sectoriales con un eje transversal que los articula, a saber:

1. Integración a la Comunidad
2. Salud
3. Educación
4. Integración Laboral

Este Plan Político incorpora a su vez el Plan Nacional de Accesibilidad que la Comisión Nacional Asesora llevaba adelante junto con el Consejo Federal de Discapacidad.

Debe hacerse notar que la CoNADis, dentro de ese corto margen de acción posible intenta realizar otras acciones, siendo de destacar la abundante y útil información publicada en su página de Internet, aún cuando no está preparada para ser escuchada por no videntes como era en un momento la página de la Secretaría de Cultura. Entre otros elementos resulta interesante destacar el Banco Nacional de Datos sobre Discapacidad, que consiste en una suerte de catálogo de prestadores de servicios y proveedores de equipamientos.

Debe destacarse también la interacción con Organizaciones No Gubernamentales, lo que permite la difusión de información relevante, como por ejemplo “links” con destino a páginas que ofrecen posibilidades laborales a discapacitados.

En resumen: se busca armar un nuevo modelo de acción en el que exista un rol preponderante en la prevención, con alta capacitación y optimización del gasto (remarcando que no es un gasto, sino una inversión).

La realidad indica que la CoNADis es un organismo muy bien intencionado con escasos recursos humanos y materiales que en los últimos tiempos ha tratado de optimizar al máximo sus posibilidades en procura de mejorar la situación de la comunidad de discapacitados recurriendo para ello a la planificación ordenada, lo que se ve plasmada en los documentos pertinentes y en la acción consecuente.

2.- UNIDAD DE ANÁLISIS: LA LEY DE CHEQUE

Es la principal fuente de recursos para solventar erogaciones relativas a la discapacidad.

2.1.- GENERALIDADES

La ley N° 24.452 de cheque establecía que los fondos que recaudara el Banco Central de la República Argentina en virtud de las multas por violación de la normativa de emisión de cheque, serían transferidos al Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados, que debía destinar los fondos al financiamiento de programas de atención integral para las personas con discapacidad.

Esta situación la modificó la ley N° 25.413 de marzo de 2001 que derogó la aplicación de multas para los destinos indicados y estableció que el Poder Ejecutivo Nacional, debía incluir anualmente en los proyectos de ley de presupuesto los recursos necesarios para la atención de los discapacitados, como mínimo en los niveles previstos en la ley de Presupuesto Nacional del año 2001.

2.2.- INCONSTITUCIONALIDAD

Este cambio normativo fue objetado por inconstitucional por numerosos tratadistas. Al respecto se demandó la declaración de nulidad por arbitrariedad del art. 3° del Decreto N° 347/99, por medio del cual el Poder Ejecutivo Nacional facultó al Banco Central de la República Argentina a graduar el monto de las multas resultantes por violación de la Ley N° 24.452 entre un mínimo de \$15.000.- y un máximo de \$2.000.000.- por entidad, en función de la cantidad de incumplimientos de cada una.

2.3.- SITUACIÓN ACTUAL

La ley N° 25.730 de marzo de 2003 restableció el criterio de la ley 24.452 respecto del destino de los fondos recaudados por la aplicación de multas a programas y proyectos a favor de las personas con discapacidad. Dichos fondos deben ser aplicados conjuntamente con los recursos previstos en el artículo 10 de la ley 25.413, y son administrados por el Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad,

creado por el Decreto 153/96, que integran representantes de los Ministerios de Salud, Desarrollo Social, Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Educación, Ciencia y Tecnología y de la CoNADis.

Estos aspectos normativos encontraron su continuidad con el Decreto N° 1277 del 23 de mayo del 2003, que crea el Fondo Nacional para la Integración de Personas con Discapacidad a ser integrado fundamentalmente con los recursos previstos por la ley 25.730. Los mismos deben depositarse en una cuenta bancaria a nombre de la CoNADis, para ser aplicados a distintos programas, básicamente a los destinados a la implementación de la Ley N° 24.901. Los proyectos que serán destino final de los fondos deben ser aprobados por el ya mencionado Comité Coordinador.

Desde la CoNADis se está coordinando el nuevo accionar de este Comité, lo que permitirá continuar pagando las cuotas adeudadas a aquellos proyectos que habían sufrido la suspensión de pagos al promulgarse la Ley de Competitividad. Todos los proyectos subsidiados deben estar a cargo de personas jurídicas, sean entidades estatales u ONGs. Hoy se está tendiendo a buscar mayor difusión al respecto con nuevos métodos de seguimiento y control.

Cabe consignar que el 16 de julio de 2003 se sancionó la Ley 25.757 que crea en el ámbito del Congreso de la Nación una Comisión Bicameral Parlamentaria Investigadora del Cumplimiento de la Ley de Cheques N° 24.452, en cuanto establece la integración de un Fondo de Financiamiento del Programa para Personas con Discapacidad. La misma fue promulgada de hecho el 8 de agosto de 2003.

En el marco de la creación del “Fondo Nacional para la integración de personas con discapacidad”, se han promovido proyectos institucionales a favor de personas con discapacidad en situación de pobreza, mediante subsidios contemplados en los distintos programas que implementan los Ministerios de Desarrollo Social, Educación, Salud y Trabajo según lo dispuesto en el Art.7 de la Ley N° 24.452/95 y actual N° 25.730/03.

Por razones de restricción presupuestaria, muchos proyectos se encontraban en trámite suspendido, y durante el año 2004, se reactivaron a partir de la definición de criterios de selección y evaluación acordados.

Se reactivó la operatoria a partir de la Ley del Cheque, aprobándose más de 74 proyectos, tal como ha sido citado en el discurso presidencial frente a la Asamblea Legislativa, en la apertura de las 123° Sesiones del Congreso Nacional.

3.- UNIDAD DE ANÁLISIS: DISTINTOS ORGANISMOS QUE APLICAN O DEBERÍAN APLICAR LAS POLÍTICAS.

3.1.- SUBUNIDAD DE ANÁLISIS: MINISTERIO DE SALUD

Lo establecido por la Ley 24.901 se hace efectivo en la esfera de este Ministerio, a través del Programa Federal de Salud, la Superintendencia de Servicios de Salud y la Administración de Prestaciones Especiales,.

Dicha Ley establece el sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, en el cual se contemplan acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos.

Las Obras sociales del art. 1° de la Ley 23.660, tendrán a su cargo con carácter obligatorio, la cobertura total de las prestaciones básicas enunciadas en la presente ley, que necesiten las personas con discapacidad afiliadas a las mismas.

Las personas con discapacidad no incluidas dentro del sistema de Obras Sociales, en la medida que aquellas o las personas de quienes dependan no puedan afrontarlas, tendrán derecho al acceso a la totalidad de las prestaciones básicas comprendidas en la Ley.

El artículo 7° de la norma establece el mecanismo de financiamiento de las prestaciones, a saber:

Las personas beneficiarias del sistema de Obras Sociales comprendidos en la Ley 23.661 (salvo los afiliados a PAMI), con recursos provenientes del Fondo Solidario de Redistribución a que se refiere el art. 22 de esa misma ley.

Los Jubilados y pensionados del régimen nacional de Previsión y del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, con los recursos establecidos en la ley 19.032.

Las personas discapacitadas comprendidas en la Ley 24.241, con recursos provenientes del Fondo para Tratamiento de Rehabilitación Psicofísica y Recapacitación Laboral previsto en el punto 6 del mismo artículo.

Las personas beneficiarias de las prestaciones en especie previstas en el art. 20 de la Ley 24.557, estarán a cargo de las aseguradoras de riesgo del trabajo o del régimen de autoseguro comprendido en el art. 30 de la misma ley;

Las personas beneficiarias de pensiones no contributivas y/o graciabiles por invalidez, ex – combatientes ley 24310 y demás personas con discapacidad no comprendidas en los incisos precedentes que no tuvieran cobertura de obra social, en la medida en que las mismas o las personas de quienes dependan no puedan afrontarlas, con los fondos que anualmente determine el presupuesto general de la Nación para tal fin.

Dicho fondo se administra a través del Programa Federal de Salud (PROFE).

La norma define las prestaciones garantizadas, conforme se detalla a continuación.

3.1.1.- SISTEMA DE PRESTACIONES EN HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN

3.1.1.1.- Prestaciones Básicas

3.1.1.1.1- Prestaciones preventivas

La madre y el niño tendrán garantizado desde el momento de la concepción los controles, atención y prevención adecuados para su óptimo desarrollo integral.

En caso de existir además, factores de riesgo, se deberán extremar los esfuerzos en relación con los controles, asistencia, tratamientos, y exámenes complementarios necesarios, para evitar patologías o en su defecto detectarla tempranamente.

Si se detecta patología discapacitante en la madre o el feto, durante el embarazo o en el recién nacido en el periodo perinatal, se pondrán en marcha, además, los tratamientos necesarios para evitar discapacidad o compensarla.

Se deberá contemplar el apoyo psicológico adecuado del grupo familiar.

3.1.1.1.2- Prestaciones de rehabilitación

En todos los casos se deberá brindar cobertura integral en rehabilitación, cualquiera fuere el tipo y grado de discapacidad, con los recursos humanos, metodologías y técnicas que fueren menester, y por el tiempo y las etapas que cada caso requiera.

3.1.1.1.3.- Prestaciones terapéuticas educativas.

Se entiende por prestaciones terapéuticas educativas a aquellas que implementan acciones de atención tendientes a promover la restauración de conductas desajustadas, adquisición de adecuados niveles de autovalimiento e independencia, e incorporación de nuevos modelos de interacción, mediante el desarrollo coordinado de metodologías y técnicas de ámbito terapéutico-pedagógico y recreativo.

3.1.1.1.4.- Prestaciones educativas.

Se entiende por prestaciones educativas a aquellas que desarrollan acciones de enseñanza – aprendizaje mediante una programación sistemática específicamente diseñada para realizarlas en un periodo predeterminado e implementarlas según requerimientos de cada tipo de discapacidad. Comprende escolaridad, en todos sus tipos, capacitación laboral, talleres de formación laboral y otros.

3.1.1.1.5.- Prestaciones asistenciales.

Se entiende por prestaciones asistenciales a aquellas que tienen por finalidad la cobertura de los requerimientos básicos esenciales de la persona con discapacidad (hábitat-alimentación-atención especializada) a los que se accede de acuerdo con el tipo de discapacidad y situación socio - familiar que posea el demandante.

3.1.1.2.- Servicios específicos

Los servicios específicos desarrollados en la norma al solo efecto enunciativo, integrarán las prestaciones básicas que deberán brindarse a favor de las personas con discapacidad en concordancia con criterios de patología (tipo y grado), edad y situación socio-familiar, pudiendo ser ampliados y modificados por la reglamentación.

3.1.1.2.1.- Estimulación temprana.

Estimulación temprana es el proceso terapéutico-educativo que pretende promover y favorecer el desarrollo armónico de las diferentes etapas evolutivas del niño con discapacidad.

3.1.1.2.2.- Educación inicial.

Educación inicial es el proceso educativo correspondiente a la primera etapa de la escolaridad, que se desarrolla entre los 3 y 6 años, de acuerdo con una programación especialmente elaborada y aprobada para *ello*. Puede implementarse dentro de un servicio de educación común, en aquellos casos que la integración escolar sea posible e indicada.

3.1.1.2.3.- Educación general básica

Es el proceso educativo programado y sistematizado que se desarrolla entre los 6 y 14 años de edad aproximadamente, o hasta la finalización del ciclo, dentro de un servicio escolar especial o común.

El programa escolar que se implemente deberá responder a lineamientos curriculares aprobados por los organismos oficiales competentes en materia de educación y podrán contemplar los aspectos de integración en escuela común, en todos aquellos casos que el tipo y grado de discapacidad así lo permita.

3.1.1.2.4.- Formación laboral.

Formación laboral es el proceso de capacitación cuya finalidad es la preparación adecuada de una persona con discapacidad para su inserción en el mundo del trabajo.

El proceso de capacitación es de carácter educativo y sistemático y para ser considerado como tal debe contar con un programa específico, de una duración determinada y estar aprobado por organismos oficiales competentes en la materia.

3.1.1.2.5.- Centro de día.

Centro de día es el servicio que se brindará al niño, joven o adulto con discapacidad severa o profunda, con el objeto de posibilitar el más adecuado desempeño en su vida cotidiana, mediante la implementación de actividades tendientes a alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades.

3.1.1.2.6.- Centro educativo terapéutico.

Es el servicio que se brindará a las personas con discapacidad teniendo como objeto la incorporación de conocimiento y aprendizaje de carácter educativo a través de enfoques, metodologías y técnicas de carácter terapéutico.

El mismo está dirigido a niños y jóvenes cuya discapacidad motriz, sensorial y mental no les permita acceder a un sistema de educación especial sistemático y requieren este tipo de servicios para realizar un proceso educativo adecuado a sus posibilidades.

3.1.1.2.7.- Centro de rehabilitación psicofísica.

Centro de rehabilitación psicofísica es el servicio que se brindará en una institución especializada en rehabilitación mediante equipos interdisciplinarios, y tiene por objeto estimular, desarrollar y recuperar al máximo nivel posible las capacidades remanentes de una persona con discapacidad.

3.1.1.2.8.- Rehabilitación motora.

Es el servicio que tiene por finalidad la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades discapacitantes de orden predominantemente motor.

- I. Tratamiento rehabilitatorio: las personas con discapacidad ocasionada por afecciones neurológicas, osteo-articulomusculares, traumáticas, congénitas tumorales, inflamatorias, infecciosas, metabólicas, vasculares o de otra causa, tendrán derecho a recibir atención especializada, con la duración y alcances que establezca la reglamentación;

Provisión de órtesis, prótesis, ayudas técnicas u otros aparatos ortopédicos: se deberán proveer los necesarios de acuerdo con las características del paciente, el período evolutivo de la discapacidad, la integración social del mismo y según prescripción del médico especialista en medicina física y rehabilitación y/o equipo tratante.

3.1.1.2.9.- Sistemas alternativos al grupo familiar.

Cuando una persona con discapacidad no pudiere permanecer en su grupo familiar de origen, a su requerimiento o el de su representante legal, podrá incorporarse a uno de los sistemas alternativos al grupo familiar, entendiéndose por tales a: residencias, pequeños hogares y hogares.

3.1.1.2.9.1.- Residencia.

La residencia se caracteriza porque las personas con discapacidad que la habitan poseen un adecuado nivel de autogestión, disponiendo por sí mismas la administración y organización de los bienes y servicios que requieren para vivir.

3.1.1.2.9.2.- Pequeños hogares.

Se entiende por pequeño hogar al recurso institucional a cargo de un grupo familiar y destinado a un número limitado de menores que tiene por finalidad brindar cobertura integral a los requerimientos básicos esenciales para el desarrollo de niños y adolescentes con discapacidad, sin grupo familiar propio o con grupo familiar no continente.

3.1.1.2.9.3.- Hogares.

Se entiende por hogar al recurso institucional que tiene por finalidad brindar cobertura integral a los requerimientos básicos esenciales (vivienda, alimentación, atención especializada) a personas con discapacidad sin grupo familiar propio o con grupo familiar no continente.

El hogar estará dirigido preferentemente a las personas cuya discapacidad y nivel de autovalimiento e independencia sea dificultosa a través de los otros sistemas descritos, y requieran un mayor grado de asistencia y protección.

3.1.1.3.- Prestaciones complementarias.

3.1.1.3.1.- Cobertura económica.

Se otorgará cobertura económica con el fin de ayudar económicamente a una persona con discapacidad y/o su grupo familiar afectados por una situación económica deficitaria, persiguiendo los siguientes objetivos:

- I. facilitar la permanencia de la persona con discapacidad en el ámbito social donde reside o elija vivir:
- II. apoyar económicamente a la persona con discapacidad y a su grupo familiar ante situaciones atípicas y de excepcionalidad, esenciales para lograr su habilitación y/o rehabilitación e inserción socio – laboral y posibilitar su acceso a la educación, capacitación y/o rehabilitación.

El carácter transitorio del subsidio otorgado lo determinará la superación, mejoramiento o agravamiento de la contingencia que lo motivó, y no plazos prefijados previamente en forma taxativa.

3.1.1.3.2- Apoyo para acceder a las distintas prestaciones.

Es la cobertura que tiende a facilitar y/o permitir la adquisición de elementos y/o instrumentos de apoyo que se requieren para acceder a la habilitación y/o rehabilitación, educación, capacitación laboral y/o inserción social inherente a las necesidades de las personas con discapacidad.

3.1.1.3.3.- Iniciación laboral.

Es la cobertura que se otorgará por única vez a la persona con discapacidad una vez finalizado su proceso de habilitación, rehabilitación y/o capacitación, y en condiciones de desempeñarse laboralmente en una tarea productiva en forma individual y/o colectiva, con el objeto de brindarle todo el apoyo necesario a fin de lograr su autonomía e integración social.

3.1.1.3.4.- Atención psiquiátrica.

La atención psiquiátrica de las personas con discapacidad comprende la asistencia de los trastornos mentales agudos o crónicos, como complicación de las mismas y que por lo tanto interfieran con los planes de su rehabilitación.

Las personas con discapacidad tendrán garantizada la asistencia psiquiátrica ambulatoria y la atención en internaciones transitorias para cuadros agudos, procurando para situaciones de cronicidad tratamientos integrales, psicofísicos y sociales, que aseguren su rehabilitación e inserción social.

También se cubrirá el costo total de los tratamientos prolongados, ya sean psicofarmacológicos o de otras formas terapéuticas.

3.1.2.- DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESTACIONES MÉDICAS

Su responsabilidad primaria es asegurar la cobertura asistencial médica de los beneficiarios de las pensiones asistenciales que no contaran con otra cobertura de salud.

A tal fin contrata a los prestadores y/o redes de prestadores a efectos de brindar la cobertura asistencial médica a la población beneficiaria en todo el ámbito del país.

De esta manera, se hacen efectivas las prestaciones establecidas por el Sistema para las personas que carezcan de cobertura.

Las prestaciones se brindan preferentemente, por medio del sistema público de salud de las jurisdicciones provinciales.

3.1.3.- SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

En lo que a nuestro tema se refiere tiene dos misiones centrales:

- I. Controlar el cumplimiento de las Obras Sociales de las obligaciones impuestas por el sistema.

- II. Administrar el Fondo Solidario de Redistribución, ya que una parte del mismo se destina a solventar los mayores costos derivados de las prestaciones que necesitan los discapacitados.

3.1.4.- ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES

Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Salud, con personería jurídica propia y un régimen de autarquía administrativa, económica y financiera.

Objetivos: Implementar y administrar recursos afectados al apoyo financiero de las prestaciones y patologías de altos costos y baja incidencia y las patologías crónicas de cobertura prolongada relativas a los planes y programas de salud destinados a los beneficiarios del Seguro de Salud.

Recursos: La APE desarrolla su gestión mediante los recursos provenientes del Fondo Solidario de Redistribución, el cual se integra con el 10% o el 15% de los aportes y contribuciones que reciben las OO SS sindicales, del personal de Dirección y las Asociaciones Profesionales de Empresarios.

3.1.4.1.- Fondo Solidario de Redistribución

Son fondos administrados por la Superintendencia de Servicios de Salud que se integran con recursos provenientes de los aportes y contribuciones a las Obras Sociales, de los cuales una parte es transferida para su administración a esta Administración de Programas Especiales.

3.1.5.- SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

El Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad está conformado por una Dirección Nacional, tres Direcciones por debajo de ella y un Departamento: la Dirección de Coordinación de Recursos en Rehabilitación; la Dirección de Promoción de la Persona con Discapacidad; la Dirección Administrativa Contable, Mantenimiento y Servicios Generales y el Departamento de Asuntos Jurídicos.

Las actividades que se realizan en el Servicio están agrupadas por áreas temáticas, las mismas se detallan a continuación:

- En la Junta Médica se realiza el otorgamiento del certificado de discapacidad.
- En la Oficina de Automotores conjuntamente con el resultado de la Junta Médica se realiza el trámite para obtener la franquicia para automotores de discapacitados (según Ley N° 19.279 y sus modificatorias) y la obtención del símbolo para libre estacionamiento de discapacitados.
- El área de Docencia e investigación administra al Instituto de Ciencias de la Rehabilitación, las Escuelas Nacionales de Terapia Ocupacional y de Ortesis y Prótesis y el Centro de Formación Profesional
- En el Área de Deportes todas las actividades cuentan con programas específicos que se desarrollan todos los días de la semana como ser Deportes en silla de ruedas, utilización de la Pileta climatizada y del Gimnasio, Tenis de mesa, etc.
- En la Coordinación de la Red de Servicios de Rehabilitación se produce la evaluación de Proyectos para su elevación al Comité de Ley de Cheques de los programas de Apoyo a Centros y Servicios de Rehabilitación y el de Contención Social.

3.1.6.- INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR (INAREPS)

El Instituto desarrolla su actividad en la ciudad de Ruta 88; Km. 4,5; Mar del Plata; Provincia de Buenos Aires. En Marzo de 1956 se inicia como "Centro de Rehabilitación para Niños Lisiados". El 1º de Julio de 1976, como resultante de carencias económicas, se transfiere el Sanatorio Escuela a la Nación; llamándose "Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur" (I.NA.RE.P.S.) dependiente del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación y se inserta en el sistema Nacional de Salud, cubriendo el Sur Argentino en Rehabilitación y actuando como receptor de alta complejidad.

El paciente puede ingresar para ser tratado tanto en la variante de internación como en consultorios externos, en ambas modalidades cada caso se estudia y evalúa.

El objetivo es la Rehabilitación integral del paciente discapacitado y la modalidad de trabajo, es a través de un equipo interdisciplinario con la participación de la familia.

Se realizan actividades de prevención mediante Consultorios externos de Atención Primaria ubicados en el radio de influencia de la Institución y, respecto de la rehabilitación propiamente dicha, se efectúan todas las gamas terapéuticas de la Medicina.

También posee un Servicio de Orientación y Rehabilitación Profesional, donde se efectúa una orientación básica en distintas disciplinas; además funciona dentro de la Institución, la Escuela de Educación Especial N° 501 para pacientes alumnos con discapacidades motoras; cubriendo toda la educación primaria.

Respecto de la docencia se realizan las Residencias Médicas en Medicina Física y Rehabilitación (Fisiatría) y de Residencias en Terapia Física; el Curso de Auxiliares de Enfermería; las Prácticas de Alumnos de Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional de Mar del Plata, también se realizan Rotaciones de Fisioterapeutas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y Pasantías de Fonoaudiólogos de la Universidad del Aconcagua (Mendoza).

Con relación a la investigación, periódicamente se renuevan los Convenios con diferentes organismos, institutos y universidades del interior del país.

3.1.7.- PLAN FEDERAL DE SALUD.

Durante los años 2004/2005, además de las prestaciones y servicios brindados por los órganos específicos tal como se expresara previamente, podemos destacar el Plan Federal de Salud entre otras líneas de acción:

Se trata de un documento aprobado en San Nicolás de los Arroyos, Provincia de Buenos Aires, en marzo de 2004 en el marco del COFESA y sobre la base de un diagnóstico de situación que apunta la necesidad de redefinir los roles del conjunto de actores del sector proponiendo un programa de actividades para los siguientes cuatro años.

Enuncia las siguientes acciones orientadas a las personas con discapacidad:

- Implementar la rehabilitación médica como un componente de atención primaria de la salud.
- Implementar y difundir la estrategia de la rehabilitación con base comunitaria.
- Desarrollar una red de servicios, que incluya por lo menos una unidad de rehabilitación cada cien mil habitantes, de tercer nivel de atención.
- Transferir a las familias los conocimientos asistenciales que promuevan la atención y el apoyo familiar.
- Propiciar la coordinación entre los niveles asistenciales y la articulación de éstos con los servicios sociales y el sector educativo.

Resulta notable la falta de referencia a acciones de prevención. Si bien la prevención es declamada profusamente a lo largo del documento, queda desvinculada del apartado dedicado a discapacidad, limitado a acciones de tipo reparatorio.

En cuanto al modelo financiador del Plan, se preveía la constitución de un Seguro Nacional de Enfermedades Especiales con el fin de compensar los desequilibrios que ocasionan en los sistemas aquellos eventos que en economía de la salud son denominados “enfermedades catastróficas”, entre las que se encuentran muchas discapacidades. Ante el alto costo de la atención de éstas que, por ejemplo en el caso de la discapacidad al contar con legislación específica deben ser cubiertas de manera obligatoria el Estado reconoce la

necesidad de establecer un mecanismo de financiamiento mediante la administración de una “reserva técnica” que contemple a la totalidad de la población a fin de revertir la situación que de hecho se genera cuando muchos de los actuales financiadores ponen barreras de acceso al tratamiento.

Para su concreción, la meta es la aprobación por el Parlamento del respectivo proyecto de ley.

3.1.8.- RECURSOS DE AMPARO Y RECLAMOS ADMINISTRATIVOS.

Son numerosos los reclamos originados a partir de la falta de cobertura de diversas necesidades derivadas de la discapacidad. En su inmensa mayoría se invoca la falta de cumplimiento de lo ordenado por la Ley N° 24.901, de atención integral de la discapacidad. Este fenómeno constituye una de las aristas de lo que se ha dado en llamar “la judicialización de la salud”. Tiene varias causas, entre ellas podemos citar la reforma constitucional de 1994, con la incorporación, con rango constitucional de los tratados internacionales referidos a derechos humanos, quedando expresamente reconocido el derecho a la salud. Esto obligó a los Tribunales Nacionales a cumplir con la Constitución y con los Tratados Internacionales por ella reconocidos, hecho que se ha visto reflejado en una permanente producción de jurisprudencia al respecto. En tal sentido, la Corte suprema de Justicia de la Nación le asigna al Estado Nacional el rol de “garante” del cumplimiento de este derecho.

Concomitantemente, la crisis social y económica de los últimos años colocó a mayor cantidad de población en situación de falta de cobertura. La caída del empleo, la consecuente retracción del sistema, combinado con el aumento de los costos generan una ecuación difícil de armonizar.

Al tener el Estado Nacional el rol de garante en cuanto al derecho a la salud, independientemente de la naturaleza del obligado primario (obra social, empresa de medicina prepaga, estado provincial) las resoluciones judiciales obligan a éste, a través del Ministerio de Salud, a brindar las prestaciones solicitadas.

Operativamente, dado el gran volumen de reclamos originados en los últimos años se constituyó un equipo de trabajo ad hoc en la Secretaría de Políticas, Regulación y

Relaciones Sanitarias para canalizar la resolución de las mandas judiciales, así como los reclamos administrativos.

Se parte del concepto de que son concurrentes las facultades de la Nación y las provincias y se procura resolver aquellos casos que no han llegado a la vía judicial gestionando ante los ministerios de salud provinciales la cobertura requerida. Asimismo se tramita, cuando corresponde, la afiliación al PROFE del amparista o recurrente.

3.1.9.- MODIFICACIONES ORGÁNICO FUNCIONALES DEL MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE HUMANO.

3.1.9.1 Creación del Programa de Atención Integral de la Discapacidad.

Mediante la Resolución N° 676, del 15 de junio de 2005 se aprobó la creación del mencionado programa tomando como base los lineamientos del Plan Federal de Salud y la necesidad de “diseñar una política para la atención integral de la discapacidad desde el subsector público del área Salud”. Tiene por finalidad la inclusión de la población con discapacidad en una red de servicios, para lo cual el Estado Nacional deberá asistir y fortalecer a los gobiernos locales.

Se asigna la función de coordinación de las acciones del programa a la Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias.

En el marco de una estrategia de enfoque integral de la cuestión, aborda el concepto de prevención y el de la inclusión de la discapacidad en el sistema de salud, integrando y articulando con éste y los restantes sectores. En este sentido resulta interesante la presencia de componentes destinados al fortalecimiento de la prevención y la atención primaria desde las unidades del primer nivel de atención, prestando especial importancia a la capacitación del recurso humano de este primer nivel en la detección e intervención temprana.

Durante la segunda mitad de 2005 se comenzó a gestionar el cumplimiento de uno de sus objetivos específicos, que era el de realizar un diagnóstico de situación acerca de la cultura local referente a la rehabilitación como así también de los recursos sociales y sanitarios existentes en las distintas jurisdicciones, buscando la complementariedad y potenciación mutua entre los diferentes subsectores. Fueron visitados diferentes puntos del

NOA y el NEA para presentación del Programa ante los responsables locales en una primera actividad de acercamiento.

Otro de los objetivos del programa apunta al desarrollo de un sistema de vigilancia epidemiológica de la discapacidad para medir la prevalencia e incidencia a fin de posibilitar la identificación de necesidades y planificar de manera más efectiva la distribución de los recursos y servicios de salud. Se articulará con la Dirección de Epidemiología del Ministerio para la producción de estudios epidemiológicos, ya que no se cuenta con información sistematizada en el país sobre discapacidad.

Hasta el presente el programa no cuenta con partida presupuestaria específica ni unidad ejecutora. La Secretaría que tiene a su cargo la coordinación asignó a dos personas contratadas las actividades iniciales de implementación.

3.1.9.2 Creación de una unidad con nivel de Dirección.

Fue presentado a mediados de 2005 un proyecto para ser incorporado en el trámite de modificación de la estructura del Ministerio de Salud, creando una unidad con nivel de dirección, denominada DIRECCIÓN DE DISCAPACIDAD dependiente de la Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias. La estructura aún se encuentra en trámite de aprobación.

3.1.9.3 Proyectos Financiados con la Ley de Cheques en el Área Salud.

La Unidad Ejecutora del Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad evalúa con los representantes de las unidades ministeriales los proyectos presentados por organismos públicos o instituciones no gubernamentales para ser financiados por el Fondo previsto en esa ley. En el caso de Salud, la representación formal corresponde al Secretario de Programas Sanitarios, pero a partir del último cambio de gobierno, cuando su titular, la Dra. Graciela Rosso dejó ese cargo para ocupar la Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias, se acordó que continuara con sus funciones como representante del Ministerio ante el Comité, así como ante la CONADIS. Las funciones técnicas, asistencia a las reuniones, etc. son llevadas a cabo por su representante alterna, la Dra. María Elena Meroni, asesora contratada de la Secretaría quien tiene experiencia en el tema de discapacidad por haberse desempeñado anteriormente en el PROFE.

La evaluación de proyectos se realiza en el marco de los instructivos aprobados por el Comité.

En el caso de salud, se aprobaron a partir de 2005 las siguientes categorías de proyectos¹:

- **PROGRAMA DE CREACIÓN O AMPLIACIÓN DEL BANCO DESCENTRALIZADO DE AYUDAS TECNICAS.**

Las ayudas técnicas son elementos que asisten en las diferentes actividades de la vida diaria, como los bastones, andadores de marcha, sillas de ruedas, muletas, etc.

Todos estos elementos forman parte de la atención integral en rehabilitación y son imprescindibles para la independencia funcional de una persona discapacitada.

El objetivo es la creación de un Banco Descentralizado en los niveles provinciales que facilite el acceso oportuno a dichos elementos, en carácter de préstamo, determinando diferentes bocas de expendio en Hospitales, Municipios u Organizaciones de la Sociedad Civil.

- **CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN REHABILITACIÓN Y FORMACIÓN DE MÉDICOS ESPECIALISTAS.**

Con el objeto de dar continuidad a la política de promoción de la creación y desarrollo de redes de servicios de rehabilitación, fortaleciendo a los efectores públicos de se hace necesario considerar una nueva instancia de formación de médicos especialistas en medicina Física y Rehabilitación, por cuanto resulta ser una necesidad común, debido a su escasez en todo el territorio nacional.

La Medicina Física y Rehabilitación cumple con el objetivo social y humano de restaurar las funciones físicas perdidas o alteradas como consecuencia de enfermedades congénitas o adquiridas. Esta especialización no ha logrado aún contar con un número de profesionales suficiente para cubrir las demandas en los servicios. Este Programa de capacitación tiene como objetivo general favorecer la generación de Recursos Humanos calificados para satisfacer las necesidades de atención local con el consecuente fortalecimiento de los servicios de rehabilitación mediante el financiamiento del costo de la

¹ Sitio web de la CONADIS: www.cndisc.gov.ar /Ley de Cheques / Proyectos

Carrera de Medicina Física y Rehabilitación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires al profesional seleccionado, incorporando así al sector público de las provincias recurso médico con alto grado de especialización en la atención de la discapacidad.

- **PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE REHABILITACIÓN**

Se basa en el concepto según el cual la atención de la discapacidad debe formar parte de un Sistema de Salud basado en la Estrategia de la Atención Primaria. Esto significa impulsar la conformación de un modelo de atención de complejidad creciente, desde los Centros de primer nivel hasta la Unidad de Rehabilitación de máxima complejidad.

Se financiará por esta vía la construcción y/o equipamiento de Unidades básicas de Rehabilitación.

- **PROGRAMA DE IMPULSO AL DESARROLLO DE TALLERES DE PRÓTESIS Y ORTESIS.**

El objetivo para este tipo de proyectos es asegurar el equipamiento ortésico y protésico de toda la población discapacitada mediante la creación, ampliación y/o equipamiento de talleres provinciales de ortesis y prótesis

- **PROYECTO DETECCIÓN PRECOZ Y ATENCIÓN TEMPRANA DE LA DISCAPACIDAD**

Unidades Ministeriales responsables: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y Ministerio de Salud y Ambiente

Este proyecto se instala en el Subprograma 4.7 “Promoción de la estimulación temprana” del Programa Educación Inclusiva creado por la Resolución del MECyT N° 371/01 y aprobado por el Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad (Acta N° 175 del 26 de abril de 2001).

El objetivo es promover la intervención temprana de niños en riesgo evolutivo en acciones conjuntas y articuladas de los sectores de salud y educación tanto en el nivel local como regional Elaborando una base de recursos compartidos entre los servicios de salud y educación locales para diagnóstico, derivación y/o necesidades especiales de cada caso.

El programa financiará en la primera etapa, proyectos por un monto máximo de \$ 40.000. Se prevé la misma suma para las acciones 2006, previa rendición de lo ejecutado en la primera etapa.

Se financiarán básicamente acciones de capacitación. Provisión de equipamiento, material didáctico, infraestructura y movilidad y viáticos para itinerancias.

Resulta muy destacable el cambio de criterios adoptado por el Comité a partir de su refuncionalización en 2004, cuando se integró nuevamente el Fondo (ver OPP 2004). Muchos de los proyectos financiados en la etapa previa a la suspensión por aplicación de la Ley de Competitividad resultaron inviables pues no se había tenido en cuenta su sustentabilidad. Por ejemplo se construyeron centros de rehabilitación que luego no funcionaban por no contarse con los recursos humanos necesarios, se financiaron proyectos de organizaciones no gubernamentales que luego no continuaban con la actividad, o no brindaban servicios comunitarios, etc.

Actualmente se exige a la organización presentante que fundamente sus recursos económicos- financieros que garantizan la sustentabilidad del proyecto y se priorizan aquellos proyectos cuyos beneficios impacten en las jurisdicciones con mayor incidencia de discapacitados en situación de pobreza y/o riesgo social. Además en todos los casos la presentación debe ser acompañada del aval de la Autoridad Sanitaria y de la máxima autoridad local en Discapacidad garantizando la sustentabilidad.

Otro cambio sustantivo en relación con la etapa anterior es que se amplió el espectro de actividades vinculadas al área sanitaria. En un principio estaban circunscriptas a la creación de infraestructura para rehabilitación (refacción, ampliación, construcción y/o equipamiento). Actualmente, como pudo verse en la categorización de proyectos detallada más arriba se apunta al fortalecimiento de las redes de rehabilitación en el marco de la estrategia de atención primaria desde otros ejes, como son la prevención, la formación del recurso humano y la provisión de elementos.

3.2.- SUBUNIDAD DE ANÁLISIS: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Entre la gama de posibilidades de este Ministerio, se desarrolla a continuación y en relación con el tema abordado, lo referido a las Pensiones No Contributivas.

3.2.1.- PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS.

Por Decreto 292/95 del 01/01/96 se estableció la transferencia de la tramitación, liquidación y control de la Pensiones No Contributivas a la Secretaría de Desarrollo Social, funciones que hasta entonces estaban a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

A través de la sanción del Decreto 1455/96 se crea la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, organismo desconcentrado encargado de organizar este servicio y de brindar cobertura médica a los beneficiarios..

La misión de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales es formular las políticas conducentes a asegurar el otorgamiento de pensiones no contributivas y las emergentes de leyes especiales a la población beneficiaria, dentro del marco de las políticas emanadas del Ministerio de Desarrollo Social. Esta Comisión Nacional tiene a cargo a la Dirección Nacional de Pensiones no Contributivas.

La Dirección Nacional De Pensiones No Contributivas: tiene como misión el otorgar las pensiones no contributivas y todas aquellas emergentes de leyes especiales, debiendo asesorar sobre los requisitos de las mismas. También procede a controlar la liquidación de estas prestaciones.

Estas pensiones consisten en un pago mensual mediante una Orden de Pago Provisional, que emite la ANSES por cuenta y orden de la Comisión y tiene como beneficiarios al segmento de la población con ingresos muy limitados o inexistentes y sin ningún amparo. El pensionado y su grupo familiar tiene derecho a afiliarse al PROFE (Programa Federal de Salud, hoy administrado por el Ministerio de Salud).

El trámite para conseguir una pensión es personal y gratuito, pudiéndose autorizar a un tercero en casos de imposibilidad física. El expediente iniciado es evaluado por personal de la Comisión y, en caso de resultar procedente, se otorga dicho beneficio.

Tanto para la recepción de las solicitudes como para la atención de los beneficiarios se cuenta con los Centros de Atención Personalizada (CAP). Estos centros representan a la Comisión en el interior del país y entienden en todos los temas inherentes a la actividad de la Comisión.

3.2.2.- PROYECTOS FINANCIADOS CON LA LEY DE CHEQUES EN EL ÁREA DESARROLLO SOCIAL.

Como se indicara anteriormente, la Unidad Ejecutora del Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad procede a evaluar con los representantes de las unidades ministeriales los distintos proyectos para financiar con el Fondo referido. La evaluación de proyectos se realiza en el marco de los instructivos aprobados por el Comité y se aprobaron los siguientes programas:

3.2.2.1. Programa Alternativas de Contención Social.

El Programa propone el desarrollo de Sistemas Alternativos de Contención Social para los casos en que una persona con discapacidad no pueda ser atendida en sus necesidades esenciales por su grupo familiar o comunitario, favoreciendo la permanencia en la comunidad de origen, permitiendo la integración social, la autonomía y la equiparación de oportunidades..

Los objetivos específicos de este programa son:

- Colaborar con el desarrollo de los servicios terapéuticos – educativos y asistenciales en la modalidad de Centros de Día, Centros Educativos Terapéuticos, Residencias, Hogares y Pequeños Hogares, en zonas que tengan mayor incidencia de discapacitados en situación de pobreza, con el consiguiente riesgo social.
- Otorgar subsidios institucionales para la adquisición, construcción, ampliación, remodelación y/o equipamiento de Inmuebles para las modalidades antes mencionadas.
- Promover el compromiso efectivo de los Organismos e Instituciones locales y/o regionales intervinientes, en procura de la garantizar el funcionamiento de los servicios propuestos.

Podemos caracterizar a los sistemas alternativos de contención social como sistemas alternativos al grupo familiar, a favor de las personas con discapacidad, teniendo por finalidad la cobertura de los requerimientos básicos esenciales en procura de fortalecer las aptitudes e intereses de la población objetivo.

Se prevé desarrollar el Programa en las veinticuatro jurisdicciones de la República Argentina, priorizando las que tengan mayor incidencia de discapacitados en situación de pobreza, con el consiguiente riesgo social.

Las modalidades para tales fines son:

- *Centro de Día:* Es el servicio que se brindará al niño, joven o adulto con discapacidad severa o profunda, con el objeto de posibilitar el más adecuado desempeño en su vida cotidiana, mediante la implementación de actividades tendientes a alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades.
- *Centro Educativo Terapéutico:* Es el servicio que tiene por objetivo la incorporación de conocimientos y aprendizajes a través de enfoques, metodologías y técnicas de carácter terapéutico. Estas metodologías pueden incorporar, reformulados pedagógicamente, recursos extraídos del campo terapéutico; por lo que el equipo profesional que las investigue, produzca y aplique, tendrá una composición y conformación que permita ese abordaje.
- *Residencias:* Es el servicio destinado a cubrir los requerimientos de vivienda de las personas con discapacidad con suficiente y adecuado nivel de autovalimiento e independencia para abastecer sus necesidades básicas o que requieran un mínimo de acompañamiento para ello.
- *Hogares:* Recurso institucional que tiene por finalidad brindar cobertura integral a los requerimientos básicos esenciales (vivienda, alimentación, atención especializada) a personas con discapacidad sin grupo familiar propio o con grupo familiar no continente.
- *Pequeños Hogares:* Es el servicio institucional destinado a un número limitado de personas con discapacidad sin grupo familiar propio o continente, que tiene por finalidad brindar cobertura integral a los requerimientos básicos esenciales para su desarrollo y bienestar. Se trata aquí de reproducir el ámbito familiar de la manera más similar posible con el objeto de que la ausencia de este tipo de requerimientos no afecte o retrase su desarrollo.

3.2.2.2. Programa transporte institucional.

Este Programa propone la adjudicación de vehículos de transporte a Organizaciones Gubernamentales y/u Organizaciones de la Comunidad sin fines de lucro. Los transportes estarán destinados a facilitar el acceso de personas con discapacidad a servicios de salud, educación, trabajo y/o esparcimiento, distantes a su domicilio, priorizando situaciones de pobreza, difícil acceso e inexistencia de transporte público de pasajeros con el objeto de evitar el aislamiento y garantizar el acceso a una mejor calidad de vida.

Se prevé desarrollar el Programa en las veinticuatro jurisdicciones de la República Argentina, priorizando las que tengan mayor incidencia de discapacitados en situación de pobreza, con el consiguiente riesgo social.

Los objetivos específicos son:

- Facilitar el traslado y desplazamiento de personas con discapacidad en situación de pobreza, mediante la organización de redes de movilidad, operadas por Organismos Gubernamentales y/u Organizaciones de la Comunidad sin fines de lucro.
- Promover estrategias de organización para uso racional y pleno de los transportes.

3.3.- SUBUNIDAD DE ANÁLISIS: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

En lo que se refiere a la Ley de Cheque, se están analizando, más allá de la continuidad de los proyectos iniciados anteriormente, cuáles serán los nuevos programas que se beneficiarán de los fondos a repartir.

La Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente y la Dirección Nacional de Programas Compensatorios dependientes de la Subsecretaría de Equidad y Calidad de la Secretaría de Educación tienen estrecha vinculación con el tema de la discapacidad, como veremos.

3.3.1.- Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente

- **La actualización concertada de la normativa referente a evaluación, acreditación y promoción de alumnos con necesidades educativas especiales en escuela común.** La falta de una normativa respecto a este tema interfiere con el progreso en la escolaridad y con la acreditación de los estudios de dichos alumnos. Por lo tanto, se han desarrollado acciones para consensuar con las provincias una propuesta de normativa a ser presentada al Consejo Federal de Educación para su aprobación. En este sentido se analizó en particular la cuestión de la acreditación de los aprendizajes, y se han celebrado ya algunos acuerdos federales al respecto.
- **La definición de criterios para la elaboración de las adecuaciones curriculares.** Éstas, de carácter particular, consisten en estrategias y recursos educativos adicionales a la currícula que se implementan en las escuelas para posibilitar el acceso y progreso de los alumnos con necesidades educativas especiales. Los criterios en elaboración buscan establecer lineamientos comunes para realizar estas adaptaciones, y están organizados de acuerdo con las diferentes discapacidades (motora, visual, auditiva, mental, trastornos generalizados del desarrollo, discapacidades múltiples) y tipos de adecuaciones (de acceso, propiamente dichas y de contexto).
- **La Asistencia Técnica a las provincias.** Se busca aquí dar respuesta a los pedidos de asistencia de las provincias, en torno a los siguientes ejes: concepción de la Educación Especial y transformación educativa, según el Acuerdo Marco para la Educación Especial; adecuaciones curriculares; integración y escuela inclusiva; funciones de los equipos interdisciplinarios y formación laboral.
- **La capacitación:** Concomitantemente a la Asistencia Técnica se busca brindar capacitación no solamente dirigida a los docentes que trabajan directamente con los discapacitados sino también a aquellos que aparentemente están ajenos pero deben conocer la problemática pues indirectamente pueden tener contacto con el tema.
- El fomento de la implementación de propuestas actualizadas de integración de las personas con necesidades educativas especiales al mundo del trabajo. Se trata de lograr la integración de las personas con necesidades educativas especiales al

mundo laboral por medio de un adiestramiento a lo largo de toda su escolaridad. Esto abarca desde los talleres pre - laborales o de adiestramiento para la cultura del trabajo hasta la articulación con los centros de formación profesional. Para ello, será necesario desarrollar estrategias diferentes para la integración. Es importante destacar que en el ámbito del MERCOSUR EDUCATIVO existe una Comisión sobre el tema de la discapacidad. Al respecto se ha realizado un Proyecto OEA-CIDI denominado "Educar en la diversidad en los países del MERCOSUR", que tiene por objeto la capacitación en el desarrollo de estrategias y materiales formativos para la transformación de la gestión y práctica pedagógica de docentes en servicio en escuelas de los países del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay). Se orienta hacia una acción educativa inclusiva, que atienda las necesidades educativas de todos los alumnos, con especial atención a los que presentan necesidades educativas especiales. Participan cinco (5) escuelas por país.

3.3.1.1- Orientaciones estratégicas.

En relación con la Educación Especial, se han publicado las siguientes orientaciones estratégicas de la Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente:

- Promover **programas de desarrollo del niño en la primera infancia** integrados y multidimensionales, fomentando la buena salud y la nutrición del niño y su capacidad cognoscitiva, social y emocional.

La posibilidad de tener múltiples experiencias tempranas de aprendizaje e intercambio con bienes culturales son de importancia clave para el desarrollo posterior de la escolaridad, ya que enriquecen el bagaje cultural con que los niños ingresan a la escuela, incrementan sus saberes y en consecuencia, ayudan a un buen rendimiento escolar.

Las propuestas de educación temprana estarán direccionadas para que su implementación se desarrolle fuera de los ámbitos de la escuela especial, tomando a la comunidad como base para su desarrollo. (Por ejemplo: los jardines maternos y los espacios de salud, ONGs, etc.)

- Mejorar la **calidad de las propuestas de enseñanza** se constituye en el eje principal de esta gestión.

Para lograr este propósito debemos considerar el lugar y la importancia de los saberes disciplinares en el contexto de la reflexión pedagógica y de las expresiones de la cultura contemporánea.

La enseñanza especial comparte las dimensiones pedagógica y cultural de la enseñanza común y cuenta con algunas propias, sobre las que también necesitan reflexionar los docentes, tal vez la premisa más importante a que se ha arribado en este tiempo sea la de que todos los niños y jóvenes son capaces de aprender de acuerdo con sus posibilidades y que lo harán mejor en la medida que perciban que su maestro está convencido de ello.

Las consideraciones precedentes deberán incidir tanto en las propuestas de enseñanza en la escuela especial como asimismo en un intenso trabajo de revisión de las estrategias de integración a escuelas comunes implementadas hasta el momento.

- Proponer una **formación integral y permanente para los jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales** dando prioridad a valores que conducen a una sociedad más justa que crea en la libertad, la afectividad y el respeto.

Planteamos ampliar la oferta educativa para los jóvenes con necesidades educativas especiales promoviendo que se reflexione sobre su lugar como ciudadanos activos que participan y desarrollan su cultura, que se preparan para participar en el mundo laboral como un componente más de su formación integral.

El cambio ideológico que significa esta propuesta para la formación integral y permanente de los jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales conlleva su instalación en forma paulatina en las instituciones que los atienden y en todas aquellas instancias educativas formales y no formales en las cuales puedan participar.

Es necesario fomentar el sentido crítico, de tal forma que los jóvenes y adultos con con necesidades educativas especiales sean capaces de valorar los hechos diarios, reaccionar ante los estímulos de la sociedad y ante las propias posturas que van tomando. Para ello se trabajará en el diseño y elaboración de materiales que sugieran estrategias para promover la educación permanente y ampliar la oferta de las escuelas de formación laboral.

3.3.1.2.- Líneas de acción 2004/2007.

En concordancia con las orientaciones estratégicas la Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente ha trazado las siguientes líneas de acción, que se enmarcan en el propósito de construir en forma articulada con las jurisdicciones propuestas de desarrollo de la Educación Especial que amplíen y mejoren la oferta educativa para los alumnos con necesidades educativas especiales. Esta construcción progresiva se desarrolla en el cronograma 2004-2007 priorizando de la siguiente manera:

2004

- • Discusión y reflexión acerca de los problemas planteados.
- Análisis de prioridades provinciales y diseño de proyectos. .

Respecto de este año, el plan proponía profundizar la reflexión y discusión acerca del campo de la Educación Especial relacionado con los principales problemas que se presentan en la atención de la población que le compete a través de encuentros nacionales con los responsables del Área, asistencias técnicas a los equipos provinciales, seminarios, ateneos, mesas de trabajo regionales y/o provinciales. Asimismo producir documentos que orienten el desarrollo de programas específicos y se organizarán foros de intercambio y consulta.

Estas acciones y de acuerdo a las prioridades determinadas por cada jurisdicción implicaron las siguientes líneas de trabajo:

La educación temprana

- El diseño de un programa de estimulación temprana encuadrado en un enfoque de educación comunitaria y de participación del grupo familiar, con una propuesta de índole didáctica que favorezca el desarrollo de los aprendizajes tempranos tendientes a favorecer la inclusión del niño en el sistema educativo.
- La elaboración de campañas de sensibilización a las comunidades educativas y a las familias sobre la importancia de la atención integral del infante

Nivel inicial y EGB

- Revisión de las propuestas de enseñanza de la escuela especial y de las estrategias que se implementan para la integración a la escolaridad común.

- Actualización de los criterios de promoción y acreditación de los alumnos con con necesidades educativas especiales.
- Instrumentación de foros de intercambio y consulta focalizados en estrategias pertinentes para la enseñanza y el aprendizaje para alumnos con discapacidad auditiva.
- Producción de materiales de apoyo para la optimización de la utilización pedagógica de las herramientas informáticas con la que ya cuentan las instituciones.

Educación integral del joven y el adulto con con necesidades educativas especiales

- Elaboración de documentos que sugieran estrategias para promover la educación permanente a través de la inclusión de los jóvenes en todos los ámbitos educativos formales y no formales.
- Revisión de las propuestas curriculares de las escuelas especiales de formación laboral.

2005

- • Acompañamiento y monitoreo de los proyectos provinciales.
- • Propuestas de capacitación que sustenten su desarrollo

2006

- • Evaluación conjunta de la marcha de los proyectos.
- • Incorporación de acciones de cooperación horizontal a nivel regional y entre provincias.

2007

- • Verificación de los resultados
- • Ampliación de la cobertura y alcances de las propuestas

3.3.1.3.- Encuentro Nacional 2004.

En relación con los alumnos integrados a EGB 3 y Educación Polimodal se han publicado los siguientes datos estadísticos elaborados por las provincias correspondientes:

Buenos Aires

Alumnos integrados	EGB 3	Polimodal	Total
Discapacidad auditiva	237	149	386
Discapacidad visual	251	111	362
Discapacidad motora	5	1	6
Discapacidad mental	1944	52	1996
Total integrados	2437	313	2750
Total matrícula	566.922	397.405	964.327

Catamarca

Alumnos integrados	EGB 3	Polimodal	Adultos EGB3	Superior	Total
Discapacidad auditiva	3	1	5	-	9
Discapacidad visual	4	-	4	2	10
Discapacidad motora	1	1	-	-	2
Discapacidad mental	2	3	-	-	5
Total integrados	10	5	9	2	26
Total matrícula	20.424	12.051	870	5.057	38.402

Chaco

Alumnos integrados	EGB 3	Media	Polimodal	Total
Discapacidad auditiva	9	6	2	17
Discapacidad visual	4	17		21
Discapacidad motora	1	2		3
Discapacidad mental	10	25		35
Total integrados	24	50	2	76
Total matriculados	16.631	11.607	28.238	

Chubut

Alumnos integrados	EGB 3	Polimodal	Total
Discapacidad auditiva	10		10
Discapacidad visual	20	5	25
Discapacidad motora	2		2
Discapacidad mental	49		49
Total integrados	81	5	86
Total matriculados	23.123	12.577	35.700

Formosa

Alumnos integrados	EGB 3/Polimodal	Adultos	Total
Discapacidad auditiva	2		2
Discapacidad visual	6		6
Discapacidad motora			
Discapacidad mental		1	1
Total integrados	8	1	9
Total matrícula	41.304	3.951	45.255

La Pampa

Alumnos integrados	EGB 3	Polimodal	Total
Discapacidad auditiva	13	4	17
Discapacidad visual	12	5	17
Discapacidad motora	8	11	19
Discapacidad mental	137	2	134
Total integrados	170	22	192
Total matriculados	15.130	8.522	23.652

La Rioja (parcial, Región IV – capital y Sanagasta)

Alumnos integrados	EGB 3/ Polimodal/ media
Discapacidad auditiva	15
Discapacidad visual	7
Discapacidad motora	12
Discapacidad mental	11
Total	45
Total matriculados	16.737

Misiones

Alumnos integrados	EGB 3	Adultos	Total
Discapacidad auditiva	3		3
Discapacidad visual			
Discapacidad motora		1	1
Discapacidad mental		1	1
Total integrados	3	2	5
Total matrícula	43.709	6.779	50.488

Salta (Capital)

Alumnos integrados	EGB 3/ Polimodal
Discapacidad auditiva	8
Discapacidad visual	11
Discapacidad motora	9
Discapacidad mental	-
Total integrados	28
Total matriculados	91.476

San Juan

Alumnos integrados	EGB 3/ Polimodal/ media
Discapacidad auditiva	12
Discapacidad visual	10 (+3 en universidad)
Discapacidad motora	6
Discapacidad mental	3
Total integrados	31
Total matriculados	42.064

Santa Cruz

Alumnos integrados	EGB 3	Polimodal/N. Medio	Total
Discapacidad auditiva	7	3	10
Discapacidad visual	7	3	10
Discapacidad motora	1		1
Discapacidad mental	11	9	20
Total integrados	26	15	41
Total matrícula	10.362	4127	14.489

Santa Fe

Alumnos integrados	EGB 3	Polimodal	Total
---------------------------	--------------	------------------	--------------

Discapacidad auditiva	47		47
Discapacidad visual	14	4	18
Discapacidad motora			
Discapacidad mental	33		33
Riesgo social	44	8	52
Total integrados	138	12	150
Total matrícula	165.812	99.498	265.310

Tierra del Fuego

Alumnos integrados	EGB 3/ Polimodal
Discapacidad auditiva	5
Discapacidad visual	2
Discapacidad motora	
Discapacidad mental	
Total integrados	7
Total matrícula	9766

Cuadro resumen

Alumnos integrados	Total	%
Discapacidad auditiva	506	0,031
Discapacidad visual	481	0,030
Discapacidad motora	61	0,004
Discapacidad mental	2.307	0,142
Total integrados	3.446	0,212
Total matrícula	1.625.904	100,000

Cabe agregar que los números parecen muy por debajo de la población que debe ser objeto de la integración. Si estadísticamente el 7 % de la población total padece un problema de discapacidad, que sobre una matrícula total de 1.625.904 alumnos solamente se encuentren integrados 3.446, o sea un 0,212 % resulta sumamente elocuente sobre la disparidad entre lo que es y lo que debiera ser.

3.3.2.- Dirección Nacional de Programas Compensatorios

En este ámbito la propuesta es que en cada provincia se analice la alternativa de agrupar las escuelas por la posible trayectoria escolar de los alumnos, como una forma de constituir espacios locales orientados por supervisores o equipos técnicos a través de un trabajo sostenido. De esta forma, una red escolar se integra con instituciones de diferentes niveles educativos: Inicial, EGB, Media/Polimodal en las variedades Común, Artística y Especial. O sea que cada escuela forma parte de un agrupamiento que se establece en función de la información disponible, dando cuenta de los recorridos más habituales de los alumnos entre unas y otras.

La Educación Especial es en las redes un eje transversal que atiende a los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales en el conjunto del sistema educativo. **Estos alumnos no pueden ser atendidos sólo desde una institución ni contemplando una sola variable.** La conformación de redes escolares permite garantizar que la escuela especial y la común, sin perder sus especificidades, trabajen en forma conjunta y atiendan a todos los alumnos con necesidades educativas especiales (transitorias o permanentes) **utilizando estrategias pedagógicas innovadoras a fin de lograr el éxito escolar.** La creación de espacios funcionales hace necesario concebir la escuela especial como un nodo más en el trabajo en redes por trayectoria escolar. Y estas políticas compensatorias se traducen en aproximadamente setecientas (700) Escuelas Especiales que, integradas a las redes, reciben un subsidio de aproximadamente seiscientos pesos mensuales (\$600).

Resulta interesante destacar que los programas de Becas que funcionan dentro del esquema de esta Dirección Nacional no contemplan el caso de las discapacidades. Solamente pueden acceder a las líneas de becas aquellas personas discapacitadas que cumplan los requisitos generales.

3.3.3.- Programa de Desarrollo Laboral de Personas con Discapacidad

Este programa merece un capítulo aparte. Depende del área de administración (Subsecretaría de Coordinación Administrativa), y se desarrolla en el Centro de Impresión del Ministerio. Su objetivo es que los discapacitados se incorporen al mundo laboral. Es un programa que se inició en forma casual, cuando hace trece años hubo que constituir el Centro de Impresión. Se consideró una buena idea la incorporación de alumnos de Escuelas Especiales que entonces dependían del Ministerio de Educación. En un primer momento su presencia fue ad-honorem, pero luego de dos o tres años se integró el régimen de pasantías. Hoy se ofrecen 30 pasantías por un lapso de dos años, pudiendo renovarse a cuatro en casos especiales. Los discapacitados perciben ciento cincuenta pesos mensuales (\$ 150.-) por trabajar cuatro horas diarias. Hasta la actualidad se estima que 120 personas discapacitadas prestaron servicios en el Programa, e inmediatamente de finalizada la pasantía se reinsertaron laboralmente 31 personas, 9 de ellas en el ámbito del Ministerio y 22 en empresas privadas.

En el año 2000 lograron integrar un proyecto conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, ONGs, Sindicatos y empresas privadas en busca de actuar articuladamente y entre otras cuestiones obtener una salida laboral para los pasantes. Ese proyecto se denominó

Integrándonos para Integrar, y en el corto tiempo tuvo resultados satisfactorios. Es así que se firmaron convenios (carta intención) con empresas privadas a los efectos de formalizar ese proceso de manera tal de asegurar la salida laboral de los pasantes. Los pasantes sufren en general de deficiencias mentales aún cuando hoy y en forma excepcional, hay dos sordos profundos.

Se debe resaltar que el Consejo Federal de Educación emitió en junio del 2000 la Resolución N° 137, con vistas a articular en las provincias programas similares al del Centro de Impresión.

3.3.4.- Proyecto de Pasantías Laborales para alumnos con Necesidades Educativas Especiales.

En base a la experiencia indicada en el citado programa de desarrollo laboral para personas con capacidades especiales se generó un proyecto cuyas definiciones son las siguientes:

3.3.4.1- Encuadre general del proyecto.

La Resolución del MECyT N° 371701, que crea el Programa Educación Inclusiva con la finalidad de reconocer y garantizar un ejercicio efectivo del derecho a la educación de las personas con discapacidad, promueve el desarrollo de acciones que prioricen la igualdad de oportunidades.

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, desarrolla y financia desde hace doce años, un proyecto de estas características que ha permitido que, más allá de los significativos aprendizajes y cambios conductuales de los beneficiarios, impacta profundamente en cuanto al cambio de mirada que se produce, no sólo en todo el ámbito laboral del Ministerio sino, en el de todas las personas que cotidianamente asisten al mismo para realizar múltiples gestiones. Da cuenta de ello, y a modo de ejemplo, que durante el período 2003/2004 fueron incorporados a planta transitoria por concurso, once pasantes – sobre un cupo total de treinta –, como consecuencia del pedido de los distintos funcionarios que tuvieron la oportunidad de verificar sus capacidades para las funciones que se les encomendaron.

Una de las líneas de acción priorizada por la Coordinación de Educación Especial consiste precisamente en promover en todas las jurisdicciones un profundo replanteo de la propuesta educativa que a hoy ofrecen las Escuelas de Formación Laboral. En este sentido, la inclusión de la pasantía como una instancia educativa más, eleva el nivel de exigencia de la escuela, no sólo en cuanto a su enfoque para el desarrollo de competencias laborales sino también, en otros aspectos educativos generalmente abandonados, relacionados con la Formación Ciudadana, Deberes y Derechos, aspectos ligados a la Salud, la Higiene, el cuidado personal, y a todo aquello que se moviliza a partir de la inserción de los jóvenes en el mundo “real”.

En función de lo antedicho, consideramos que promover en las Provincias el desarrollo de este tipo de acciones se constituye en una herramienta privilegiada para producir modificaciones sociales, culturales y educativas que mejorarán la calidad de vida de los jóvenes con discapacidad.

3.3.4.2.- Características.

- Financiar durante diez (10) meses doscientas cincuenta (250) pasantías distribuidas entre las jurisdicciones que adhieran a la propuesta y presenten los proyectos correspondientes.
- Se prevé abonar \$ 100 mensuales por pasante en concepto de movilidad y viático
- Financiar con \$ 2.000 a la escuela especial de la cual provienen los alumnos con necesidades educativas especiales para componentes de capacitación, producción de materiales e implementación de un espacio curricular específico que acompañe y enriquezca los aprendizajes que implica el desarrollo de la pasantía.

3.3.4.3.- Requisitos para la aprobación de proyectos.

- El proyecto debe estar enmarcado en los términos del Decreto 340/92 que regula el desarrollo de pasantías de alumnos del Sistema educativo.
- El proyecto implica el compromiso del Ministerio de Educación provincial en cuanto a la recepción de los pasantes y la planificación de las actividades y puestos de trabajo.
- El proyecto debe incluir estrategias de articulación con el sector trabajo (Delegación provincial del Ministerio de Trabajo).

- La escuela especial deberá elaborar una propuesta pedagógica que acompañe la experiencia de pasantía a través de la inclusión y desarrollo de un espacio curricular relacionado con el mundo del trabajo.
- La escuela especial deberá planificar acciones de difusión de la experiencia en ámbitos del sector laboral privado.

3.3.4.4.- Condiciones para la presentación de los proyectos.

Las jurisdicciones interesadas en la presentación de este proyecto deberán considerar:

- Relación del proyecto con las políticas educativas y del sector del trabajo de la jurisdicción en cuanto a la inserción laboral de jóvenes con discapacidad.
- Escuela/s que aportarán los alumnos pasantes
- Previsiones de sustentabilidad del proyecto a partir de los dos años de financiamiento a través de fondos de Ley de Cheque.
- Compromiso de cumplimentar los aspectos reglamentarios y legales que rigen la implementación de pasantías.
- Estrategias previstas para promover la extensión de este tipo de experiencia al sector privado del trabajo.

3.3.4.5.- Apoyo y Asistencia técnica del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología a través de la Coordinación de Educación Especial dependiente de la Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente, brindará apoyo tanto al organismo receptor de los pasantes como a la escuela especial de la cual provengan los mismos a través de documentos específicos y de asistencias Técnicas en los casos que se requieran.

3.3.5.- Proyecto “ESCUELAS SOLIDARIAS”.

Cabe consignar que a fines de octubre del 2005 se entregaron premios de la Quinta Edición del Premio Presidencial “Escuelas Solidarias”, que reunió cerca de cuatro mil experiencias realizadas por establecimientos educativos de todo el país. En relación con el tema de la discapacidad, entre los premiados se encontraron:

SEGUNDO PREMIO

ESCUELA	LOCALIDAD	JURISD.	GESTIÓN	NIVEL	TEMÁTICA
EEM N° 3 U. Penit. N°30	Gral. Alvear	Buenos Aires	Estatat	Adultos	Producción de libros en Braille
IPEM N° 50 "Ing. Emilio Olmos"	San Francisco	Córdoba	Estatat	Técnica	Diseño y prod. sillas de ruedas e implementos ortopédicos para discapacitados sin recursos o con necesidades específicas no atendidas por el mercado

PREMIO ESPECIAL DEL INET

ESCUELA	LOCALIDAD	JURISD.	GESTIÓN	NIVEL	TEMÁTICA
Instituto La Salle	San Martín	Buenos Aires	Privada	Técnica	Diseño de viviendas populares adecuadas a personas con capacidades especiales para contribuir a la erradicación de barrios de emergencia

MENCIONES DE HONOR

ESCUELA	LOCALIDAD	JURISD.	GESTIÓN	NIVEL	TEMÁTICA
EET 2 "Luciano Fortabat"	Olavarría	Buenos Aires	Estatat	Técnica	Refacción y rediseño de una calesita a beneficio de una organización de no videntes

3.3.6.- Secretaría de Políticas Universitarias

Desde esta Secretaría se impulsa el Programa Nacional de Becas Universitarias, dirigido en general a:

- Estudiantes universitarios que se encuentren inscriptos en una carrera de grado de una Universidad Nacional o Instituto Universitario, que no estén cursando el último año de la carrera, que no adeuden sólo exámenes finales o tesis, y que no tengan un título previo de grado
- Estudiantes de nivel medio o Polimodal inscriptos para ingresar a la Universidad en 2006.

Los objetivos de este programa son:

- Promover la igualdad de oportunidades y propiciar la calidad educativa en el ámbito de la educación superior, a través de la implementación de un sistema de becas que facilite el acceso y/o permanencia de alumnos de escasos recursos económicos y buen desempeño académico en los estudios de grado.

- Favorecer el acceso y/o permanencia en la universidad de grupos de estudiantes con particulares condiciones de vulnerabilidad (indígenas, discapacitados, mayores de 30 años).
- Contribuir al desarrollo del país, promoviendo la formación de recursos humanos en carreras que resultan prioritarias para una estrategia de crecimiento económico

Los beneficios que ofrece son:

- Beca de \$ 2.500 anuales, en 10 pagos mensuales
- Renovación del beneficio: la beca se podrá renovar cada año, siempre y cuando se cumplan los requisitos postulados por el Programa.

Los requisitos para alumnos discapacitados en el subprograma especial que los contempla son:

- Sin límite de edad.
- Regularidad: tener 2/3 de las materias aprobadas, conforme el plan de estudios.
- Promedio: 4 o más hasta el 30/12/05, contando aplazos.
- Ingresos familiares: no superiores a \$ 1.750
- Documentación adicional: certificado de discapacidad otorgado por la institución correspondiente

El mecanismo de ejecución del programa es:

- **Inscripción:** se realiza exclusivamente a través del formulario electrónico que figura en la página del Programa y dentro de la fecha prevista para la inscripción
- **Preselección:** finalizada la inscripción, se verifica que los postulantes cumplan con los requisitos exigidos por el Programa, y se confecciona un orden de mérito (ranking) conforme al rendimiento académico y la situación socioeconómica.

Posteriormente, se publica en la web el listado de alumnos preseleccionados, a efectos de que éstos envíen la documentación respaldatoria. Además, se publicará el listado en las Secretarías de Bienestar de todas las Universidades.

- **Valuación y Adjudicación:** una vez recepcionada la documentación respaldatoria, se realiza la evaluación definitiva de los postulantes y se convoca una Comisión de Adjudicación, otorgando las becas en función del presupuesto asignado para cada Convocatoria. El listado definitivo de becarios se publica en la página web una vez aprobada la Resolución ministerial y en las Secretarías de Bienestar de todas las universidades. La Comisión de Adjudicación está integrada por representantes de las Secretarías del Ministerio de Educación y por representantes de instituciones gubernamentales tales como el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Comisión

Nacional para la Integración de Personas Discapacitadas, Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, y Consejo Interuniversitario Nacional.

- **Auditorías:** se llevan a cabo auditorías por muestreo en las distintas provincias para constatar la exactitud de los datos aportados por los estudiantes beneficiados y la situación socioeconómica. Esta tarea se realiza de manera conjunta, entre el Ministerio y las universidades nacionales, a través de las Secretarías de Bienestar Estudiantil.

3.4.- SUBUNIDAD DE ANÁLISIS: SECRETARÍA DE CULTURA

El 21 de octubre de 1997 la Secretaría de Cultura emitió la Resolución N° 1656 creando en el ámbito de la Unidad Secretario el Programa para la Integración de personas con discapacidad denominado "integrándonos por la cultura". Dentro de las medidas adoptadas en ese marco se encontraba la Resolución N° 1700 del 23 de octubre del mismo año, donde se disponía exceptuar a los discapacitados del pago de derechos de admisión en los espectáculos que organizara la Secretaría, como así también bonificar al acompañante del mismo en un cincuenta por ciento (50 %). Ese programa tuvo la vigencia limitada al funcionario de turno, no registrando continuidad su labor.

Se cumplen acabadamente los porcentajes exigidos por ley de contratación de discapacitados enfocados en los ciegos y disminuidos visuales que integran la Banda Sinfónica de Ciegos y el Coro Polifónico Nacional de Ciegos Carlos Roberto Larrimbe. Respecto de estos organismos podemos mencionar en relación con el primero de ellos que si bien se suele indicar que los orígenes de la Banda Sinfónica de Ciegos se remontan al 1939, año en el que el maestro Pascual Grisolia comenzó con los cursos de la Escuela de Instrumentos de Vientos para Ciegos con diez alumnos, su primera presentación en público fue el 15 de octubre de 1947, concierto que significó también el debut de la primera y única Banda Sinfónica de Ciegos en el mundo.

La Banda cuenta actualmente con más de 50 músicos, y su repertorio actual excede las 250 obras, entre las que se destacan composiciones de Mozart, Schubert, Liszt, Debussy, Bartók, Beethoven, Haëndel y de otros creadores desde el barroco hasta hoy, incluyendo autores argentinos como Aguirre, Gianneo, Gilardi y Piazzolla. El extenso trabajo desarrollado por la Banda Sinfónica tiene un reconocimiento internacional, a tal punto que obtuvo el premio C.A.M.U otorgado por la UNESCO.

Carlos Roberto Larimbe creó en 1947 el Coro Polifónico de Ciegos que hoy lleva su nombre. El Coro Polifónico Nacional de Ciegos Carlos Roberto Larimbe está conformado íntegramente por más de 70 personas totalmente ciegas o con un nivel avanzado de disminución visual, incluyendo su director, con el apoyo de un dictante, una secretaria técnica y dos auxiliares administrativos. Para ingresar al Coro es imprescindible tener conocimientos musicales, un mínimo de técnica vocal y un buen manejo de la escritura y de la musicografía Braille, ya que respecto de los coros de personas con visión normal, la única diferencia está dada en que los coreutas trabajan con partituras escritas en notación Braille, para lo cual el Coro cuenta con un cuerpo de copistas.

Desde 1971 el Coro Polifónico Nacional de Ciegos solemniza las celebraciones litúrgicas oficiales de la Catedral de Buenos Aires, a las que asiste el Presidente de la Nación, el cuerpo diplomático e invitados especiales. Cantó las misas celebradas en nuestro país por el Papa Juan Pablo II en 1982 y 1987. Su trayectoria ha sido reconocida con varios premios.

En resumidas cuentas, ambos organismos han permanecido en el tiempo a partir de más allá de las decisiones políticas de los funcionarios de turno, gracias a su producción artística y no como parte de una estrategia global en el tema de la discapacidad

Cabe acotar que el sitio en Internet de la Secretaría de Cultura no incluye, como lo hacía en el año 2004 y anteriores, una versión en audio para no videntes y disminuidos visuales.

3.5.- SUBUNIDAD DE ANÁLISIS: INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO

En el año 2002 el directorio del Instituto declaró el 21 de septiembre del Día Nacional del Teatro Integrado. Esta declaración pudo ser compatibilizada con la ley N° 25.346 del 25 de octubre de 2000, que declaraba el 3 de diciembre como Día Nacional de las Personas con Discapacidad, y establecía además que los organismos estatales responsables de la atención a las personas con discapacidad, elaborarán juntamente con los del área de Educación, Cultura y Deporte, los programas a implementarse en relación con dicha declaración. Se realizó además en el Teatro Nacional Cervantes un festival teatral organizado por el Instituto en el que se encontraban involucradas ONGs de discapacitados.

Todas estas medidas se tomaron en forma autónoma, a impulso de ONGs interesadas en el tema, pero omitiendo otros organismo del Estado como la CoNADis.

3.6.- SUBUNIDAD DE ANÁLISIS: SECRETARÍA DE DEPORTES

Mas allá del auspicio de actividades deportivas que involucran a discapacitados, en el Plan Nacional del Deporte Social encontramos el Programa Nacional de Inclusión Deportiva, donde se desarrollan se encuentran los Proyectos "Nacer" y "Deporte y Asma".

Institucionalmente estos proyectos se encaran desde la Dirección de Actividades de Extensión de la Secretaría de Deportes de la Nación. El principal objetivo de esta dirección es promover actividades dirigidas a toda la comunidad e implementar campañas de divulgación, promoción y orientación respecto del deporte y la actividad física como medios de educación y salud, en la continua búsqueda de una mejor calidad de vida.

Se busca también ejecutar planes y programas sobre promoción del deporte de base y sistematizar datos cuantitativos y cualitativos confiables para optimizar procesos de planificación, organización, dirección y control del deporte de base en el ámbito nacional.

En concordancia con estos objetivos se llevan a cabo entre otros proyectos los ya mencionados "Nacer" y "Deporte y Asma".

3.5.1.- Proyecto Nacer

Este proyecto busca brindar a las personas minusválidas psíquicas la posibilidad de crecimiento personal y social a través del trabajo en dos grandes áreas: iniciación deportiva y vida en la naturaleza. Del mismo participan niños minusválidos psíquicos de 8 años en adelante que tengan control de esfínteres y está dirigido a instituciones, escuelas, asociaciones de padres o particulares. Participan además los grupos familiares a fin de reforzar vínculos más sanos, generar mejor y mayor comunicación familiar y estimular el apoyo de actividades nuevas.

3.5.1.1.- Objetivos del proyecto

En el Plan Nacional del Deporte Social se indican los siguientes objetivos específicos de este proyecto:

- Estimular las capacidades coordinativas y físicas para el desarrollo de las diferentes técnicas deportivas y para un mayor autovalimiento en la vida diaria.
- Hacer conocer los diferentes deportes, como ejes formativos-socializadores para potenciar las posibilidades de integración en la sociedad.
- Desarrollar en el medio natural adecuado, formas de preservación y buen cuidado del medio ambiente con independencia y responsabilidad.

3.5.1.2.- Implementación

Se desarrolla en el Centro Recreativo Nacional de Ezeiza, los días sábados de 10:00 a 17:00 horas y cuenta con un número estable de ciento veinte(120) participantes que son dirigidos por profesores especializados. Para optimizar la labor en lo deportivo se agrupa a los participantes por edad motriz y dentro de una franja de edad cronológica adecuada, la primer división se realiza a través de evaluaciones o tests motores que determinan las diferentes categorías.

De esta forma cada uno de los niños se motiva e integra más activamente en las actividades, ya que sus compañeros de grupo tienen similares posibilidades de trabajo, evitando la frustración que se produce al existir marcadas diferencias motoras. Se preparan, además, competencias en los diferentes niveles, partiendo en la categoría más baja de una adaptación de la actividad según las características de los niños, y a medida que se avanza en la categorización se aumenta en el grado de dificultad, agregando mayor cantidad de reglas, llegando en la categoría superior al deporte con todo su reglamento.

3.5.1.3.- Responsabilidad de la Secretaría de Turismo y Deporte:

- Planificación de las actividades y coordinación de las mismas.
- Recursos humanos (profesores de Educación Física)
- Cobertura médica.
- Psicólogo permanente.
- Material didáctico.

- Infraestructura.
- Alimentación (almuerzo y merienda)
- Servicio de seguridad dentro del predio.
- Asignación de cupos.

3.5.1.4.- Responsabilidad de las Instituciones participantes

- Transporte de los niños.
- En caso de ser admitido algún niño con compromiso motor grave, deberá traer un acompañante individual (del mismo sexo) para una mayor posibilidad de integración en las diferentes actividades.
- Ficha personal y ficha médica de cada niño.

3.5.2.- Proyecto “Deporte y Asma”

Si consideramos dentro de la definición de discapacidad las consecuencias del asma bronquial, es válido considerar este proyecto en tanto constituye un enfoque parcializado de las políticas en torno a la discapacidad. Existe en las organizaciones médicas el criterio que sustenta la necesidad de la incorporación de las personas con asma al mundo activo del deporte. Incluso muchos asmáticos han obtenido importantes logros en el deporte de rendimiento. Tal el caso de Mark Spitz, nadador olímpico norteamericano que ganó siete medallas de oro.

El propósito de este proyecto es fomentar la práctica de la actividad físico-deportiva en las personas con asma, desde el punto de vista preventivo y correctivo. Fue creado con el objeto de brindar a niños, adolescentes, jóvenes y adultos asmáticos las respuestas más adecuadas a sus requerimientos e inquietudes, acompañando su rehabilitación e invitándolos a descubrir todas las posibilidades de movimiento que puedan expresar sin mitos ni restricciones.

3.5.2.1.- Objetivos

- Demostrar y transmitir a la sociedad que el asmático puede y debe realizar actividades físicas y deportes, incluso de alto rendimiento, con un control médico adecuado.
- Desmitificar en la familia del asmático, que el niño con asma no puede realizar deportes, a través de charlas didácticas a cargo de los médicos especialistas.

- Lograr una disminución de la severidad y frecuencia de la crisis de asma, para mejorar la calidad de vida, a través de las actividades físicas adaptadas y deportes.
- Permitir a los participantes sentirse socialmente más aceptados y psicológicamente más seguros a través de su participación en actividades físicas en equipos y deportes de conjunto.
- Evaluar en alumnos con asma bronquial, los resultados de un programa de actividades físicas adaptadas, conducente a la introducción del mismo en actividades deportivas.
- Multiplicar el modelo del proyecto en el ámbito nacional, a través de la capacitación profesional, dirigida a Licenciados y Profesores de Educación Física, kinesiólogos y médicos.

3.5.2.2.- Implementación

El Proyecto "Deporte y Asma", que por intermedio de la Dirección de Actividades de Extensión desarrolla la Secretaría de Deporte juntamente con FUNDALER (Fundación para el Estudio del Asma y otras Enfermedades Alérgicas) y UNASMA (Unión Panamericana de Fundaciones de Asma y Alergias), además cuenta con el auspicio del Ministerio de Educación de la Nación y la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología. Se lleva a cabo en las Instalaciones del Ce.N.A.R.D (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), y abre para las actividades físicas y deportivas como promoción para la salud y calidad de Vida, una nueva estrategia de abordaje al paciente con asma.

3.5.2.3.- Áreas

A modo de ilustración y a grandes rasgos, el proyecto consta de las siguientes áreas:

- Actividades Físicas Adaptadas: para individuos con Asma y EPOC, desde los 4 años hasta la Tercera Edad.
- Capacitación y Especialización en Asma y Actividad Física.
- Talleres Interactivos, Cursos, Jornadas, Reuniones Educativas, Mesas Redondas, Conferencias y Congresos, destinados al individuo con asma y su familia.
- Talleres prácticos para docentes y personal auxiliar, sobre: "Control del Episodio Asmático en la Escuela".

- Maestros y Directivos de Escuelas.
- Licenciados y Profesores de Educación Física.
- Kinesiólogos.
- Médicos.
- Planes especiales para deportistas federados y de alto rendimiento con Asma.
- Investigación científica.
- Eventos deportivos nacionales e internacionales.

3.5.2.4.-Organización de la actividad:

La organización se relaciona con quien es el destinatario:

- Área Formativa: niños, adolescentes, jóvenes, adultos y tercera edad que padecen asma.
- Área Alto Rendimiento: deportistas federados que padecen asma.

3.7.- SUBUNIDAD DE ANÁLISIS: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI).

El INTI acaba de constituir el Centro de Investigación y Desarrollo en Asistencias Tecnológicas para la Discapacidad², por lo que para el Observatorio a realizar durante el año próximo se incorporará esta unidad de análisis.

El año pasado, en el marco de las Primeras Jornadas “La tecnología al servicio de los mayores” se anticipó que el Instituto avanzaría en el proyecto de constituir un Centro dedicado a tratar el tema de la discapacidad. El 4 de octubre del corriente se firmó el Convenio por el cual quedó oficialmente constituido el Centro de Investigación y Desarrollo en Asistencias Tecnológicas para la Discapacidad, que cuenta con setenta y cuatro Socios Promotores Fundadores.

Previo a esta instancia formal, durante el transcurso del año se reunieron y trabajaron de manera conjunta con el INTI distintas organizaciones no gubernamentales, empresarios, institutos de rehabilitación, investigadores independientes, asociaciones de profesionales, facultades de distintas universidades, hogares de ancianos y discapacitados y otros agentes oficiales e independientes involucrados y comprometidos en los problemas que afectan a las personas con diferentes tipos de discapacidad.

² <http://www.inti.gov.ar/sabercomo/sc34/inti4.php>

Estos actores están agrupados en diez categorías diferentes, cada una de las cuales estará representada por un miembro titular y uno suplente en el Comité Ejecutivo del Centro. A partir de esta estructura, el Instituto apunta a brindar la cooperación necesaria para articular las acciones con otros organismos en temas que hacen a la rehabilitación de los discapacitados, en el tratamiento de deficiencias auditivas, visuales, cognitivas, motoras, mentales, neurológicas y de trastornos de aprendizaje. Se trata de reunir voluntades y potenciar el trabajo apoyando a la investigación, innovación y desarrollo, producción, difusión y comercialización.

El Centro se propone trabajar de manera interdisciplinaria para seleccionar aquellos problemas en los que resulta prioritaria la intervención y el esfuerzo del sector público.

Los ejes esenciales u objetivos serán la investigación y desarrollo, el apoyo a la producción, la optimización de dispositivos y la certificación voluntaria de calidad, el fortalecimiento de las Pymes del sector y la sustitución de importaciones, educación, capacitación y difusión de información.

4.- UNIDAD DE ANÁLISIS: MENCIONES CONSTITUCIONALES SOBRE LA TEMÁTICA DE LA DISCAPACIDAD

NOTA: Esta unidad de análisis no ha sufrido modificaciones desde su presentación pasada por cuanto no ha habido nuevos casos de reforma o modificación constitucional. Independientemente de esta realidad, cuando veamos el análisis correspondiente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ampliará con más y reciente información acerca de los mecanismos de cobertura del cupo laboral para personas con necesidades especiales. Se realiza esta mención solamente de la Ciudad de Buenos Aires en virtud de su importancia y de que se ha mantenido siempre a la vanguardia del tratamiento del tema discapacidad.

En 1994 se puso en marcha la Reforma de la Constitución a través de la Convención Constituyente que sesionó en la ciudad de Santa Fe, en la nueva redacción de la Constitución Nacional se ha hecho mención a la temática de la discapacidad.

La Nación desde su Constitución se “autoobliga” a respetar derechos personalísimos como son la vida, la salud, la educación, la dignidad, la igualdad, la integridad física, y es el Estado el encargado de remover la mayoría de aquellos obstáculos, por sí o por sus agentes.

En atención a esto es que en nuestra Carta Magna se encuentran, además, incorporados con rango constitucional una serie de Tratados Internacionales que tienen como objetivo dignificar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. A esto se suman muchas otras normas similares, por lo tanto, en nuestro país, no es la escasez de normas el obstáculo para la protección de los derechos de las personas con discapacidad.

Lejos de lo que podría suponerse, contamos en nuestro derecho positivo con un gran número de normas que plasman un ordenamiento coherente y armónico que de cumplirse y efectivizarse, harían más llevadero el desenvolvimiento cotidiano de los discapacitados.

De un modo genérico se puede pensar que toda persona está atrapada como mínimo entre dos instancias discapacitantes: La infancia y la vejez, pero además hay que pensar que si como señalan los especialistas, aproximadamente el 10% de la población estaría

encuadrada en lo que clásicamente se denomina como discapacitados se advierte la importancia que tiene este tema.

De allí que proponemos esta mirada sobre las constituciones, ya que parece de suma importancia evaluar la relación entre la realidad cuantitativa que tiene este tema contra la significación que se le otorga en la normativa vigente.

4.1.- SUBUNIDAD DE ANÁLISIS: CONSTITUCIÓN NACIONAL

La primera mención la encontramos en el artículo 14 bis, en donde se habla sobre los derechos de los trabajadores³, esta mención sobre una cobertura integral e irrenunciable a cargo de la seguridad social, es un concepto que ha servido de base para que se realicen y/o sustenten los pedidos que en tal sentido se presentan a la justicia.

También se deja constancia de la igualdad intrínseca que propone la ley para todos los habitantes y deja sentada la idea de que la idoneidad es la única característica habilitada para plantear una no admisibilidad frente a un empleo⁴.

Se establece el derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, en esto se funda el derecho a la accesibilidad y a contar con todas aquellas ayudas y compensaciones necesarias para permitir el desarrollo de todas las personas que habitan esta Nación⁵.

En lo que respecta a la manera en que pueden reclamarse estos derechos, al final del Capítulo Segundo –Nuevos Derechos y Garantías– se menciona el derecho de toda persona a interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo contra todo acto u omisión de autoridades públicas.

También este derecho puede interponerse contra particulares cuando lesionen, restrinjan, alteren o amenacen –con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta– derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley.

³ Artículo N° 14 bis – Constitución Nacional

⁴ Artículo N° 16 – Constitución Nacional

⁵ Artículo N° 41 – Constitución Nacional

Esta facultad de interponer la acción de amparo también puede usarse contra cualquier forma de discriminación⁶.

En línea con estos conceptos ligados a los mecanismos de reclamo y defensa de intereses, se establece la figura del Defensor del Pueblo, como un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación (este tema se desarrolla en forma específica en el punto 6 de este trabajo).

En el Capítulo IV, Atribuciones del Congreso, en el artículo N° 75, inciso 23, se mencionan en forma explícita como una de las tantas atribuciones que posee el Poder Legislativo, el poder legislar y promover leyes y medidas de acción para garantizar la igualdad de oportunidades, trato y derechos ante la ley⁷.

A continuación veremos como se expresa esta temática en las diferentes jurisdicciones en que se divide el país. Hacemos una mención especial y separada del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en virtud de su particular status.

4.2.- SUBUNIDAD DE ANÁLISIS: CONSTITUCIONES LOCALES

4.2.1- Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ya desde el mismo preámbulo se hace mención, en forma implícita, de la vocación de igualdad que existe en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires⁸ y señala, en forma específica la no admisión de cualquier discriminación que tuviera fundamento –entre otras causas– en caracteres físicos o en la condición psicofísica de las personas⁹.

La Ciudad también ha pensado en las condiciones que deben cumplirse cuando se trate de detenciones de personas con necesidades especiales destacándose que deben asegurarse medidas especiales en atención a su condición¹⁰.

En lo pertinente al área de la Salud, en su Artículo N° 20, asegura que el presupuesto en dicha área debe ejecutar acciones de promoción, protección, prevención, atención y rehabilitación; y que las mismas deben ser gratuitas y realizarse teniendo en

⁶ Artículo N° 43 – Constitución Nacional

⁷ Artículo N° 75 Inc. 23 – Constitución Nacional

⁸ Preámbulo - Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

⁹ Art.N°: 11 - Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

¹⁰ Art. N° 13, inc.7 - Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

cuenta criterios de accesibilidad, equidad, integralidad, solidaridad, universalidad y oportunidad¹¹.

De una manera más explícita la Constitución de la Ciudad Autónoma establece la obligación de la Legislatura de sancionar una Ley Básica de Salud, en la cual garantiza la prevención de la discapacidad y la atención integral de las personas con necesidades especiales¹².

Otro de los aspectos importantes en donde se resalta esta voluntad de no discriminación y de facilitamiento del acceso, se puede ver en lo que respecta al área de Educación¹³, y esta pauta también debe ser contemplada por las personas privadas y públicas no estatales que presten servicios educativos¹⁴.

En el capítulo que reserva para el tema del “Habitat”, la Constitución de la Ciudad, prevé que deberá resolverse en forma progresiva el déficit habitacional estableciendo un breve orden de prioridad donde menciona específicamente a las personas con necesidades especiales de escasos recursos¹⁵:

En el tema Deportes, también hace mención a la necesidad de sostener centros deportivos para todo tipo de personas¹⁶:

En el Capítulo decimotercero, Artículo N° 42, esta Constitución se adentra de lleno en la temática de la discapacidad, al respecto cabe señalar que establece una garantía expresa del derecho a la plena integración, información y equiparación de oportunidades.

También menciona la obligación de desarrollar un hábitat libre de barreras arquitectónicas, urbanísticas y del transporte¹⁷.

Respecto de la relación de la discapacidad con el empleo público, la Constitución establece un cupo del 5% respecto de la planta de personal, pero determina que

¹¹ Art.Nº: 20 – 2º párrafo - Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

¹² Art.Nº: 21 – Inc.7 – Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

¹³ Art.Nº: 24 – Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

¹⁴ Art.Nº: 25 – Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

¹⁵ Art.Nº: 31 – Inc.1 – Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

¹⁶ Art.Nº: 33 – Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

¹⁷ Art.Nº: 42 – Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

el mismo debe conformarse de manera gradual y con arreglo a las leyes que posteriormente determinen el modo concreto en que este punto debe ponerse en práctica¹⁸.

En el último tramo del año han ocurrido algunas modificaciones que aportan mayores precisiones sobre el tema de la cobertura del cupo laboral de personas con necesidades especiales.

En principio se dictó la Ley N° 1502 de fecha 21/10/2004, que regula la incorporación de Personas con Necesidades Especiales al sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En la citada ley se establece que el ámbito dónde debe realizarse la incorporación de las Personas con Necesidades Especiales, el cual está comprendido por:

“...los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, las comunas, los organismos descentralizados, entidades autárquicas, organismos de la seguridad social, las empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado de la Ciudad tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias...

....

En todo contrato de concesión de servicios, de transferencia de actividades del Estado al sector privado, o de renovación y/o modificación de los vigentes se deberán establecer cláusulas que dispongan el cumplimiento y modalidad de control de aplicación de la presente Ley...”¹⁹

También se establece como autoridad de aplicación a la máxima autoridad en materia de Recursos Humanos de cada jurisdicción²⁰; se determina como base de cálculo para el 5% a la totalidad del personal que revista en planta permanente, este cupo porcentual debe incorporarse en un plazo de cinco años, debiéndose llegar al menos al 2% en los dos primeros años.²¹

Se aprueba la creación, en el ámbito de la Comisión para la Plena Participación e Integración de las Personas con Necesidades Especiales (COPINE), del Registro de Aspirantes con Necesidades Especiales.²²

Respecto de la posibilidad concreta de anotarse en el Registro de Aspirantes, la Ley 1.502 determina en forma específica que:

¹⁸ Art.N°: 43 – Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

¹⁹ Art. N°: 2 – Ley N°: 1502 de la C.A.B.A.

²⁰ Art. N°: 3 – Ley N°: 1502 de la C.A.B.A.

²¹ Art. N°: 4 – Ley N°: 1502 de la C.A.B.A.

*“...Las personas con necesidades especiales que aspiren a obtener un empleo en las jurisdicciones y entidades enunciadas en el artículo 2° de la presente Ley podrán inscribirse en el Registro Laboral Único de Aspirantes con Necesidades Especiales, en las formas y condiciones que la reglamentación establezca...”*²³

Por último y como aspecto relevante establece que, hasta tanto no se realicen concursos para el ingreso a Planta Permanente y por tal motivo se realicen Contratos de Locación de Servicios, sobre estos también debe contemplarse la incorporación de al menos un 5% de Personas con Necesidades Especiales.²⁴

La Ley 1.502 fue reglamentada por el Decreto N°: 812/GCBA/05, el cual como punto saliente establece que para el Poder Ejecutivo será la Secretaría de Hacienda y Finanzas a través de la Dirección General de Recursos Humanos como autoridad de aplicación.

También se establecen las multas para las empresas concesionarias que no cumplan con la reglamentación. Dichas multas son:

“... a) la primera vez, con multa de entre pesos quinientos (\$ 500) y pesos mil (\$ 1.000), intimándose a la concesionaria a dar acabado cumplimiento a la normativa aplicable en un plazo de sesenta (60) días; b) la segunda vez, con el porcentaje de multa más alto previsto en el respectivo contrato de concesión, e intimación a dar cumplimiento a la normativa en el plazo de treinta (30) días; y c) la tercera vez, con la rescisión del respectivo contrato. Esta disposición deberá incorporarse a todo pliego de concesión de servicios o transferencia de actividades del Estado al sector privado y/o sus renovaciones o modificaciones a suscribirse a partir de la publicación de la presente..”.

Es importante señalar que en la Dirección General de Recursos Humanos, a través del programa informático que se utiliza en la administración del personal, se habilitó en forma específica un módulo de carga descentralizada para que cada área de personal pueda registrar los agentes con necesidades especiales que se desempeñan en su sector.

A fines de octubre de 2005 se llevaban registrados aproximadamente 150 trabajadores, y cabe destacar que todavía no se había cerrado la etapa de carga, razón por la cual son valores que se estiman modificables con el tiempo.

²² Arts. N°: 9 a 13 – Ley N°: 1502 de la C.A.B.A.

²³ Art. N°: 10 – Ley N° 1.502 de la C.A.B.A.

²⁴ Cláusula Transitoria – Ley N°: 1502 de la C.A.B.A.

En lo que corresponde a la Legislatura de la Ciudad, la Constitución establece entre sus derechos el de legislar y promover medidas que garanticen la igualdad para las personas con necesidades especiales²⁵.

Por último en lo que respecta a este tema, en el Artículo N°: 137, se establece la creación de la figura de la “Defensoría del Pueblo”, al que se le da como mandato, entre otros aspectos, la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos e intereses individuales, colectivos y difusos tutelados en la Constitución Nacional, las leyes y esta Constitución²⁶.

4.2.2- Provincia de Buenos Aires

La Constitución de la Provincia de Buenos Aires no es tan completa como la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero igualmente hace mención a la discapacidad.

El primer punto que señala es la no admisión de distinciones, discriminaciones o privilegios por razones de enfermedades de riesgo o características físicas. También establece el deber de la Provincia de promover un desarrollo integral que garantice la igualdad de oportunidades para todas las personas²⁷.

En el Artículo 36, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que la Provincia promoverá la eliminación de los obstáculos de cualquier naturaleza que puedan impedir el efectivo ejercicio de los derechos y garantías consagrados en dicha constitución. También enumera lo que ella misma designa como “derechos sociales”, entre los cuales se encuentran los referidos a las personas con discapacidad²⁸.

En la Sección Décima (Disposiciones Transitorias) se establece una suerte de promesa de que deberá elaborarse una norma que tratará el tema de las barreras arquitectónicas para las construcciones con acceso al público²⁹.

4.2.3.- Provincia de Catamarca

La primera mención al tema de la discapacidad que se puede encontrar en la Constitución de la Provincia de Catamarca está en el Artículo N°: 44 pero esta expresada en forma explícita.³⁰

²⁵ Art.N°: 80 – Inc.7 – Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

²⁶ Art.N°: 137 – Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

²⁷ Art.N°: 11 – 2° y 3° párrafos – Constitución de la Provincia de Buenos Aires

²⁸ Art.N°: 36 – Inc.5° – Constitución de la Provincia de Buenos Aires

²⁹ Art.N°: 212 – Constitución de la Provincia de Buenos Aires

De una manera más frontal, este tema se ubica dentro de los llamados “Derechos Sociales Generales”. En este artículo (Artículo N° 65) se hace mención a la discapacidad de una manera poco común, se los menciona como “disfuncionados”. Una ley especial regula la problemática integral de las disfunciones limitantes y asegura la operatividad de los derechos reconocidos en este artículo.³¹

En lo que se refiere a la estructura educativa, se menciona que el Consejo General de Educación tendrá bajo su responsabilidad la ejecución de la política educativa para disfuncionados³².

4.2.4.- Provincia del Chaco

Esta Constitución afirma la igualdad de todos los habitantes de la provincia ante la ley y asegura la igualdad de oportunidades señalando que, así como cada uno tiene el deber de contribuir al bienestar común, también tiene el derecho de participar de los beneficios del mismo³³.

En el Capítulo III, sobre los Derechos Sociales, en su Artículo 35, inciso 5°, se hace mención expresa de los derechos que poseen las personas con discapacidad: Educación temprana y especializada, terapia rehabilitadora, y la incorporación a la actividad laboral y social en función de sus capacidades³⁴. También se establece el deber de la Provincia de promover, proteger y reparar la salud de sus habitantes y dictar la legislación que establezca y asegure estos derechos³⁵.

4.2.5.- Provincia de Chubut

La Constitución de la Provincia de Chubut establece la libertad e igualdad para todas las personas que habiten su suelo no permitiendo que se establezcan diferencias ni privilegios enmascarados en cualquier tipo de razón.³⁶

En el artículo siguiente, inscripto bajo el título de “No Discriminación”, se señalan que las diferencias surgidas en función del sexo, la edad o la discapacidad no

³⁰ Art.Nº: 44 – Constitución de la Provincia de Catamarca

³¹ Art.Nº: 65 – Inc.VI – Constitución de la Provincia de Catamarca

³² Art.Nº: 277 – Inc. 1 – Constitución de la Provincia de Catamarca

³³ Art.Nº: 8 – Constitución de la Provincia del Chaco

³⁴ Art.Nº: 35 – Inc. 5° – Constitución de la Provincia del Chaco

³⁵ Art.Nº: 36 – Constitución de la Provincia del Chaco

³⁶ Art.Nº: 6 – Constitución de la Provincia de Chubut

constituyen factores de discriminación y también destaca que de las características emergentes de dichas diferencias el Estado es garante del debido respeto³⁷.

También se establece la nulidad y la imposibilidad de aplicación por parte de los jueces de toda ley, decreto u ordenanza que restrinja el ejercicio de las libertades y derechos que reconoce esa Constitución³⁸.

Más adelante, se menciona en un articulado específicamente dedicado a los derechos concernientes a la discapacidad, como ser: prevención, asistencia, rehabilitación, educación, capacitación, inserción en la vida social y laboral y la promoción de políticas tendientes a la toma de conciencia de la sociedad respecto a sus deberes de solidaridad evitando toda discriminación³⁹.

Cabe señalar que en esta Constitución, de un modo atípico, también legisla sobre la especial protección que se le asigna a lo que sería el reverso de la discapacidad, es decir aquellos casos de personas con altos niveles de capacidad o talentos, a ellos se consigna que el Estado deberá posibilitar, en forma activa, el desarrollo de estas personas y para ello facilitará la educación correspondiente⁴⁰.

En su artículo N°: 80 determina la obligación del Estado de remover todos los obstáculos que impidan el pleno desarrollo de las personas⁴¹.

Continuando con los especiales recaudos que esta Constitución impone, se crea el Ministerio de Pobres, Ausentes, Menores e Incapaces, el cual tendrá, entre otras obligaciones, el deber de defender en juicio a los declarados incapaces⁴².

4.2.6.- Provincia de Córdoba

En la Provincia de Córdoba, ya desde su Preámbulo se establece la reafirmación de la igualdad de las personas como así también se garantiza el ejercicio de sus derechos⁴³. La Constitución, en su articulado hace mención expresa de la igualdad ante la ley y de la no admisión de ningún tipo de discriminación⁴⁴.

³⁷ Art.N°: 7 – Constitución de la Provincia de Chubut

³⁸ Art.N°: 10 – Constitución de la Provincia de Chubut

³⁹ Art.N°: 30 – Constitución de la Provincia de Chubut

⁴⁰ Art.N°: 31 – Constitución de la Provincia de Chubut

⁴¹ Art.N°: 80 – Constitución de la Provincia de Chubut

⁴² Art.N°: 196 – Constitución de la Provincia de Chubut

⁴³ Preámbulo – Constitución de la Provincia de Córdoba

⁴⁴ Art.N°: 7 – Constitución de la Provincia de Córdoba

Esto se ve reforzado por lo expuesto en el capítulo referente a los Derechos Personales⁴⁵. Todos estos conceptos referidos a la igualdad y no discriminación se ven claramente reforzados y explícitamente resguardados en el Artículo N° 27⁴⁶.

4.2.7.- Provincia de Corrientes

No figura ninguna mención al tema de la discapacidad.

4.2.8.- Provincia de Entre Ríos

No figura ninguna mención al tema de la discapacidad.

4.2.9.- Provincia de Formosa

Establece la igualdad para todos los habitantes de la Provincia y prohíbe toda discriminación, aunque es necesario hacer notar que entre las razones que señala como causas prohibitivas de discriminación no se encuentra nombrada a la discapacidad⁴⁷.

Respecto de la discapacidad se hace una mención expresa en su Capítulo IV que trata sobre el Régimen Social, allí se encuentra el Artículo N°: 72 donde se señalan los derechos de los discapacitados⁴⁸.

También hay que destacar que cuando la Constitución de la Provincia de Formosa habla sobre las políticas educativas que se deben llevar adelante en la provincia, determina que deben preverse acciones que aseguren la igualdad de oportunidades y que deben contarse con instalaciones adecuadas para los discapacitados⁴⁹.

4.2.10.- Provincia de Jujuy

Independientemente de la declaración de igualdad que se establece en el preámbulo, la Constitución de la Provincia de Jujuy en su Artículo N° 25 establece la igualdad de los habitantes⁵⁰.

También se señala, en el Artículo N° 48, la garantía de asistencia integral a los discapacitado y se destaca que el Estado debe garantizar los medios para lograr la integración de los mismos a la Sociedad⁵¹.

⁴⁵ Art.N°: 19 – Inc. 3° – Constitución de la Provincia de Córdoba

⁴⁶ Art.N°: 27 – Constitución de la Provincia de Córdoba

⁴⁷ Art.N°: 9 – Constitución de la Provincia de Formosa

⁴⁸ Art.N°: 72 – Constitución de la Provincia de Formosa

⁴⁹ Art.N°: 93 – Inc. 4° – Constitución de la Provincia de Formosa

⁵⁰ Art.N°: 25 – Constitución de la Provincia de Jujuy

⁵¹ Art.N°: 48 – Constitución de la Provincia de Jujuy

En el terreno de las políticas de salud, la Constitución hace una clara mención respecto de las responsabilidades del Estado en cuanto a la promoción, protección, reparación y rehabilitación de la salud de sus habitantes⁵².

4.2.11.- Provincia de La Pampa

La Constitución de la Provincia de la Pampa realiza en su Artículo N°: 6 una fuerte defensa de la igualdad de todos sus habitantes y resalta que no admite ningún tipo de discriminación por condiciones físicas⁵³.

Esta es la única mención que se realiza en el texto constitucional acerca de las personas con necesidades especiales.

4.2.12.- Provincia de La Rioja

La Provincia de la Rioja establece desde su preámbulo una clara definición respecto de la igualdad de todas las personas, también se propone promover la creación de una sociedad justa, libre y exenta de toda discriminación⁵⁴, este planteo se ve reforzado en el resto del texto constitucional, el cual le dedica una artículo específico sobre la igualdad⁵⁵.

También tiene un artículo para las personas discapacitadas, en él la Provincia se obliga a promover políticas de prevención, protección, rehabilitación e integración de aquellas personas con discapacidad⁵⁶.

En lo que respecta a la temática de la Educación, también se resalta que el Estado Provincial asegurará la igualdad de oportunidades para todas las personas⁵⁷.

En relación con las políticas de salud pública, la Constitución establece como responsabilidad del Estado asegurar la salud como derecho fundamental de las personas⁵⁸.

4.2.13.- Provincia de Mendoza

En su Artículo N° 7, se proclama la igualdad de todos sus habitantes. Más allá de lo expuesto, no figura ninguna otra mención al tema de la discapacidad en su texto Constitucional.

⁵² Art.N°: 69 – Constitución de la Provincia de Jujuy

⁵³ Art.N°: 6 – Constitución de la Provincia de La Pampa

⁵⁴ Preámbulo – Constitución de la Provincia de La Rioja

⁵⁵ Art.N°: 21 – Constitución de la Provincia de La Rioja

⁵⁶ Art.N°: 38 – Constitución de la Provincia de La Rioja

⁵⁷ Art.N°: 52 – Constitución de la Provincia de La Rioja

⁵⁸ Art.N°: 57 – Constitución de la Provincia de La Rioja

4.2.14.- Provincia de Misiones

Al igual que muchas otras constituciones, la Constitución de la Provincia de Misiones establece en sus primeros artículos el concepto de igualdad para todas las personas⁵⁹ y luego señala que la Ley debe asegurar el amparo a la incapacidad⁶⁰, más allá de estas menciones, la Constitución no vuelve a tocar el tema de la discapacidad.

4.2.15.- Provincia del Neuquén

La Provincia del Neuquén establece la plena igualdad para todos sus habitantes, también señala que deben removerse los obstáculos de orden económico y social que impidan el pleno desarrollo de las personas⁶¹.

Dentro del Capítulo reservado a las garantías sociales, esta Constitución consigna que la Provincia deberá asegurar a todo trabajador un conjunto de derechos, entre ellos el de la rehabilitación integral de los incapacitados⁶².

En un artículo encuadrado en los temas de la Educación, se hace una mención en referencia a la discapacidad con un lenguaje poco común para estas épocas (*...inadaptados, infranormales y excepcionales...*)⁶³.

4.2.16.- Provincia de Río Negro

En su Preámbulo la Constitución de la Provincia de Río Negro hace su primera declaración sobre la igualdad de todas las personas. Más adelante, realiza una mayor aclaración acerca de cómo deben aplicarse estos derechos y garantías⁶⁴.

Como muchas otras, esta Constitución tiene un artículo especial para el tema de la discapacidad donde se establece –entre otros puntos– el deber de protección, asistencia, rehabilitación, educación, capacitación e inserción en la vida social⁶⁵.

En lo que se refiere a la Política Educativa y su relación con la discapacidad, esta Constitución señala como uno de sus principios la accesibilidad para todas las personas y se asegura la atención a la educación especial⁶⁶.

⁵⁹ Art.Nº: 9 – Constitución de la Provincia de Misiones

⁶⁰ Art.Nº: 37 – Inc. 2 – Constitución de la Provincia de Misiones

⁶¹ Art.Nº: 12 – Constitución de la Provincia de Neuquén

⁶² Art.Nº: 54 – Inc. n) – Constitución de la Provincia de Neuquén

⁶³ Art.Nº: 262 – Constitución de la Provincia de Neuquén

⁶⁴ Art.Nº: 14 – Constitución de la Provincia de Río Negro

⁶⁵ Art.Nº: 36 – Constitución de la Provincia de Río Negro

⁶⁶ Art.Nº: 63 – Inc. 2 y 8 – Constitución de la Provincia de Río Negro

4.2.17.- Provincia de Salta

En su preámbulo, la Constitución de la Provincia de Salta, afirma los valores de igualdad, solidaridad y manifiesta el deber del Estado de proteger la salud de los habitantes y, entre otros derechos, asegurar el acceso a la educación y la cultura⁶⁷.

Más adelante, esta Constitución establece el principio de igualdad de las personas por sobre toda otra condición o circunstancia personal o social, también establece la obligación de los poderes públicos de asegurar las condiciones para que esta “igualdad” no quede como un hecho meramente declarativo y que tenga efectos reales⁶⁸.

La Constitución determina que los poderes públicos deben brindar a los discapacitados la asistencia necesaria aclarando que debe ponerse énfasis en la rehabilitación y en el cumplimiento de las instancias educativas especializadas⁶⁹.

En lo referente al tema de la Salud, establece que el deben cubrirse las necesidades esenciales de las personas⁷⁰, y respecto de la Educación se señala que el Estado sostiene la educación especial⁷¹.

4.2.18.- Provincia de San Juan

En el Capítulo II, dedicado a los Derechos Individuales, la Constitución de la Provincia de San Juan establece que se castigará severamente a toda persona que no respete a sus semejantes y les produzca algún tipo de humillación por cualquier causa⁷².

En la misma línea temática la Constitución establece que el Estado debe asegurar la progresiva eliminación de problemas sociales, económicos, políticos y culturales que afecten a las personas⁷³.

Con referencia al tema de la discapacidad, la Constitución posee un artículo dedicado al tema, en él se obliga al Estado a instrumentar políticas de prevención, protección, rehabilitación e integración, también establece la necesidad de buscar una toma de conciencia por parte de la sociedad⁷⁴.

⁶⁷ Preámbulo – Constitución de la Provincia de Salta

⁶⁸ Art.Nº: 13 – Constitución de la Provincia de Salta

⁶⁹ Art.Nº: 36 – Constitución de la Provincia de Salta

⁷⁰ Art.Nº: 38 – Constitución de la Provincia de Salta

⁷¹ Art.Nº: 49 – Constitución de la Provincia de Salta

⁷² Art.Nº: 19 – Constitución de la Provincia de San Juan

⁷³ Art.Nº: 20 – Constitución de la Provincia de San Juan

⁷⁴ Art.Nº: 56 – Constitución de la Provincia de San Juan

Otro punto interesante para destacar es el regido por el Artículo N°: 59 donde se establece al hogar de familia como inembargable, allí se señala que en toda familia mientras queden menores, mujeres solteras y discapacitado tienen derecho a declarar ese lote ante la autoridad para que el mismo sea inembargable, inenajenable e imprescindible sólo obligado a reconocer el pago de tasas y contribuciones⁷⁵.

En relación al tema de las políticas de Salud, la Constitución de la Provincia de San Juan establece que el Estado debe garantizar el derecho a la Salud a todos los habitantes sin ningún tipo de discriminación ni limitaciones, además deben crearse las condiciones necesarias para garantizar efectivamente este derecho⁷⁶ y sobre las políticas Educativas, se reafirma la igualdad de oportunidades para todos los habitantes⁷⁷.

4.2.19.- Provincia de San Luis

La Constitución establece desde su Preámbulo la igualdad de todas las personas⁷⁸. También determina el deber de respeto y protección de la dignidad e integridad física y moral para todas las personas depositando esta obligación en forma especial en los poderes públicos⁷⁹.

La idea de la igualdad de todos los habitantes se ve reforzada por lo expuesto en el Artículo N° 16, donde además de reafirmar dicha condición, establece que deberán removerse los obstáculos que impidan la efectiva participación de todos los habitantes⁸⁰.

Sobre los discapacitados, la Constitución afirma que los poderes públicos deben brindar la asistencia apropiada poniendo especial énfasis en la rehabilitación y la educación especializada⁸¹.

En el campo de las políticas de Salud, la Constitución garantiza el derecho a la salud para todos los habitantes sin ningún tipo de discriminación ni limitación⁸².

Con respecto a las políticas educativas, la Constitución de San Luis prevé en dos artículos el tratamiento de la discapacidad, en el primero de ellos sostiene y asegura la igualdad de oportunidades haciendo hincapié en la ampliación de las posibilidades de acceso

⁷⁵ Art.N°: 59 – Constitución de la Provincia de San Juan

⁷⁶ Art.N°: 61 – Constitución de la Provincia de San Juan

⁷⁷ Art.N°: 81 – Constitución de la Provincia de San Juan

⁷⁸ Preámbulo – Constitución de la Provincia de San Luis

⁷⁹ Art.N°: 13 – Constitución de la Provincia de San Luis

⁸⁰ Art.N°: 16 – Constitución de la Provincia de San Luis

⁸¹ Art.N°: 52 – Constitución de la Provincia de San Luis

al sistema⁸³ y en el segundo artículo, en uno de sus incisos, estipula la organización del área de Educación Especial orientada a la formación y rehabilitación del discapacitado⁸⁴.

4.2.20.- Provincia de Santa Cruz

La Constitución de esta provincia establece el principio de igualdad de las personas⁸⁵, y recién en el régimen municipal, dentro de las atribuciones de los municipios, se realiza una pequeña mención al tema discapacidad, la que por otra parte resulta ser la única que se hace en el texto constitucional⁸⁶.

4.2.21.- Provincia de Santa Fe

La Constitución de la Provincia de Santa Fe establece la igualdad ante la ley de todos los habitantes de la provincia y, además, determina que incumbe al Estado remover todos los obstáculos para que esta igualdad permita el libre desarrollo de las personas y su efectiva participación en la vida social de la comunidad⁸⁷.

También la Constitución determina que el Estado, respecto de los cuidados médicos, debe crear las condiciones necesarias para asegurar el bienestar de sus habitantes y establece que si una persona estuviese impedida de trabajar y se encontrase con carencias de recursos, tiene derecho a que le sean provistos los medios adecuados a sus exigencias de vida⁸⁸.

En lo referido a la Educación, la Constitución hace una breve mención al destacar la especial atención que a los llamados “atípicos” le dedica el Estado Provincial⁸⁹.

4.2.22.-Provincia de Santiago del Estero

La Constitución de la Provincia de Santiago del Estero afirma desde sus primeros artículos la igualdad de todos las personas⁹⁰, y resalta que todos los habitantes de la Provincia gozan, entre otros, del derecho a la protección de la salud y a la integridad psicofísica⁹¹.

⁸² Art.Nº: 57 – Constitución de la Provincia de San Luis

⁸³ Art.Nº: 73 – Constitución de la Provincia de San Luis

⁸⁴ Art.Nº: 75 – Inc. 6) – Constitución de la Provincia de San Luis

⁸⁵ Art.Nº: 9 – Constitución de la Provincia de Santa Cruz

⁸⁶ Art.Nº: 150 – Constitución de la Provincia de Santa Cruz

⁸⁷ Art.Nº: 8 – Constitución de la Provincia de Santa Fe

⁸⁸ Art.Nº: 21 – Constitución de la Provincia de Santa Fe

⁸⁹ Art.Nº: 109 – Constitución de la Provincia de Santa Fe

⁹⁰ Art.Nº: 2 – Constitución de la Provincia de Santiago del Estero

⁹¹ Art.Nº: 16 – Inc. 2) – Constitución de la Provincia de Santiago del Estero

Todo este planteo de defensa de la igualdad de las personas se ve nuevamente reforzado y ampliado en el Artículo N° 18, en donde no sólo se vuelve a exponer este reclamo de igualdad, sino que además se señala en forma explícita que no se admitirá ningún tipo de discriminación en base a caracteres físicos. En ese mismo artículo se obliga al Estado a procurar la remoción de los obstáculos que, en la práctica, limiten de hecho el pleno desarrollo de las personas⁹².

En lo que respecta a las políticas de Salud, la Constitución asegura a la salud como un derecho fundamental de las personas y garantiza, entre otros puntos, la recuperación y rehabilitación de la salud de los habitantes de la provincia⁹³.

Sobre la temática específica de las personas con necesidades especiales se establece que el Estado Provincial promoverá políticas de protección y deberá implementar políticas de prevención y procurar que la sociedad tome conciencia y adopte actitudes solidarias y, por último, deben dictarse normas sobre la plena accesibilidad para todas las personas⁹⁴.

En Educación, la Constitución garantiza la igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo⁹⁵.

4.2.23.-Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

En esta Constitución se establece el derecho para todas las personas que habitan la provincia a la integridad psicofísica y moral y a la libertad e igualdad de oportunidades⁹⁶.

Sobre la discapacidad, y también la excepcionalidad, la Constitución Provincial establece la protección integral de todas las personas con necesidades especiales, garantizando la asistencia, rehabilitación educación, capacitación e inserción social.

Al igual que la Provincia de Santiago del Estero, la Constitución establece que las construcciones públicas deben realizarse contemplando la accesibilidad en los desplazamientos de los discapacitados⁹⁷.

⁹² Art.N°: 18 – Constitución de la Provincia de Santiago del Estero

⁹³ Art.N°: 21 – Constitución de la Provincia de Santiago del Estero

⁹⁴ Art.N°: 33 – Constitución de la Provincia de Santiago del Estero

⁹⁵ Art.N°: 68 – Constitución de la Provincia de Santiago del Estero

En lo que respecta de las políticas de salud, la Constitución garantiza el derecho a la salud y establece que la Ley de Salud Pública provincial deberá dar prioridad a la asistencia de los distintos tipos de discapacidad⁹⁸.

Sobre la política educativa, el texto constitucional establece que la misma tiene como uno de sus principios el asegurar la educación especial⁹⁹.

4.2.24.-Provincia de Tucumán

La Provincia de Tucumán establece en su constitución que todas las personas tengan el derecho a su integridad psicofísica con una efectiva igualdad de oportunidades, también resalta que el Estado debe brindar protección a los discapacitados buscando su rehabilitación a través de su incorporación al mundo del trabajo de acuerdo a sus capacidades¹⁰⁰.

Sobre el cruce entre políticas educativas y discapacidad, la Constitución de la Provincia de Tucumán solamente señala que el Estado promueve, entre las diferentes modalidades educativas a la Educación Especial¹⁰¹.

Por último, en lo que respecta al tema de la Salud, la Provincia deberá procurar las medidas y recursos necesarios para lograr el mantenimiento, restauración y promoción de la salud de los habitantes de la provincia¹⁰².

⁹⁶ Art.Nº: 14 – Incs. 2º y 4º – Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

⁹⁷ Art.Nº: 20 – Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

⁹⁸ Art.Nº: 53 – Incs. 3º – Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

⁹⁹ Art.Nº: 58 – Incs. 4º – Constitución de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

¹⁰⁰ Art.Nº: 35 – Incs.1º y 5º – Constitución de la Provincia de Tucumán

¹⁰¹ Art.Nº: 123 – Inc.4º – Constitución de la Provincia de Tucumán

¹⁰² Art.Nº: 125 – Constitución de la Provincia de Tucumán

5.- UNIDAD DE ANÁLISIS: EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN

El Defensor del Pueblo de la Nación es una institución creada por la Ley N° 24.284 y su figura adquirió rango constitucional con la reforma de nuestra carta Magna en 1994, al ser incluida en su artículo 86.

Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.

En cuestiones relativas a la situación de las personas con discapacidad que recurren a esta institución, el Defensor del Pueblo de la Nación es y ha sido testigo de la reticencia, confusión y desconocimiento que tanto funcionarios como empresarios manifiestan ante el tema que les compete modificar.

Es por ello que las temáticas denunciadas a la Defensoría por los interesados persisten y se repiten en el tiempo, pues los avances en las soluciones suelen ser lentos.

Es cierto que se ha avanzado algo en el reconocimiento de las barreras a la accesibilidad (sean estas urbanas, arquitectónicas o de transporte) para las personas con movilidad y comunicación reducidas, especialmente a nivel nacional.

Ejemplo de lo anterior es que en una actuación referida a las dificultades de accesibilidad que suponen los largos recorridos y pendientes de las rampas que deben ser transitadas desde las paradas de colectivos hasta los puentes peatonales, esta Institución ha logrado que tanto el Órgano de Control como la empresa concesionaria de la autopista estén cercanos a realizar una “experiencia piloto” en el país. Se instalarán ascensores que permitan que ser una persona con movilidad reducida no sea un motivo de discriminación.

Respecto del transporte ferroviario, se sigue trabajando en la supervisión del cumplimiento de las obligaciones que las empresas concesionarias de los ferrocarriles tienen acerca de la adaptación de sus estaciones y material rodante.

Así también continúa la atención sobre la responsabilidad que le compete en la materia a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y a la Secretaría de Transporte de la Nación.

En tal sentido, se ha recomendado a Trenes de Buenos Aires S. A. y a Transportes Metropolitanos General Roca el estricto cumplimiento de lo dispuesto por la normativa vigente.

Asimismo, se ha dictado un recordatorio de los deberes legales y funcionales en relación a la fiscalización de obras y su correspondiente aprobación a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

Como resultado de todas las acciones emprendidas sin respuestas positivas, este año se inició una demanda contra cuatro de las concesionarias de trenes suburbanos, principalmente por cuestiones relacionadas con la discapacidad, en particular la accesibilidad a estaciones y coches.

Respecto de la adecuación del Transporte Automotor de Pasajeros, si bien el órgano de control - la Comisión Nacional de Regulación del Transporte- ha obstruido la investigación por su reiterada falta de respuestas a pedidos de informe, se ha logrado que dicha Comisión instruya sumarios administrativos a aquellas empresas que no dieron cumplimiento a la adaptación de sus unidades en los tiempos legalmente establecidos.

Más lenta parece ser la toma de conciencia a nivel de autoridades provinciales, donde lo observable es que si bien existe legislación provincial y municipal referida al tema, las situaciones concretas no han sido resueltas o están recién en un comienzo de solución.

La Defensoría ha intervenido tanto de oficio como a petición de interesados en denuncias referidas a las provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Tucumán.

Los temas referidos a estas provincias abarcan falta de accesibilidad a edificios públicos, barreras en los llamados elementos de urbanización, falta de reglamentación de leyes provinciales que impiden que lo normado sea puesto en acto, inaccesibilidad en el transporte y el derecho a libre tránsito y estacionamiento.

La problemática relativa a la discapacidad, desde la creación del Defensor del Pueblo, ha ocupado un lugar preponderante junto con la relacionada a actos de discriminación de diversa índole.

Es así que desde la actual gestión esas cuestiones han comenzado a tratarse dentro de los ejes información, difusión y acciones específicas.

Sabemos que la información es un medio necesario, junto con la difusión y acciones específicas, para hacer de las situaciones problemáticas y dificultosas de los ciudadanos, soluciones conclusivas tendiendo a alcanzar modificaciones estructurales.

En general, los ciudadanos no se encuentran informados sobre los derechos que los asisten y aceptan pasivamente las irregularidades. Para ello, la función del Defensor del Pueblo de la Nación es la de brindar información. Así, la difusión en medios masivos de comunicación contribuye a que los ciudadanos comiencen a interiorizarse acerca de sus derechos y deberes como ciudadanos. De modo que la tríada “información, difusión y acciones específicas” marca el camino hacia un programa eficaz.

Por otro lado, la situación crítica por la que atraviesa el país extiende sus consecuencias a la población de personas con discapacidad agudizando sus dificultades que existen desde siempre.

Estas dificultades son el resultado de la falta de una política integral que contemple las dimensiones socioeconómicas, la salud y la educación.

Un comentario sobre la actuación de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas (CONADIS): entre sus acciones figura controlar el grado de cumplimiento de las leyes vigentes pero en general, remite esta función a los organismos de control como la CNRT y, si éstos incumplen su rol, no merecen sus objeciones. Por otro lado, al ser una comisión asesora que no ejecuta políticas por lo menos debería articular adecuadamente las políticas con y entre los organismos que si lo hacen.

Así ante la carencia de una política adecuada se pueden destacar, entre otras, dos variables: la situación económica y el incumplimiento de las leyes vigentes.

El incumplimiento de las leyes nacionales promulgadas para la protección integral de las personas con discapacidad, fue una constante desde su entrada en vigor.

Su fuerza inercial se hace evidente aún en determinadas acciones que no necesitan de erogaciones. El constante incumplimiento de las leyes tanto nacionales como provinciales, resulta ser el rasgo distintivo de la problemática de la discapacidad en el país. Fallan los controles de los organismos correspondientes dado que implementan una concepción inadecuada de la cuestión de la discapacidad de las personas. La sustitución del derecho de los ciudadanos por el asistencialismo instrumentado de diferentes modos, aún

bajo la utilización de las leyes, funciona como obstáculo y detención de acciones propias para la creación e instrumentación de planes y proyectos que hagan posible la existencia de los derechos de las personas.

Por último, convengamos en que el cumplimiento de las normativas impuestas por la Constitución Nacional, es el eje de la organización de nuestra nación. Por consiguiente, el cumplimiento de las leyes relativas a la problemática de las personas con discapacidad, específicamente la Ley N° 22.431 “Sistema de Protección Integral de las personas discapacitadas” y sus diversas reglamentaciones y modificatorias, deben enfocarse desde la perspectiva de la igualdad de oportunidades y no desde privilegios o excepciones que las victimizan y denigran.

A continuación se analizan algunos casos, pasados y presentes, considerados paradigmáticos de las situaciones descritas con un pequeño comentario alusivo al estado actual del problema:

5.1.- SUBUNIDAD DE ANÁLISIS: BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

5.1.1.- Problemas de accesibilidad

Las quejas presentadas por personas con discapacidad se refieren tanto a edificios públicos como privados, todos de uso público. Esto sin tener en cuenta cuestiones que son de competencia local como ser: bares de confiterías en niveles superiores o inferiores, falta de semáforos para no videntes, aceras rotas, carteles a la altura de la cara, etc. Las provincias deberían adherir por Ley a las disposiciones de la Ley N° 22.431 de “Protección Integral de las Personas Discapacitadas”, pero muchas de ellas no han demostrado voluntad de hacerlo a pesar de los años transcurridos desde la sanción de dicha ley. Ello determina que las quejas relativas a esos niveles se deriven a las respectivas provincias y municipios.

En cuanto al sector público, se destacaron las denuncias sobre edificios inadecuados de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES.

Las autoridades han mostrado reticencia a responder los requerimientos efectuados por esta Institución en tal sentido. Finalmente, informaron que existe un proyecto

para adecuar progresivamente los edificios en los cuales se verifican incumplimientos. La falta de presupuesto, es el argumento utilizado.

De todas maneras, es necesario destacar que los plazos previstos por la normativa que establece la ley sobre Protección Integral de las Personas Discapacitadas, se encuentran ampliamente vencidos. Tal situación determina que el tema siga siendo objeto de seguimiento por esta Institución.

En el segundo grupo, a modo de ejemplo, se mencionan las peticiones recibidas por la falta de adaptación de diferentes edificios (tanto de Capital Federal como del interior del país) en los cuales brindan sus servicios las empresas TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. y AGUAS ARGENTINAS S.A. Todas las actuaciones relacionadas a los incumplimientos de estas empresas se encuentran actualmente en pleno trámite.

5.1.2.- Presunta desatención de los derechos humanos de las personas discapacitadas de la Provincia de Córdoba.

Se inició una actuación de oficio con motivo de una carta de lectores publicada en un diario de la provincia de Córdoba, donde se informaba a la opinión pública acerca de la falta de rampas para el acceso de personas con discapacidad motora al edificio donde residen los Tribunales de Familia de la ciudad capital de la provincia.

La denunciante, de profesión abogada, comunica que ha comparecido en diferentes oportunidades ante el Superior Tribunal de Justicia y el Colegio de Abogados debido a que el edificio donde residen los tribunales de familia carece de rampas, pasamanos a ambos lados de la escalera y, además, cuenta con ascensores en estado de precariedad.

De la respuesta de la Dirección General de Administración del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba surgió que, efectivamente, el edificio donde funcionan los Tribunales de Familia no cuenta con rampas para el acceso de personas discapacitadas que necesitan desplazarse en silla de ruedas.

Ello a pesar de que la provincia de Córdoba, por Ley N° 8501/95, ha adherido a la Ley Nacional de Accesibilidad de Personas con Movilidad Reducida.

En consecuencia, se exhortó al Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba para que, en cumplimiento de la legislación vigente y a fin de lograr que los

edificios en los cuales funcionan tribunales de justicia provinciales se tornen completamente accesibles para las personas con movilidad reducida, se implementen las siguientes medidas: a) realización de un relevamiento que incluya a todos aquellos edificios en los que funcionan tribunales de justicia provinciales; b) verificación de la existencia o no de barreras arquitectónicas que impidan el desplazamiento de personas con movilidad reducida y c) proyecto y ejecución de la adecuación de los mismos a tales efectos.

En respuesta a la misma, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba valoró positivamente el contenido de la exhortación y felicitó al Defensor del Pueblo de la Nación por su consecuente gestión en resguardo de los derechos enunciados en el Art. 86 de la Constitución Nacional.

Por otra parte, en el curso de la misma investigación, esta Institución tomó conocimiento de que en la provincia se encuentra vigente la Ley provincial N° 8624/97 sobre Discapacitados, referida a la creación de la Comisión Provincial del Discapacitado y sus funciones.

Sin embargo, la mencionada Comisión no había sido constituida por faltar la reglamentación de la ley que la crea.

En consecuencia, también se dirigió una exhortación al Ministerio de Asuntos Institucionales y Desarrollo Social de la provincia de Córdoba a efectos de que se arbitren las medidas tendientes a reglamentar la Ley provincial N° 8624/97, con el fin de hacer efectiva la creación de la Comisión Provincial del Discapacitado.

En la actualidad, se continúa investigando el cumplimiento o no de la ley provincial.

5.1.3.- Falta de Rampas y Ascensores

La queja fue presentada por una persona discapacitada, estudiante universitario de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA, quien informa sobre la carencia de rampas y ascensores que permitan acceder a las aulas.

Se cursó informes a la mencionada casa de Estudios, quien respondió que si bien no existe accesibilidad para personas con movilidad reducida se adaptan los horarios de clases a las necesidades de las mismas.

Se requirió informes nuevamente a fin de conocer si existía un proyecto progresivo de adaptación para que los edificios dependientes de esa Universidad sean realmente accesibles para todos los estudiantes. Y, además, se les advirtió a las autoridades que el hecho de adaptar los horarios de clases a las necesidades de las personas con movilidad reducida no sólo es ajeno al espíritu de las leyes que protegen integralmente los derechos de las personas con discapacidad, sino que podría interpretarse como un acto de discriminación.

Luego de reiterados pedidos de informe, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA se expidió sobre el cronograma de obras a realizar.

A fin de hacer el seguimiento del proyecto elaborado por el organismo se solicitó, algunos meses después, que se informara respecto de los avances realizados.

En la respuesta, el organismo afirma “que no se ha avanzado en referencia al tema en cuestión por circunstancias de público y notorio conocimiento...”, aludiendo a la situación social y económica por la que atraviesa el país.

Fue necesario recordarle a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA que la ley sobre Protección Integral de las Personas Discapacitadas, que incluye la accesibilidad, data del año 1981. En efecto, se trata de la ley 22.431 reglamentada en el año 1983 por el decreto 498 y modificada en el año 1994 por la ley 24.314, la cual establece plazos ampliamente vencidos para las adecuaciones arquitectónicas en edificios de uso público.

De lo anterior, resulta que ya en el año 1999, cuando esta Defensoría del Pueblo de la Nación recibió la denuncia respecto de la omisión en la eliminación de barreras arquitectónicas que obstaculizan el derecho a la accesibilidad de las personas discapacitadas, esa Universidad Nacional ya incumplía la normativa vigente.

5.1.4.- Accesibilidad a Casa de Gobierno

En 2005, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, inició una actuación de oficio ante las dificultades existentes para la accesibilidad, de personas con discapacidad, al edificio de la Casa de Gobierno de la Nación, sita en Balcarce 50 de la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, dicho edificio no cuenta con baños adecuados para su utilización por personas con discapacidad.

La ley 22.431 modificada por la ley 24.314 ha establecido un sistema de protección integral de las personas discapacitadas, promoviendo acciones positivas por parte de las autoridades públicas y de los particulares que tienden a neutralizar las desventajas que la discapacidad provoca en aquellos, para ampliar las oportunidades de que mediante su esfuerzo puedan desempeñar, integrados en la comunidad, un rol equivalente al que ejercen las personas que no sufren discapacidad alguna.

El régimen contenido en la ley se ocupa en los artículos 20 a 22 de todo lo relacionado a la accesibilidad al medio físico por parte de las personas con discapacidad, estableciendo en este sentido "... la prioridad de la supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos, arquitectónicos y del transporte que se realicen o en los existentes que remodelen o sustituyan en forma total o parcial sus elementos constitutivos, con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad reducida..." (Artículo 20).

A renglón seguido, la misma norma establece: "... entiéndese por accesibilidad la posibilidad de las personas con movilidad reducida de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía como elemento primordial para el desarrollo de las actividades derivadas de la vida diaria, sin restricciones derivadas del ámbito físico urbano, arquitectónico o de transporte, para su integración y equiparación de oportunidades".

La norma citada en su artículo 21 establece que "... entiéndese por barreras arquitectónicas las existentes en los edificios de uso público, sea su propiedad pública o privada, y en los edificios de viviendas; a cuya supresión se tenderá por la observancia de los criterios contenidos en el presente artículo. Entiéndese por adaptabilidad, la posibilidad de modificar en el tiempo el medio físico con el fin de hacerlo completa y fácilmente accesible a las personas con movilidad reducida... a) edificios de usos públicos: deberán observar en general la accesibilidad y posibilidad de uso en todas sus partes por personas de movilidad reducida; **y en particular la existencia de estacionamientos, reservados y señalizados para vehículos que transporten a dichas personas, cercanos a los accesos peatonales; por lo menos un acceso al interior del edificio desprovisto de barreras arquitectónicas;**

espacios de circulación horizontal que permitan el desplazamiento y maniobras de dichas personas, al igual que comunicación vertical accesible y utilizable por las mismas, mediante elementos constructivos o mecánicos; y servicios sanitarios adaptados”.

Por su parte, el decreto N° 914/97 reglamentó detalladamente los artículos 20, 21 y 22 la Ley N° 24.314, estableciendo en relación a la accesibilidad de edificios con acceso de público de propiedad pública o privada, las adaptaciones que deberán realizarse a efectos de cumplimentar con lo dispuesto por la ley, particularmente en lo que se refiere a solados, puertas, circulaciones, escaleras, rampas y sanitarios.

Procede que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y municipales den mayor impulso a la actividad de que se trata como una expresión más del principio de igualdad supradicho.

En el marco general de la mejora de calidad de vida, nuestra sociedad está experimentando una evolución hacia la integración de las personas con discapacidad, las que a su vez tienen creciente voluntad de presencia y participación en el accionar social y económico.

Los poderes públicos deben fomentar enérgicamente esa actitud con decisiones firmes que faciliten la integración plena de los aludidos conciudadanos.

En última instancia, la necesidad de mejorar las condiciones de movilidad de los mismos, en el devenir cotidiano incumbe al conjunto de la sociedad argentina.

El DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, tiene como una de sus misiones establecidas en la Constitución Nacional garantizar el cumplimiento de las leyes que velan por los derechos de las personas con discapacidad, para posibilitar que las mismas accedan a una vida digna diferenciados por su singularidad como sujetos sin que la discapacidad sea el rasgo que los segregue.

Es función del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, propiciar los derechos de los ciudadanos promoviendo acciones conducentes suprimir los obstáculos que se presenten en situaciones como la precedente en que se pone en juego el derecho de circular, respetando las posibilidades de cada sujeto evitando cuestiones relacionadas con la segregación, en consonancia con los fundamentos expuestos por el PODER EJECUTIVO NACIONAL en el decreto N° 914/97.

Por lo precedentemente expuesto, corresponde recomendar al Poder Ejecutivo Nacional en la persona del Secretario General de la Presidencia a que disponga y ejecute la adecuación de los ingresos a la Casa de Gobierno de la Nación, su

circulación interna, horizontal y vertical, y los sanitarios necesarios, a las disposiciones de la ley N° 22.431, y sus modificatorias y reglamentarias.

5.2.- SUBUNIDAD DE ANÁLISIS: TRANSPORTE

5.2.1.- Transporte Ferroviario

5.2.1.1.- Presunta clausura de accesos a andenes.

Los interesados, miembros del Honorable Concejo Deliberante de Lomas de Zamora y vecinos de Banfield, solicitaron la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación a fin de evitar que la empresa Transportes Metropolitanos General Roca clausure los accesos a los andenes 2, 3 y 4 desde el túnel peatonal subterráneo de la estación Banfield de la provincia de Buenos Aires.

Se realizaron varios pedidos de informes a Transportes Metropolitanos General Roca y a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

También se requirió la opinión técnica de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas Discapacitadas.

Funcionarios de esta Institución realizaron una nueva inspección que permitió corroborar que se mantenía la falta de condiciones de accesibilidad para personas discapacitadas, previstas en el Decreto N° 914/97, reglamentario de las Leyes N° 23.431 y N° 24.314.

Por todo lo expuesto, se recomendó a Transportes Metropolitanos General Roca dar cumplimiento a los siguientes requisitos en todas aquellas estaciones de la Línea General Roca en concesión:

a) ejecutar las obras y proveer los equipos necesarios para el ingreso y egreso de las personas con movilidad reducida - especialmente los usuarios de sillas de ruedas- en las estaciones con desniveles entre la vía pública, la zona de pago y andenes, conforme lo establecido en los Arts. 20 y 21 del Decreto Reglamentario N° 914/97;

b) permitir el ingreso y egreso en forma autónoma y segura y la ubicación en el interior del material móvil de las personas con movilidad y comunicación reducida - especialmente los usuarios de sillas de ruedas -;

c) brindar seguridad durante la permanencia y circulación en los andenes;

d) ubicación en los andenes de zonas de descanso, mediante la colocación de asientos con apoyabrazos y apoyos isquiáticos;

e) brindar información y seguridad en todo el sistema de estructuras fijas y móviles, mediante la adecuada señalización visual, auditiva y táctil;

f) proveer de dos espacios en el interior de cada coche destinados a sillas de ruedas, ubicados en la dirección de marcha del vehículo, con los sistemas de sujeción correspondientes, pudiéndose ubicar en estos lugares, según las necesidades, dos asientos comunes rebatibles;

g) disponer en el interior de cada coche de una zona para los apoyos isquiáticos; la barra inferior del apoyo estará colocada a 0,75 m desde el nivel del piso y la barra superior a 1,00 m desde el nivel del piso y desplazada horizontalmente 0,15 m de la vertical de la barra inferior; se considerará un módulo de 0,45 m de ancho por persona;

h) disposición en el interior de cada coche de pasamanos verticales y horizontales, dos asientos de uso prioritario por parte de personas con movilidad y comunicación reducidas, debidamente señalizados, según la Norma IRAM 3722, con un plano de asiento a 0,50 m del nivel del piso y un espacio para guardar bolsos o cochecitos de bebés, que no interfieran la circulación;

i) adoptar las medidas necesarias para que las máquinas expendedoras de boletos y los molinetes de acceso a los andenes sean totalmente accesibles para personas con movilidad y comunicación reducidas.

Y, además, teniendo en cuenta las fallas descubiertas en relación al control, se recordó a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte sus deberes legales y funcionales respecto a la fiscalización de las obras y a la aprobación de las mismas, en lo que respecta al pleno cumplimiento de la Ley N° 22.431, su modificatoria N° 24.314 y el Decreto 914/97.

Si bien Transportes Metropolitanos General Roca S.A. ha respondido a la recomendación efectuada por esta Institución manifestando su voluntad de realizar las obras necesarias, la actuación aún se encuentra en trámite ante esta Defensoría.

5.2.1.1.- Presunta falta de accesos a andenes en Vicente López.

Presunta violación de los derechos humanos de personas discapacitadas residentes en el partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires.

Se han recibido en esta Institución numerosas quejas relativas a la falta de accesibilidad para personas con movilidad y comunicación reducidas a los medios de transporte ferroviario de las líneas Mitre y Sarmiento concesionadas a Trenes de Buenos Aires S.A. (TBA).

Oportunamente, esta Defensoría había recomendado a la empresa Trenes de Buenos Aires la adopción de diversas medidas como, por ejemplo, la instalación de rampas para el acceso de personas discapacitadas a las estaciones ferroviarias bajo su concesión.

A fin de verificar el cumplimiento de la misma, se efectuaron varias recorridas de inspección en ambas líneas, constatándose la falta de adecuación arquitectónica de las estaciones ferroviarias y del material rodante.

Luego de realizar diversos pedidos de informe a la empresa Trenes de Buenos Aires S.A. (TBA), a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y a la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas y tras una intensa investigación, se decidió recomendar a Trenes de Buenos Aires en idénticos términos que a Transportes Metropolitanos General Roca S.A., que observe el estricto cumplimiento de lo establecido en las normas vigentes, tanto de las obras que deben ser ejecutadas, como así también de aquellas que fueron realizadas incorrectamente.

La empresa TBA se encuentra elaborando las correcciones indicadas.

Esta actuación aún se encuentra en trámite ante esta Defensoría del Pueblo de la Nación.

ACTUALIZACIÓN 2005

El 28/0705 ante los reiterados incumplimientos a las numerosas

recomendaciones realizadas y luego de varias inspecciones durante el transcurso del presente año a diversas estaciones de las diferentes líneas, el Defensor del Pueblo de la Nación presentó un recurso de amparo contra cuatro de las concesionarias y contra el Estado Nacional (Sec. de Transporte), según el sig. detalle:

EMPRESA	JUZGADO N°	SECR. N°	N° EXPED.	FECHA INICIO
Transportes Metropolitanos SA Gral. Roca	3 Dra. Claudia RODRIGUEZ VIDAL	5 Dra. Analía PANDO	23.463/05	28/07/05
Ferrovías SAC	11 Dra. María José SARMIENTO	21	23.466/05	28/07/05
Trenes de Buenos Aires (TBA)	2 Dr. Sergio Gustavo FERNÁNDEZ	3 Dra. Estela ARBERAS	23.469/05	28/07/05
UGOFE SA - Línea San Martín	12 Dr. Guillermo Enrique ROSSI	23	23.473/05	28/07/05

A modo de ejemplo se detalla el resumen procesal de una de las demandas (el resto es del mismo tenor pues los incumplimientos verificados son similares):

Autos: “**DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION C/ FERROVIAS S.A.C. y OTRAS/ amparo ley 16.986**” (expte. N° 23.466/05).

Tribunal interviniente: Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, Secretaría N° 21.

Partes intervinientes:

Actora: Defensor del Pueblo de la Nación.

Demandada: Ferrovías S.A.C. y Estado Nacional (Sec. de Transporte).

Objeto del proceso: La presentación tiene por fin que se condene:

1.- A la empresa **FERROVIAS S.A.C.:** **a.** A brindar a los usuarios del servicio ferroviario explotado por la empresa un servicio digno y eficiente en lo que se refiere a las condiciones mínimas de seguridad e higiene, particularmente en lo que hace al estado general de las estaciones, el estado de los vagones para el uso de personas discapacitadas, de manera tal que las prestaciones conformen las exigencias constitucionales que establecen que los usuarios y consumidores tienen derecho a condiciones de trato equitativo y digno y que las autoridades deben proveer a la protección de esos derechos y a la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y, **b.** A garantizar el normal desenvolvimiento y desplazamiento de las personas discapacitadas en los accesos a los andenes de las estaciones y a las formaciones y también dentro de ellos, dando cumplimiento al mandato contenido en el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional y a lo normado en la Ley N° 24.314;

2.- Al **ESTADO NACIONAL - SECRETARIA DE TRANSPORTE** para que ejecute los controles y acciones necesarias para que la empresa codemandada cumpla debidamente con las obligaciones emergentes del contrato de concesión; como así también a

que una vez que se haga lugar a este amparo extienda los controles necesarios para garantizar el efectivo acatamiento de la sentencia que se dicte en autos.

Todo ello en el término que fije V.S. y bajo apercibimiento de la aplicación de sanciones económicas que disponga el Tribunal.

Ampliación del Objeto de la demanda: “...Así pues con independencia de la petición de condena que fue expuesta en el escrito de inicio, mi parte solicita, asimismo, que se condene al ESTADO NACIONAL **para que lleve adelante todas las acciones positivas que en el ejercicio de las competencias específicas resulten necesarias para garantizar que la prestación del servicio ferroviario se brinde con calidad y eficiencia, de conformidad con lo normado por el artículo 42 de la Constitución Nacional, y a lo dispuesto por la Ley 24.314, de modo tal que se tutelen los derechos de los usuarios en general y de las personas con discapacidad en particular, de acuerdo a lo expuesto en el escrito de demanda...**”

5.2.2.- Transporte Automotor de Pasajeros

5.2.2.1.- Inconvenientes de las personas que se desplazan en sillas de ruedas para ascender y descender de los vehículos de Transporte Automotor de Pasajeros.

Se continuó con la investigación iniciada en años anteriores. Vencido el plazo estipulado por la Resolución 420/98 de la Secretaría de Transporte, referido a la obligatoriedad para hacer efectiva la colocación de los dispositivos mecánicos previstos para las unidades de piso bajo y semibajo del Transporte Automotor de Pasajeros, se cursó un pedido de informe a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

El organismo requerido adjuntó un listado de aquellas empresas que no dieron cumplimiento a lo establecido por los Decretos Nros. 914/97, modificado por su similar 467/98 y la Resolución S.T. N° 426/98.

A las mismas se les ha iniciado sumario.

La presente investigación se ha visto obstruida por la reiterada falta de respuesta de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.

Respecto al Transporte Automotor Colectivo de Pasajeros, en el inicio del año 2002 fue necesaria la intervención de esta Defensoría ante el dictado, por parte de la SECRETARÍA DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN, de la Resolución N° 3/2002 mediante la cual nuevamente se suspendió la obligación de incorporar las unidades de piso bajo para el transporte automotor público colectivo.

Con dicha Resolución se eludió, una vez más, lo dispuesto por el Decreto 467/98 respecto de la obligación de incorporación progresiva de unidades de piso bajo. Por ello y ante la falta de respuesta de la COMISIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE se promueve demanda una judicial ordinaria contra la SECRETARÍA DE TRANSPORTE. Estado de la demanda: Autos: “DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION C/ ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE PLANIFICACION - SEC. DE TRANSPORTE S/ PROCESO DE CONOCIMIENTO” (expte. N° 52.143/03).

Tramita en el Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 4, Secretaría 7.

La presentación tiene por fin que se condene al demandado al inmediato y efectivo cumplimiento de la Ley N° 22.431, modificada por la Ley N° 24.314, concretamente, lo dispuesto en su artículo 22, en cuanto obliga a las empresas de transportes de pasajeros de jurisdicción nacional a incorporar gradualmente unidades especialmente adaptadas para el transporte de personas con movilidad reducida.

Asimismo, y para el caso que la demandada dicte en el decurso de este proceso cualquier norma que importe la prórroga o suspensión de los objetivos de la ley (artículo 22 Ley N° 22.431, t.o.), que se declare su ilegitimidad. Luego de trabada la litis, el juzgado interviniente dispuso la apertura a prueba de dichos obrados.

Es dable señalar que existen 135 líneas de colectivos, con un parque total de 8827 coches de los cuales sólo 1298 (el 15% del total) están adaptados para discapacitados. (Datos de 2004).

Solamente cabe remarcar que cuando el Estado dificulta o impide - según el caso- el derecho de las personas con movilidad y/o comunicación reducida al indispensable uso del transporte público automotor de pasajeros, también dificulta o impide el ejercicio del resto de sus derechos generales y específicos, conculcando en particular los derechos a la

equiparación e igualdad de oportunidades, violando normas constitucionales y generando cotidianamente mayor exclusión social.

5.2.2.2.- Desconocimiento por parte de empresas de transporte público de los pases libres.

Se presentaron varias solicitudes telefónicas y escritas pidiendo la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación ante la irregularidad en la que incurrían varias empresas de Transporte Automotor Público Colectivo de Pasajeros al negar el derecho al tránsito de aquellas personas que, por su discapacidad, utilizan pases libres de transporte. Así también, se verificaron denuncias respecto a la negativa de estas empresas de expedir el respectivo boleto ante la presentación del pase otorgado por la Subsecretaría de Transporte Terrestre del Ministerio de Infraestructura y Vivienda.

El artículo 20 de la Ley N° 22.431 - Sistema de Protección Integral de Personas Discapacitadas- establece: “Las empresas de transporte colectivo terrestre sometidas al contralor de la autoridad nacional deberán transportar gratuitamente a las personas discapacitadas en el trayecto que medie entre el domicilio del discapacitado y el establecimiento educacional y/o de rehabilitación al que deban concurrir. La reglamentación establecerá las comodidades que deben otorgarse a los discapacitados transportados, las características de los pases que deberán exhibir y las sanciones aplicables a los transportistas en caso de inobservancia de esta norma”.

Es competencia de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte proteger los derechos de los usuarios e intervenir sin demora cuando considera que algún acto o procedimiento de una empresa sujeta a su jurisdicción es violatorio de normas vigentes (Decreto N° 1388/96).

Esta Defensoría del Pueblo de la Nación reclamó a ese organismo de control el cumplimiento de su deber de fiscalización, en concordancia con lo dispuesto por el Decreto N° 1395/98 referido al Transporte Automotor de Pasajeros - Régimen de penalidades por infracciones a las disposiciones legales y reglamentarias en materia de transporte por automotor de jurisdicción nacional.

La falta de intervención del organismo de control involucrado implicó un incumplimiento de sus deberes legales y funcionales respecto a la fiscalización para garantizar la adecuada protección de los derechos de los usuarios.

Por todo lo expuesto, se le **recordó** a la C.N.R.T. **sus deberes legales y funcionales** respecto a la fiscalización y control del transporte así como a la aplicación de las sanciones previstas, a fin de garantizar la adecuada protección de los derechos de los usuarios con movilidad y comunicación reducidas, tutelados por la Ley de Orden Público N° 22.431 y los arts. 14 (derecho a transitar libremente), 16 (derecho a la igualdad) y 75 inc. 23 de la Constitución Nacional (igualdad de oportunidades).

Dicha Resolución fue puesta en conocimiento de la Secretaría de Transporte. Se recibió una respuesta positiva de la C.N.R.T.

Si bien la problemática fue resuelta favorablemente por esta Institución en el curso del año 2003, sumado a que el sistema obtuvo una mejora sustancial con el dictado del Decreto N° 38/04 y la irregularidad en el otorgamiento de pases no está generalizada, la problemática aún persiste aisladamente. Por ello, es esencial continuar con el trabajo de difusión que esta Institución ha emprendido, orientado a brindar información a los ciudadanos sobre sus derechos. De la misma manera, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN continuará su tarea de recordar a los organismos y empresas involucradas cuáles son sus obligaciones al respecto.

5.3.- SUBUNIDAD DE ANÁLISIS: DISCRIMINACIÓN POR DISCAPACIDAD

De acuerdo con lo informado por el INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN (INADI), la discriminación por motivos de discapacidad ocupa el segundo lugar en el número de reclamos recibidos por esa institución, detrás de los relativos a cuestiones raciales.

Se detallan algunos de los temas de las actuaciones trabajadas:

5.3.1.- Derecho de admisión y otros similares.

- I. el abusivo empleo del Derecho de Admisión en escuelas, universidades privadas, confiterías bailables y otros. En estos casos se da intervención al INADI.
- II. la denegatoria a otorgar la ciudadanía a una persona de nacionalidad chilena que residió en el país durante casi toda su vida por tener una discapacidad mental.
- III. la denegatoria de ingreso a una escuela primaria provincial, por parte de sus autoridades educativas.

Ante esta problemática la intervención del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN ha contribuido positivamente a través de las demandas de los ciudadanos destacando las tergiversaciones del espíritu de las leyes que fueran cometidas por distintos organismos. Otros ejemplos:

5.3.2.- No otorgamiento de crédito.

Negativa al otorgamiento de un crédito por ser no vidente, por parte de las autoridades del Banco Francés

Un interesado planteó haber sido objeto de discriminación por parte de Credilogros (Banco Francés) que le negó el otorgamiento de un crédito en razón de su condición de no vidente.

Señaló que tal actitud de la Entidad en modo alguno puede atribuirse a su solvencia económica ya que respecto de ella ni siquiera se le formuló pregunta alguna.

A los efectos de la investigación de los hechos descriptos, se requirieron los pertinentes informes a la Gerencia de Créditos de Credilogros y al Banco Francés.

La Entidad respondió que, cuando se presenta una persona no vidente a gestionar un crédito, se le solicita un codeudor que pueda leer, aceptar y firmar la documentación requerida para el otorgamiento del mismo.

Se le solicitó al Banco Central de la República Argentina que se expida al respecto.

Mediante la respuesta se informó a esta Institución que las normas emanadas del Banco Central de la República Argentina no hacen distinciones de índole alguna en materia de realización de operaciones con entidades financieras por parte de personas con alguna discapacidad física, siendo aplicable, cuando corresponda, lo previsto en la legislación de fondo.

Es decir, quedan exceptuados, según el Código Civil, las personas declaradas incapaces, las personas por nacer, los menores impúberes, los dementes y los sordomudos que no saben darse a entender por escrito.

Es claro que los no videntes no son personas incapaces conforme lo dispone el Código Civil.

Si bien resulta razonable que las entidades bancarias que suscriben contratos de préstamo en dinero con personas no videntes no inhabilitadas adopten algún tipo de resguardo en orden a la seguridad jurídica de los negocios, no lo es menos sostener que resulta excesivo y discriminatorio requerir un codeudor, cuando habitualmente no se toma ese recaudo con personas videntes.

Ello da cuenta suficiente de que, aunque una persona ciega disponga de capacidad económica suficiente para hacer frente a un crédito, se le exige un codeudor. Esto produce un agravamiento en las condiciones de contratación, cuando en realidad lo que se debe tener en cuenta es la facilitación del conocimiento fehaciente de tales condiciones.

Este pleno conocimiento se puede obtener por otros medios como, por ejemplo, utilizando contratos impresos en escritura Braille o también dejando constancia notarial de que el no vidente tomó conocimiento de las condiciones del contrato.

En base a tales alternativas, la Defensoría recomendó al Banco Central de la República Argentina que disponga de mecanismos no discriminatorios que garanticen la seguridad jurídica tanto de los bancos como de los clientes no videntes.

La Entidad respondió positivamente a la recomendación efectuada, acompañando copia de la Comunicación "B" 6572 dirigida a las entidades financieras,

mediante la cual recuerda a las entidades financieras que “las normas emitidas por ese Banco no hacen distinciones de índole alguna en materia de realización de operaciones con personas que presenten alguna discapacidad física”.

5.3.3.- Automotores con franquicia para discapacitados: Síndrome de Down.

Servicio Nacional de Rehabilitación. Discriminación de las personas discapacitadas con Síndrome de Down.

Esta Institución ha recibido, desde el año 1999, gran cantidad de denuncias referidas al no otorgamiento, a pacientes con Síndrome de Down, del beneficio que, según la ley 19279 y su reglamentación, les corresponde a las personas con discapacidad. Esto es, adquirir un automóvil nacional o importado con franquicias.

Los denunciantes residen tanto en el interior del país como en la Capital Federal.

La investigación incluyó varios pedidos de informes al SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION Y PROMOCION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD, al MINISTERIO DE SALUD y a la COMISION NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Se realizaron reuniones informativas y aclaratorias con directivos, abogados y médicos del Servicio, a fin de transmitir la preocupación del DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION por lo que podría configurar un acto de discriminación dentro de la discapacidad.

Asimismo, se advirtió a la Subsecretaría de Programas de Prevención y Promoción del MINISTERIO DE SALUD de la marcha de la investigación.

En un principio se dudaba de la frecuencia con la que el Servicio denegaba el beneficio a pacientes con Síndrome de Down.

En una segunda etapa, las autoridades reconocieron que sólo le otorgan el beneficio a este tipo de pacientes si, además, sufren una enfermedad concurrente.

Evaluando los casos presentados ante esta Institución, se sospechó que las personas con patologías mentales, y específicamente los pacientes con Síndrome de Down rara vez obtienen el beneficio.

Se solicitó al Servicio que informara al respecto, presentando las estadísticas de beneficios otorgados y denegados.

Ante la respuesta recibida en el sentido de la imposibilidad de informar al respecto, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN recomendó al SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION Y PROMOCION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD que arbitre los medios necesarios para realizar estadísticas que permitan conocer la cantidad de beneficios solicitados y otorgados a personas con Síndrome de Down.

El organismo requerido respondió a la recomendación y, entre otras informaciones, precisó que en el año 2000 se entregaron 1949 franquicias a personas con distinto tipo de discapacidad. De ellas CIENTO CATORCE (114) fueron solicitadas por padres de personas Down. Solo OCHO (8) fueron concedidas.

A pesar del argumento sostenido por el Servicio mencionado, en relación a que el beneficio se otorga cuando, además del diagnóstico de Síndrome de Down existen complicaciones motoras, esta Defensoría ha verificado que tal información es inexacta.

La inspección realizada en el organismo, con el objetivo de examinar expedientes, permitió corroborar la falta de criterios conducentes tanto en los otorgamientos como en las denegatorias.

También, en el curso de la investigación quedó claro que la aplicación que la autoridad hace de la ley 19.279 se basa en una posición reduccionista en la cual se privilegia el discurso médico, restringiendo así el concepto de discapacidad imperante en las normas nacionales. Y, ello, en desmedro de aquellas personas discapacitadas mentales.

Es decir, a la persona con Síndrome de Down se le exige otra patología para equipararla a otras personas con discapacidades.

También se tomó conocimiento que la Junta Médica, única autoridad con atribuciones “calificadas” para decidir sobre el derecho del solicitante a que se le facilite la adquisición del automóvil, en muchas ocasiones no evalúa al paciente.

Sucede con mucha frecuencia que mediante la lectura de una planilla médica que acompaña al diagnóstico y que en ocasiones precisa claramente la imposibilidad o las dificultades que el solicitante presenta para viajar en transporte público, la mencionada Junta deniega el beneficio.

Si bien la decisión administrativa puede ser apelada, en definitiva es siempre el Servicio quien toma la decisión, ya que los funcionarios que dictaminan sobre el recurso de alzada ante el MINISTERIO DE SALUD ni siquiera conocen las patologías. Son abogados, no médicos.

En consecuencia, la última instancia administrativa a la que se puede apelar ratifica lo dicho por la Junta Médica.

El peticionante, además de estar desprotegido, pierde su tiempo en trámites puramente burocráticos.

En concordancia con lo investigado, la Defensoría concluyó que el SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION Y PROMOCION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD realiza una aplicación parcial y arbitraria de la ley 19279, sus modificatorias y decreto reglamentario.

De esa forma, un organismo dedicado a la atención de la discapacidad cae en la paradoja de limitar el derecho a la integración social, a la educación, a la rehabilitación, a la salud y a la recreación de muchas personas con discapacidad.

Como resultado no buscado, se atenta contra el principio de equiparación de oportunidades específicamente reconocido a las personas con discapacidad como medio para compensar las desventajas producidas por la situación discapacitante.

En consecuencia, esta Defensoría recomendó al MINISTRO DE SALUD DE LA NACION que arbitre todos los medios que sean necesarios para dar fin a la parcial y arbitraria interpretación que hace de la ley 19279 y sus modificatorias el SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION Y PROMOCION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD y que, por otra parte, sean reconsiderados aquellos casos de personas con diagnósticos de patologías mentales a los que se les ha denegado el beneficio, a fin de subsanar la restricción discapacitante que se ha agregado a esas personas y a sus familias.

En concordancia con lo expuesto, el Instituto Nacional contra la Discriminación (Opinión N° 162/01) entiende "*... que los hechos aquí expuestos, encuadran en una actitud discriminatoria... (Ley 24.515)*"

La respuesta que el MINISTERIO dio a la recomendación fue altamente positiva: acordó con los criterios sustentados por el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, opinando que el Servicio investigado “sólo toma en consideración la capacidad motora de los requirentes, circunstancia que amerita nueva evaluación conforme letra y espíritu de la ley”.

No obstante, este año se ha recibido una nueva queja en tal sentido (Actuación DPN N° 2966/05). Por ello, no puede considerarse como superada dicha situación de discriminación.

5.3.4.- Incumplimiento por falta de reglamentación de la Ley 25.689 modificatoria del artículo 8° de la Ley N° 22.431 (cupó 4%).

Persiste aún el incumplimiento de la Ley N° 25.689, modificatoria del artículo 8° de la Ley N° 22.431, que dispone un cupo del cuatro por ciento reservado para el empleo laboral de personas con discapacidad en el Estado Nacional, sus organismos descentralizados o autárquicos los entes públicos no estatales, las empresas del estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos. Cabe mencionar que desde la creación de esta ley este artículo nunca fue cumplido en su totalidad. Es más, en la actualidad y debido al congelamiento de vacantes, parece como de imposible cumplimiento. No obstante, esta Institución ha logrado para casos puntuales el cumplimiento de dicha ley.

Según datos suministrados por el INDEC el 92% de los discapacitados **en condiciones de trabajar** están desocupados y sólo el 1% del total tiene relación de empleo público. Por lo tanto, si este cupo se cumpliera cabalmente habría ocupación plena de este sector social.

Finalmente se ha efectuado una recomendación por Res. N° 42/04 al SUBSECRETARIO DE LA GESTION PUBLICA para que a la brevedad y sin dilaciones arbitre los medios necesarios a efectos de que sea reglamentada la Ley nacional N° 25.689.

Se resumen los considerandos de la recomendación señalada:

La Ley N° 25.689 establece: “El Estado Nacional - entendiéndose por tal los tres poderes que lo constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos- están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas. El porcentaje determinado en el párrafo anterior será de cumplimiento obligatorio para el personal de planta efectiva, para los contratados cualquiera sea la modalidad de contratación y para todas aquellas situaciones en que hubiere tercerización de servicios”.

A ello agrega que “... Asimismo, y a los fines de un efectivo cumplimiento de dicho 4% las vacantes que se produzcan dentro de las distintas modalidades de contratación en los entes arriba indicados deberán prioritariamente reservarse a las personas con discapacidad que acrediten las condiciones para puesto o cargo que deba cubrirse. Dichas vacantes deberán obligatoriamente ser informadas junto a una descripción del perfil del puesto a cubrir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos quien actuará, con la participación de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas, como veedor de los concursos. En caso de que el ente que efectúa una convocatoria para cubrir puestos de trabajo no tenga relevados y actualizados sus datos sobre la cantidad de cargos cubiertos con personas con discapacidad, se considerará que incumplen el 4% y los postulantes con discapacidad podrán hacer valer de pleno derecho su prioridad de ingreso a igualdad de mérito...”

Varias personas han acudido a esta Institución en reclamo de su incorporación a la Administración Pública, de sus respectivas localidades, en virtud de la situación discapacitante que en cada caso acreditan mediante los pertinentes certificados de discapacidad emitidos por la autoridad competente del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN, conforme lo normado por el Art. 3° de la Ley N° 22.431.

Con el dictado del decreto N° 498/83 se reglamentó el artículo 8° de la Ley N° 22.431, disponiendo que: “El cómputo del porcentaje determinado resultará de aplicación para lo futuro, debiendo considerarse respecto del cubrimiento de las vacantes que se produzcan a partir de la aplicación de la presente reglamentación, y procurando mantener una relación proporcional directa con la dotación de cada organismo. Del cuatro por ciento (4%)

establecido en el artículo 8° de la Ley N° 22.431 deberá darse una preferencia del uno por ciento (1%) para empleo de no videntes.”

A su turno, el artículo 9° del citado decreto prescribe que: “El Ministerio de Trabajo dispondrá él o los organismos que dentro de su área ejercerán la verificación y fiscalización de lo dispuesto por los artículos 8° y 9° de la Ley...”

Seguidamente, mediante el decreto N° 1027/94 se instruyó a los Ministerios y Secretarías de la Presidencia de la Nación y demás organismos con competencia en la materia, para hacer efectivas las políticas relacionadas con las personas discapacitadas, y asignó a la hoy SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA la facultad de controlar que en todas las esferas de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL se de cumplimiento con el porcentaje al que alude el artículo 8° de la precitada Ley N° 22.431.

A tal efecto, por Resolución S.F.P. N° 113/94 se dispuso la creación del REGISTRO DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA (REPER-SINAPA) el cual incorporó - dentro de los datos personales de los agentes que se requieren a los organismos involucrados -, un ítem referido al tipo de discapacidad comprobada, que pudiese presentar el personal que revista en dicho ámbito. En consecuencia, se instrumentó la Resolución S.F.P. N° 67/1998, cuyo artículo 1° dispone: “Créase, en el ámbito de la SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS -DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL- el Sistema de Control de Aplicación del artículo 8° de la Ley N° 22.431.”

El artículo 2° de la mencionada Resolución, a su vez, reza: “Establécese que a los efectos prescriptos en los artículos 8° de la Ley N° 22.431 y 9° inciso a) del Decreto N° 1027/94, todos los organismos que integran la Administración Pública Nacional deberán informar a la SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS en el termino de NOVENTA (90) días contados a partir de la fecha de la publicación de la presente, el total de su dotación de personal, la cantidad de agentes discapacitados en los términos del artículo 4° de la mencionada ley que a la fecha se desempeñan en su área, y las vacantes existentes. La información deberá ser remitida a través del soporte informático que será provisto por esta jurisdicción.”

Dicho soporte informático fue creado por Resolución N° 76/98, cuyo artículo 1°, en su parte pertinente, resolvió: “...Las jurisdicciones y entidades antes de convocar a la

cobertura de vacantes deberán cumplir con las exigencias establecidas por el Decreto N° 2043, del 22 de setiembre de 1980, y la Resolución SFP N° 192, del 31 de mayo de 1994 y remitir al Sistema de Control de aplicación del Art. 8° de la Ley N° 22.431, creado por Resolución SFP N° 67/98 la información sobre la cantidad de vacantes y los perfiles asignados a ellas a efectos de verificar el cumplimiento de la citada previsión legal...”

A pesar de la frondosa normativa existente que rodea la materia examinada, que data desde el año 1981 hasta la fecha, los constantes reclamos efectuados por quienes aspiran su ingreso a la Administración Pública permiten demostrar que la cuestión aún no ha sido resuelta ni satisfecha de manera integral.

Lo expuesto en el párrafo anterior, originó la sanción de la Ley N° 25.689, antes citada, en cuyo artículo 4° se determina que: “El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará las disposiciones de la presente ley dentro de los noventa (90) días de su promulgación”, gestión que tramita registrada bajo el Expediente JEFGABMIN N° 003082/2003, según documentación obrante a fojas 84 de actuación N° 8679/00, que tramita ante la Defensoría.

Es del caso señalar que la mencionada ley fue promulgada de hecho el 2 de enero de 2003, situación que indefectiblemente muestra que el plazo instrumentado en la norma ha excedido en términos considerables.

Debe tenerse presente que la falta de reglamentación de las leyes transforma la voluntad del legislador en letra muerta, conculcando así el ejercicio de los derechos que la legislación vigente acuerda, como puede apreciarse, a un grupo vulnerable de la sociedad, según la misma previsión constitucional, sometiéndolos a agudizar de manera paulatina su exclusión social.

De no adoptarse una solución de fondo a esta altura indefectiblemente y, por añadidura, traería aparejado el prolongamiento de un perjuicio para la sociedad en su conjunto, en razón del alto costo social que implica la inversión de partidas presupuestarias ociosas en distintos programas de contención social, dirigidos a personas que presentan dignas condiciones para trabajar y acceder al empleo, pero que, de contar con recursos propios obtenidos de su incorporación a actividades laborales remuneradas, verían posibilitadas su autosustentación y su desarrollo personal.

En cumplimiento de las atribuciones que la Constitución Nacional le acuerda, las autoridades públicas deberían disponer de las herramientas necesarias a los fines de garantizar la reglamentación de la ley en cuestión, a los efectos de salvaguardar el efectivo ejercicio de los derechos que el Poder Legislativo reconoce, en este caso, a las personas con discapacidad, en mérito a lo dispuesto por el Art. 75, inc. 23 de la Carta Magna, que prescribe: “Corresponde al Congreso...: legislar y promover las medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los Tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular, respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.”

Por todo lo expuesto, finalmente se recomendó a la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA que a la brevedad y sin dilaciones arbitre los medios necesarios a efectos de que sea reglamentada la Ley N° 25.689.

5.3.5.- Incumplimiento del artículo 11 de la Ley N° 24.308.

Con respecto al incumplimiento de la exigencia de otorgar en concesión a personas con discapacidad espacios para pequeños comercios por parte del Estado Nacional, entes descentralizados y autárquicos, las empresas mixtas y del Estado y el Gobierno de la ciudad de Bs. As, el DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN dictó la Resolución N° 158/01 del 14/09/01 que recomendó al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, que implementara los medios necesarios para que el organismo correspondiente efectúe acciones eficaces tendientes a controlar y hacer cumplir el Art. 11 de la ley 24.308.

Como resultado de la misma, ese ministerio dictó la Resolución N° 810/01 para que la Unidad para personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables efectúe un relevamiento y diagnóstico del grado de cumplimiento de la ley N° 24.308. Esa dependencia, actualmente, está efectuando el relevamiento de los espacios posibles para ser otorgados según el registro de inscripción de aspirantes, lográndose que varias empresas y entes públicos otorguen los espacios, pero sólo puede considerarse como un pequeño avance al respecto.

5.4.- SUBUNIDAD DE ANÁLISIS: LEY DE CHEQUE

El tema devino abstracto en 2004

Autos. “DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN c/ ESTADO NACIONAL s/ proceso de conocimiento” (expte. N° 17.337/99).

A través de este proceso el Defensor del Pueblo de la Nación demandó la declaración de nulidad por arbitrariedad del Art. 3° del Decreto N° 347/99.

Por dicha norma, el Poder Ejecutivo Nacional facultó al Banco Central de la República Argentina a graduar el monto de las multas resultantes de la aplicación del artículo 62, último párrafo, del Anexo I de la Ley N° 24.452 (modificada por la Ley N° 24.760) - acumulada por cada entidad financiera a la fecha de la entrada en vigencia del decreto impugnado- entre un mínimo de quince mil pesos (\$ 15.000.-) y un máximo de dos millones de pesos (\$2.000.000.-) por entidad, en función de la cantidad de incumplimientos de cada una.

Luego de obtener sentencia favorable en primera instancia y como consecuencia de un recurso de apelación deducido por las codemandadas, el pleito quedó radicado por ante la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

Dicho tribunal, con fecha 08/06/04 declaró abstracta la cuestión planteada, situación que motivó la presentación, por parte de la actora, de un recurso extraordinario, el que fue concedido el 09/11/04.

5.5.- SUBUNIDAD DE ANÁLISIS: OTORGAMIENTO DE TURNOS PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD

Art. 3° de la Ley N° 22.431, modificado por la Ley N° 25.504

Con motivo de las injustificadas demoras (otorgamiento de turnos con hasta 6 meses de demora) el Defensor del Pueblo dictó dos resoluciones en el Año 2005 (Nros. 087/05 y 088/05) recomendando al SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN la urgente adopción de medidas que impliquen agilizar el actual procedimiento empleado para el otorgamiento de turnos de evaluación de juntas médicas, con el fin de que se expidan sin demoras los certificados de discapacidad. He aquí sus fundamentos:

El Art. 3 de la ley N° 22.431, modificado por la ley N° 25.504, previó que:
“...El Ministerio de Salud de la Nación certificará en cada caso la existencia de la discapacidad, su naturaleza y su grado, así como las posibilidades de rehabilitación del afectado. Dicho Ministerio indicará también, teniendo en cuenta la personalidad y los antecedentes del afectado, qué tipo de actividad laboral o profesional puede desempeñar.

El certificado que se expida se denominará Certificado Único de Discapacidad y acreditará plenamente la discapacidad en todo el territorio nacional en todos los supuestos en que sea necesario invocarla...”

Debe resaltarse que muchas personas acuden a esta Institución denunciando la arbitrariedad que sufren ante el trámite de expedición del certificado de discapacidad. Tal arbitrariedad está constituida por las excesivas demoras en el otorgamiento de los turnos para la realización de la evaluación que otorgan las juntas médicas del Servicio Nacional de Rehabilitación, desde el momento en que los mismos son peticionados. Precisamente esa injustificada demora obstaculiza acreditar la discapacidad, y por lo tanto impide el libre ejercicio, durante ese lapso, de los derechos y beneficios previstos en las leyes vigentes.

La circunstancia que se viene comentando, importa una flagrante violación al derecho a la salud y a la rehabilitación de las personas con discapacidad, y al ejercicio cierto de sus derechos.

La Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (ENDI) realizada para el período 2002-2003 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) muestra que el 7,1 % de la población del país, esto es 2.176.123 habitantes, posee alguna discapacidad. De este importante segmento, sólo el 14,6% posee el certificado en cuestión, en los términos de la ley 22.431.

En cumplimiento de las misiones que la Constitución Nacional les impone, las autoridades públicas deben realizar las acciones necesarias a los fines de garantizar y salvaguardar el efectivo ejercicio de todos los derechos, en este caso, a las personas con discapacidad, en mérito a lo dispuesto por el artículo 75, inc. 23, que prescribe:
“Corresponde al Congreso: (...) 23.-legislar y promover las medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los Tratados internacionales vigentes

sobre derechos humanos, en particular, respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.”

Mediante la ley 25.280 el Estado Argentino adhirió a la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, que establece en el artículo I lo siguiente: “...a) *El término "discriminación" contra las personas con discapacidad" significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales...*”

Así la legislación vigente debe encontrar su razón de ser en la necesidad de protección del ser humano y, en consecuencia, resulta prioritario que aquellas normas, dirigidas a preservar su dignidad e integridad, sean de especial interés para las autoridades encargadas de su aplicación.

Asimismo, se agrega que toda restricción, por propósito o por efecto, que impida u obstaculice el pleno ejercicio de los derechos y garantías fundamentales reconocidas en la Constitución Nacional, podría ser tomada como un acto discriminatorio activo en conformidad con las previsiones del artículo 1º de la ley 23.592, que dice: “*Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados. A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos...*”

A pesar de la profusa normativa que viene dictándose desde el año 1981 en la materia examinada, los constantes reclamos referidos al incumplimiento de las leyes que justamente amparan la protección de los derechos de las personas con discapacidad, permiten demostrar que se invisibiliza, discrimina y excluye a estos ciudadanos, en todo lo referente al ámbito social, político, laboral, económico y cultural. Dicho en otros términos, existiendo un

valioso marco normativo a partir de la sanción de ley 22.431 y demás instrumentos legales, la discapacidad sigue siendo el rasgo que los segrega.

La falta de aplicación en debida forma de las normas vigentes, atenta contra el principio de equiparación de oportunidades específicamente reconocido a las personas con discapacidad como medio para compensar las desventajas producidas por la situación discapacitante.

A la luz de todo lo expuesto, se advierte que las excesivas y sistemáticas demoras en que incurre el Servicio Nacional de Rehabilitación en la expedición de los certificados de discapacidad indefectiblemente conllevan una vulneración del estado de derecho.

En consecuencia, se recomienda al SERVICIO NACIONAL de REHABILITACIÓN la urgente adopción de aquellas medidas que impliquen agilizar el actual procedimiento empleado para el otorgamiento de los turnos de evaluación de las juntas médicas.

6.- UNIDAD DE ANÁLISIS: DISCRIMINACIÓN: EL INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO.

Además de lo expresado sobre el tema en el capítulo anterior, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo interviene ante denuncias sobre discriminación, teniendo al efecto como base el Decreto 1086 del 7 de septiembre de 2005 que aprueba el documento titulado "Hacia un Plan Nacional contra la Discriminación - La Discriminación en Argentina. Diagnóstico y Propuestas".

En el referido documento se indican una serie de propuestas a fin de combatir la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Entre ellas podemos encontrar, relativas a las necesidades especiales, las siguientes:

REFORMAS LEGISLATIVAS

17. Derogar los artículos de todos los Códigos provinciales y municipales con figuras contravencionales “abiertas” (falta de moralidad, escándalo en la vía pública, merodeo, prostitución, etc.) que otorgan facultades a la policía para realizar detenciones sin intervención judicial previa.

35. Promover la sanción de una ley que derogue los artículos 469 y 166 inc. 9 del Código Civil que establecen el impedimento a los sordos para administrar sus bienes y para contraer matrimonio.

36. Promover la sanción de una ley de penalidades severas para el incumplimiento de la ley No 24.901 sobre obligatoriedad de cobertura de Obras Sociales y pre-pagas en casos de discapacidad.

40. Promover la sanción de una ley que establezca la obligatoriedad del sobretitulado de TV en toda la programación de los canales de aire. Se sugiere auspiciar igual iniciativa en los canales de televisión privada y en exhibiciones cinematográficas en idioma español.

PROPUESTAS POR ÁMBITOS INSTITUCIONALES DE APLICACIÓN

Administración de Justicia y Legislación Medidas de Acción Inmediata

59. Arbitrar los medios para eliminar la practica de los meritorios y llamar a concurso para los cargos jerárquicos legos, atendiendo en especial a equilibrar el cupo femenino y la

presencia de personas con necesidades especiales.

Administración Pública
Medidas de Acción Inmediata

104. Incluir a la población con necesidades especiales en los censos de población y trabajos específicos de relevamiento del INDEC y de los propios centros de rehabilitación.

105. Crear órganos de control adecuados a los que se incorporen las organizaciones de discapacitados y los profesionales de rehabilitación como miembros con voz y voto en el marco de la Secretaría de Transporte y las Comisiones de Planeamiento Urbano. Se sugiere incluir esta problemática en las auditorías que se realizan a los ámbitos públicos.

106. Capacitar en lengua de señas de manera obligatoria al menos a un agente de cada repartición pública nacional, provincial o municipal (hospitales, escuelas, reparticiones administrativas), a fin de que pueda desempeñarse como intérprete de la población sorda. Se sugiere que dicha capacitación se ofrezca como parte de un Plan Nacional a cargo del Ministerio de Educación.

107. Fomentar la labor de bibliotecas parlantes y asociaciones encargadas de traducción al Braille de literatura y bibliografía.

108. Crear programas específicos de inserción laboral de personas con necesidades especiales con acompañamiento en capacitación y tecnología de dicha población.

109. Fomentar áreas de empleo protegido respetando el cupo legalmente estipulado en la administración pública nacional, provincial y municipal para las personas con necesidades especiales.

110. Revisar el sistema de otorgamiento y aumentar los montos de las pensiones por invalidez, a fin de que dicho monto permita cumplir con los requerimientos de las personas con necesidades especiales, garantizando su inclusión en los planes de rehabilitación encarados por el Estado Nacional.

111. Diseñar y/o mejorar la accesibilidad de los sitios web públicos (gov.ar) para personas con baja visión y ciegas de acuerdo a normas estandarizadas vigentes.

112. Establecer la provisión de ayudas técnicas (computadoras adaptadas, ayudas ópticas, etc.) para personas con necesidades especiales, entendiendo a éstas como elementos de acceso a la educación, el trabajo y la cultura.

113. Establecer criterios mínimos de accesibilidad para los bienes y servicios adquiridos por las Administraciones Públicas, a fin de fomentar el diseño para todos. Se sugiere que este catálogo técnico tenga carácter de norma básica, con criterios universales para el conjunto de Administraciones y susceptible de ir modificándose en función de la evolución tecnológica y de la experiencia adquirida.

Educación

Medidas de Acción Inmediata

174. Crear puestos de maestros de integración en todos aquellos lugares del territorio nacional en que sean requeridos en función de las necesidades de la población.

175. Arbitrar los medios para otorgar el reconocimiento del carácter bilingüe de la población sorda y articular los espacios de integración escolar en función de esta situación.

176. Crear departamentos de asistencia a los estudiantes de nivel terciario y universitario con necesidades especiales, dependientes de los Ministerios de Educación nacional y provinciales.

177. Incluir una materia obligatoria de “Necesidades Especiales” en la formación de los docentes de todos los niveles como modo de capacitación en la problemática y de solucionar problemas prácticos.

Salud

Propuestas Estratégicas

223. Dotar de mediadores culturales e intérpretes a los servicios asistenciales en aquellas zonas donde existe una presencia significativa multilingüismo (sordos, comunidades indígenas, otros grupos étnicos y poblaciones migrantes).

227. Crear centros de rehabilitación en toda localidad con una población superior a 75.000 habitantes y/o distante más de 200 km. del centro de rehabilitación más cercano, garantizando la movilidad de la población requirente hacia dicho centro. Se sugiere que los

Centros de Rehabilitación estén articulados con Escuelas Especiales, dependan del Ministerio de Salud de la Nación y cuenten tanto con la dotación de personal necesaria para los servicios ofrecidos como con la posibilidad de ofrecer a la población con necesidades especiales los implementos tecnológicos necesarios para su rehabilitación y/o reinserción profesional.

Medidas de Acción Inmediata

241. Desarrollar periódicamente campañas nacionales preventivas y de detección de discapacidad que permitan la localización temprana de la problemática y su abordaje. Se sugiere articularlas en el ámbito educativo a través de la realización de controles médicos dentro del período escolar.

Queda en consecuencia pendiente observar el cumplimiento de las propuestas enunciadas, en la esperanza que no se convierta en una mera expresión de deseos.

Por otra parte, el dictamen INADI N° 114/04 establece la existencia de prácticas discriminatorias en los términos de la Ley Nacional N° 25.280 por parte de la Secretaría de Transporte de la Nación como consecuencia del incumplimiento reiterado de la legislación sobre transporte automotor de pasajeros adaptado para personas con movilidad y comunicación reducida. Este dictamen se originó a partir de una denuncia formulada por instituciones de defensa de los derechos de las personas con discapacidad sumándose la Resolución N° 5998/03 de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

El Dictamen del INADI fue puesto en conocimiento del Ministerio Público “a los fines de instar su actividad ante lo que a prima facie constituirían incumplimientos de los deberes de funcionario público y una flagrante violación a los derechos humanos de las personas con discapacidad” y remitido a distintas áreas del Estado Nacional: Ministerios de Interior, Planificación Federal; Justicia, Seguridad y Derechos Humanos - Secretaría de Derechos Humanos -; Jefatura de Gabinete de Ministros; Comisiones de Transporte de las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación; Defensorías del Pueblo de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires; la Auditoría General de la Nación y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, “...a los fines que estimen corresponder a tenor de sus respectivas competencias y atribuciones.”

7.- UNIDAD DE ANÁLISIS: BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y URBANÍSTICAS

7.1.- SUBUNIDAD DE ANÁLISIS: ACCESIBILIDAD

Las personas con movilidad reducida deben tener la posibilidad de gozar, al igual que el resto de la población, de adecuadas condiciones de seguridad y autonomía que no impliquen restricciones derivadas del ámbito físico urbano, arquitectónico o del transporte. De tal manera la **accesibilidad** constituye un derecho primordial para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, para la integración y equiparación de oportunidades.

Con el fin que este derecho pueda ser ejercido plenamente debe priorizarse la supresión de las barreras físicas en los ámbitos urbanos, arquitectónicos y del transporte. Crear condiciones de libre circulación para todos significa abrir la llave de las ciudades para una amplia franja de personas con dificultades en su movilidad y en su comunicación.

Con el fin de legislar sobre la accesibilidad al medio físico fue promulgada la Ley N° 24.314, que modifica el Capítulo IV de la Ley N° 22.431, y el Decreto N° 914/97 que aprueba su reglamentación. La normativa mencionada pretende así alcanzar nuevos niveles de bienestar general, estableciendo disposiciones destinadas a facilitar la accesibilidad y la utilización para todos los ciudadanos de las nuevas realizaciones a concretarse en los espacios libres de edificación y en los edificios y locales de uso o concurrencia de público, ya sean estos de titularidad o dominio público o privado, así como respecto de las unidades de transporte de pasajeros que constituyan servicio público.

Dicho capítulo contiene 3 artículos. El artículo 20 establece la prioridad de la supresión de las barreras físicas en los ámbitos urbanos, arquitectónicos y del transporte que se materialicen en lo futuro, o en los existentes que remodelen o sustituyan en forma parcial o total sus elementos constitutivos, con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad reducida.

En segunda instancia dicho artículo define lo que se denomina como barreras físicas urbanas entendiéndolas como aquellas existentes en las vías y espacios libres públicos, y a cuya supresión se tenderá por el cumplimiento de una serie de criterios. Estos están referidos a seis puntos, a saber:

- **Itinerarios peatonales** (anchura mínima, características de los pisos y desniveles).
- **Escaleras y rampas** (características y dimensiones),
- **Parques, jardines plazas y espacios libres** (itinerarios peatonales y baños públicos).
- **Estacionamientos** (zonas reservadas y señalizadas para vehículos que transporten personas con movilidad reducida).
- **Señales verticales y elementos urbanos varios** (deberán disponerse de forma que no constituyan obstáculos).
- **Obras en la vía pública** (características de la señalización, protección e itinerario peatonal alternativo).

Durante el desarrollo de esta unidad de análisis se enfocará la problemática de la accesibilidad exclusivamente desde el punto de vista de las barreras arquitectónicas (artículo 21°), dejando de lado lo referido a los ámbitos urbanos y del transporte (artículos 20° y 22°).

7.2.- SUBUNIDAD DE ANÁLISIS: BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

La Ley N° 24.314 en su artículo 21° denomina barreras arquitectónicas a los impedimentos físicos que presenta el entorno construido frente a las personas con discapacidad o con circunstancias discapacitantes. Estas se encuentran presentes en los edificios de uso público, sea su propiedad pública o privada y en los edificios de vivienda.

Para tender a su supresión se observan tres grados de intervención dependiendo de la profundidad de la misma:

- **Adaptabilidad**, entendida como la posibilidad de modificar en el tiempo el medio físico, con el fin de hacerlo completa y fácilmente accesible a las personas con movilidad reducida.
- **Practicabilidad**, que es la adaptación limitada de los ámbitos físicos a las condiciones mínimas necesarias para ser utilizados por personas con movilidad reducida.
- **Visitabilidad**, entendida como la accesibilidad estrictamente limitada al ingreso y uso de los espacios comunes y de un local sanitario, permitiendo la vida de relación de las personas con movilidad reducida.

En cuanto a las pautas que la Ley insta para los **edificios de uso público**, se establece que deberán observar:

- De manera general la accesibilidad y posibilidad de uso en todas sus partes por personas con movilidad reducida.

- La existencia de estacionamientos reservados y señalizados para vehículos que transporten a dichas personas, cercanos a los accesos peatonales.
- Poseer al menos un acceso al interior del edificio desprovisto de barreras arquitectónicas.
- Contar con espacios de circulación horizontal que permitan el desplazamiento y maniobra de dichas personas.
- La comunicación vertical debe ser accesible y utilizable por las mismas, mediante elementos constructivos o mecánicos
- Poseer servicios sanitarios adaptados.

En cuanto al Decreto reglamentario N° 914/97, su artículo 21° habla de los **Edificios con acceso de público de propiedad pública o privada**, estableciendo una serie de especificaciones sobre los diferentes elementos componentes de un inmueble. De manera general los edificios a construir cumplirán las prescripciones que se enuncian en la normativa, ofreciendo a las personas con movilidad y comunicación reducida: franqueabilidad, accesibilidad y uso.

Por otra parte los edificios existentes deberán adecuarse a lo prescrito por la Ley N° 22.431 y modificatorias, en todo lo relativo a barreras urbanas y a edificios de uso público, dentro de un plazo total que no podrá exceder de tres (3) años desde la fecha de sanción de la Ley N° 24.314, ocurrida el 8 de abril de 1994.

A continuación se comentan las principales especificaciones particulares que el decreto establece:

7.2.1.- ACCESIBILIDAD

El o los accesos principales, los espacios cubiertos, semicubiertos o descubiertos y las instalaciones deberán ofrecer **franqueabilidad, accesibilidad y uso** de las instalaciones a las personas con movilidad y comunicación reducida.

En edificios construidos, si el acceso principal no puede hacerse franqueable se admitirán accesos alternativos, los que, al igual que sucede con el acceso principal, deberán vincular los locales y espacios de los edificios a través de circulaciones accesibles.

7.2.2.- SOLADOS

Deberán ser duros y sin resaltos (propios o entre piezas) de modo que no dificulten la circulación de personas con movilidad y comunicación reducida, incluyendo los usuarios de silla de ruedas.

7.2.3.- PUERTAS

El detalle de las características que deben reunir las puertas es uno de los más importantes del artículo, situación absolutamente comprensible si tomamos en cuenta que lo que para una persona con plena movilidad constituye un acto prácticamente automático (abrir una puerta, entrar a la oficina equivocada y salir inmediatamente, por ejemplo) puede constituir para una persona con movilidad reducida un serio trastorno.

Entre las precisiones que se brindan en este apartado las más significativas son que:

La accesibilidad a los diferentes espacios de un edificio deberá asegurarse mediante la utilización de puertas que posean un ancho mínimo admisible de 0.80 m., a excepción de las puertas correspondientes a locales de lado mínimo inferior a dicha medida.

Muy importante es asegurar que en el caso que posean accionamiento automático deberán reunir las condiciones de seguridad necesarias y se regularán a velocidad promedio de paso de las personas.

Asimismo se colocarán en ambas caras manijas a una altura de 0.90 m / 0.95 m. sobre el nivel del solado. En las puertas de los servicios sanitarios especiales para personas con movilidad reducida se colocarán barras horizontales de sección circular de 0.40 m de longitud como mínimo a una altura de 0.85 m del nivel del solado. Se ubicarán en la cara exterior al local hacia donde abre la puerta con bisagras.

En este punto el decreto establece las características de las denominadas superficies de aproximación. Estas son las áreas libres que deben existir a ambos lados de una abertura y se calculan dependiendo de los anchos útiles de las puertas, el tipo de herrajes y otras variables.

La señalización de los locales que se vinculan con la puerta se dispondrá sobre la pared del lado exterior al local en una zona comprendida entre 1.30 m y 1.60 m desde el nivel del solado.

Para evitar la apertura intempestiva de puertas sobre el avance de una persona con movilidad reducida, las puertas ubicadas en circulaciones o locales con importante movilización de público (excepto las que vinculen con servicios sanitarios) llevarán una zona de visualización vertical de material transparente o translúcido, con ancho mínimo de 0.30 m y alto mínimo de 1.00 m, cuyo borde inferior estará ubicado a una altura máxima de 0.80 m del nivel del solado.

La utilización de puertas y/o paneles fijos de vidrio queda supeditada a que se use cristal templado o vidrio inastillable, de espesor adecuado a sus dimensiones y que además cumpla con previsiones en cuanto a su identificación mediante la utilización de franjas opacas de color contrastante o despulidas.

Finalmente se prohíbe el uso de puertas giratorias como único medio de salida o entrada principal o secundaria.

7.2.4.- CIRCULACIONES

El cumplimiento de las condiciones que se establecen para las circulaciones, sean horizontales o verticales, es tanto o más importante que la observancia en torno a todo lo relacionado con las puertas, ya que aquellas aseguran las condiciones de libre tránsito de las personas con movilidad reducida dentro de los edificios. Pero en el caso de los edificios ya contruidos, mientras los requisitos a alcanzar para las aberturas son relativamente sencillos e insumen costos reducidos, los referidos a las circulaciones pueden llegar a requerir inversiones importantes, tanto financieras como en tiempos de obra, e incluso pueden llegar a no poder realizarse ante la presencia de impedimentos de carácter técnico. A continuación se detallan las principales previsiones legisladas:

7.2.4.1.- Circulaciones horizontales

Los pasillos deberán tener un lado mínimo de 1.20 m de ancho. Se deberán disponer zonas de ensanchamiento de 1.50 m x 1.50 m o donde se pueda inscribir un círculo

de 1.50 m de diámetro como mínimo, en los extremos y cada 20.00 m –en caso de largas circulaciones destinadas al cambio de dirección o al paso simultáneo de dos sillas de ruedas.

Asimismo se tendrá en cuenta dejar a todo lo largo de la circulación en un ancho de 0.90 m por 2.00 m de altura el denominado Volumen Libre de Riesgos, el cual no podrá ser invadido por ningún elemento que obstaculice la misma.

Estas especificaciones, que exceden lo existente en la mayoría de los edificios construidos y en uso por parte del Estado, pueden resultar imposibles de lograr sin la necesidad de realizar modificaciones de fondo en la distribución de la ocupación de los espacios e incluso intervenir en cuestiones de tipo organizacional.

Finalmente cuando los itinerarios atraviesen locales, la trayectoria de la circulación estará netamente diferenciada.

7.2.4.2.- Circulaciones Verticales

Si existieran desniveles o escalones mayores a 0.02 m, deberán ser salvados por escaleras o escalones o por rampas. En el caso de disponerse escaleras o escalones siempre serán complementadas por rampas, ascensores o medios de elevación alternativos.

Cabe para este ítem similares comentarios a los referidos para las circulaciones horizontales, en cuanto a la magnitud de las intervenciones que sería necesario encarar con el fin de adecuar los inmuebles existentes.

7.2.4.2.1.- Escaleras y Escalones

El acceso será fácil y franco y los escalones estarán provistos de pasamanos. No se admitirán escalones en coincidencia con los umbrales de las puertas, debiéndose respetar las superficies de aproximación para puertas.

Las escaleras principales no tendrán más de doce (12) alzadas corridas entre rellanos y descansos. No se admitirán escaleras principales con compensación de escalones y las dimensiones tanto de las pedadas como de las alzadas deberán permanecer inalterables a lo largo de todo el recorrido de la escalera (entre 0.28 m y 0.30 m en el caso de las pedadas y entre 0.14 m y 0.16 m en el de las alzadas).

El ancho mínimo para las escaleras principales será de 1.20 m y se medirá entre zócalos.

Al comenzar y finalizar cada tramo de escalera se colocará un solado de prevención de textura en relieve y color contrastante con respecto al de los escalones y el solado del local, con un largo de 0.60 m por el ancho de la escalera.

Finalmente se establecen las características que deberán cumplir los pasamanos, las que no difieren sustancialmente de las especificaciones habituales.

7.2.4.2.2.- Rampas

Se podrán utilizar rampas en reemplazo de complemento de escaleras y escalones para salvar cualquier tipo de desnivel. Tendrán fácil acceso desde un vestíbulo general o público. La superficie de rodamiento será plana y no podrá presentar en su trayectoria cambios de dirección en la pendiente. Las pendientes longitudinales se establecen en función de la altura a salvar, siendo del 4 % (veinticinco metros de desarrollo por cada metro de altura) para el caso de alturas mayores a 1,40 m.

El ancho libre de una rampa se medirá entre zócalos y será de 1.10 m. Para anchos mayores a 1.30 m se deberán colocar pasamanos intermedios. Cuando la rampa cambia de dirección girando en ángulo, este cambio se debe realizar sobre una superficie plana y horizontal cuyas dimensiones permitan el giro de una silla de ruedas.

Al comenzar y finalizar cada tramo de rampa se colocará un solado de prevención de textura en relieve y color contrastante con respecto a los solados de la rampa y del local, con un largo de 0.60 m por el ancho de la rampa.

Al comenzar y finalizar la rampa deberá existir una superficie de aproximación que permita inscribir un círculo de 1.50 m de diámetro como mínimo que no será invadida por elementos fijos o móviles.

Finalmente, al igual que en el caso de las escaleras, se establecen las características que deberán cumplir los pasamanos.

7.2.4.2.3.- Ascensores

Cualquiera sea el número de ascensores de un edificio, por lo menos uno de ellos llevará una cabina de los tipos 1, 2 o 3. Todas las unidades de uso cualquiera sea el destino serán accesibles por lo menos a través de un ascensor con dichos tipos de cabina, las que se diferencian por las dimensiones que poseen, de acuerdo al siguiente detalle:

- Tipo 1: Dimensiones interiores mínimas 1.10 m x 1.30 m con una sola puerta o dos puertas opuestas en los lados menores, permitiendo alojar una silla de ruedas.
- Tipo 2: Dimensiones interiores mínimas 1.50 m x 1.50 m, que permitan inscribir un círculo de 1.50 m de diámetro, con una sola puerta o dos en lados contiguos u opuestos permitiendo alojar y girar 360° una silla de ruedas.
- Tipo 3: Dimensiones interiores mínimas 1.30 m x 2.05 m, con una sola puerta o dos en lados contiguos u opuestos permitiendo alojar una camilla y un acompañante.

Adicionalmente la normativa establece el equipamiento con que deberá contar el interior de las cabinas:

- Teléfonos de emergencia y timbres en alarma de cabina ubicados en la parte inferior de la botonera
- Pasamanos en cabinas de ascensores.
- Señalización en la cabina que indicará en forma luminosa el sentido del movimiento de la misma y en forma de señal sonora el anuncio de posición.
- Piso antideslizante.
- Botonera en cabina ubicada en una zona comprendida entre 0.80 m y 1.30 m de altura desde el nivel del piso. A la izquierda de los pulsadores se colocará una señalización suplementaria para ciegos y disminuidos visuales de los números de piso y demás comandos en color contrastante y relieve.

Asimismo el articulado establece las dimensiones y características de los rellanos frente a un ascensor, la ubicación y especificaciones de los pulsadores de piso, así como la descripción detallada de las prescripciones que deben cumplir las puertas de cabina y puertas de piso.

7.2.4.2.4.- Medios Alternativos de Elevación

La normativa permite la utilización de plataformas mecánicas elevadoras verticales y plataformas mecánicas que se deslizan sobre una escalera solamente para personas que se desplacen en sillas de ruedas. Estos medios no invadirán los anchos mínimos exigidos en pasajes, escaleras y escalones y se deberá prever una superficie de aproximación de 1.50 m x 1.50 m al comienzo y a la finalización del recorrido.

7.2.5.- LOCALES SANITARIOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Sin lugar a dudas uno de los aspectos más importantes de la normativa es aquel que regula la existencia de los servicios sanitarios para personas con movilidad reducida. Al respecto todo edificio que cuente con asistencia de público, sea de propiedad pública o privada, cuando la normativa municipal establezca la obligatoriedad de instalar servicios sanitarios convencionales, contará con un “servicio sanitario especial para personas con movilidad reducida”.

Si bien, y de manera similar con lo que sucede en el caso de las puertas y circulaciones, la construcción de dicho local durante la ejecución de un edificio a nuevo no importa prácticamente erogaciones adicionales, la adaptación de los núcleos sanitarios existentes a la normativa resulta en grandes gastos y puede ser imposible de llevar a cabo en una importante cantidad de casos, ya sea por ausencia de espacio utilizable (quedando como única alternativa la eliminación o disminución de superficie de los servicios sanitarios comunes) o por razones constructivas.

El servicio sanitario especial para personas con movilidad reducida podrá instalarse como cualquiera de las dos siguientes opciones:

- En un local independiente con inodoro y lavabo.
- Integrando los servicios convencionales para cada sexo con los de personas con movilidad reducida, debiendo existir un inodoro y un lavabo que cumplan con lo prescripto en la normativa.

Las condiciones más significativas que deberá cumplir el servicio sanitario especial para personas con movilidad reducida son:

Las antecámaras y el local propiamente dicho permitirán el giro de una silla de ruedas en su interior. No obstante si esto no fuera factible, el giro podrá realizarse fuera del local, en una zona libre y al mismo nivel, inmediata al local.

El local sanitario para personas con movilidad reducida se identificará mediante la señalización con el "Símbolo Internacional de Acceso para Discapacitados Motores".

A continuación el articulado define las especificaciones técnicas, las ubicaciones posibles y las superficies de aproximación mínimas que deberán cumplir los

siguientes artefactos: inodoro, lavabo y ducha. Finalmente se advierte que la zona barrida por las hojas de las puertas no ocupará la superficie de aproximación al artefacto.

7.2.6.- ZONA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

En los lugares donde se ubiquen mostradores, se deberá contar como mínimo con un sector de no menos 0,75 m de ancho, una altura de 0,80 m y un espacio libre por debajo del mismo de 0,65 m de alto y 0,50 m de profundidad en todo el sector.

7.2.7.- ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS

Con el objeto de asegurar el acceso de personas con movilidad reducida en aquellos estacionamientos de vehículos ubicados en edificios destinados a todo uso, con carácter público o privado, y estacionamientos comerciales se dispondrán "módulos de estacionamiento especiales" según lo siguiente:

El módulo de estacionamiento especial no será exigible cuando la cantidad de módulos de estacionamiento convencionales sea menor de (20) veinte. A partir de (20) veinte módulos de estacionamiento se dispondrá un modulo de estacionamiento especial cada (50) cincuenta módulos convencionales o fracción. Dichos módulos de estacionamiento especial para vehículos adaptados para personas con discapacidad motora, tendrán un ancho mínimo de 3,50 metros.

7.3.- SUBUNIDAD DE ANÁLISIS: EL COMITÉ DE ASESORAMIENTO Y CONTRALOR.

Finalmente es de destacar que el Art. 4° del Decreto N° 914/97 crea el Comité de Asesoramiento y Contralor del cumplimiento de los artículos 20, 21 y 22 de la Ley N° 22.431 modificados por la Ley N° 24.314 y su reglamentación aprobada por Decreto 914/97. Dicho organismo está integrado por un miembro titular y uno alterno, los que deberán tener jerarquía no inferior a Director o equivalente, en representación de cada uno de los siguientes organismos: Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas, Comisión Nacional de Regulación del Transporte y Centro de Investigación de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte (CIBAUT) de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional de Buenos Aires.

Las funciones del citado Comité son:

- a) Controlar el cumplimiento de los artículos 20, 21 y 22 de la Ley 22.431 modificados por la Ley 24.314 y su Reglamentación.
- b) Verificar y formalizar la denuncia por el incumplimiento de lo reglamentado en la materia al Presidente de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas, a fin de que tome intervención en virtud de lo dispuesto por el artículo 4°, incisos b), c), d), e) y f) del Decreto N° 984/92.
- c) Asesorar técnicamente para la correcta implementación de los artículos 20,21 y 22 de la Ley 22.431 modificados por la Ley 24.314 y su Reglamentación.
- d) Proponer criterios de adecuación, informar y fomentar lo dispuesto por la Reglamentación.

CONCLUSIONES

De lo expuesto, mas allá de las conclusiones específicas que surgen en cada uno de los ítems, la visión general del tema nos permite apreciar que el órgano rector logrado hasta ahora menos de lo deseable, ya sea por imposibilidad frente a la escasez de recursos como por falta de comprensión de la problemática en otros sectores del Estado.

En términos globales, podríamos afirmar que el Estado reacciona con movimientos espasmódicos frente a la problemática de la discapacidad, generalmente respondiendo a impulsos del momento del funcionario de turno. Que hay sectores del mismo que hacen oídos sordos a los reclamos correspondientes aún cuando haya normativa que contemplan u obligan a otra actitud. Que otras áreas están ciegas a las dificultades que tienen los discapacitados inclusive para ingresar a los mismos edificios donde se encuentran los organismos que los deberían ayudar. Que la incoordinación de movimientos entre distintos sectores en lo que al tema se refiere pareciera sufrir una falla motriz o funcional. Que actitudes inconsultas, evidencian comportamientos autistas. Sin duda, y en lo que a la discapacidad se refiere, podríamos decir que **el Estado denota en su accionar, mas allá de las buenas intenciones, su propia discapacidad**. Es discapacitado motriz, mental, auditivo, visual, visceral y funcional para asistir adecuadamente a la población que sufre alguna discapacidad. Y es más que probable que este Estado discapacitado sea un fiel reflejo de la sociedad, quien frente al problema reacciona de forma similar.

Respecto a cuestiones puntuales, entendemos que la Ley de Protección Integral de la Persona con Discapacidad debería garantizar la cobertura de prestaciones para aquellas obras sociales o agentes de salud no incluidas en la ley de Obras Sociales N° 23.660, y en tal sentido la CoNADis parecería agotar su enfoque en las entidades comprendidas en la citada ley.

Respecto de la Ley de Cheque, es poco entendible que un organismo del Estado como el Banco Central de la República Argentina no sólo no controla el depósito de las multas pertinentes, sino que frente a la demanda del Defensor del Pueblo en el juicio sobre declaración de nulidad por arbitrariedad del art. 3° del Decreto N° 347/99, en lugar de aceptar la sentencia en primera instancia, reacciona defendiendo los intereses de las Entidades Bancarias, y apela al igual que la Asociación de Bancos de la República Argentina. Es decir que en vez de actuar como corresponde al Estado, regulando las fuerzas de los más

poderosos (en este caso Bancos) frente a los sectores más débiles de la sociedad (los discapacitados), permitiendo que los recursos proveniente de las multas que indica la ley de cheque sea redistribuidos a favor de los discapacitados, toma partido en contra de sus propios intereses.

En otro orden de cosas, entendemos adecuada la sugerencia de simplificar el mecanismo de acceso al sistema, esto es, la obtención del Certificado de Discapacidad, ya que actualmente su obtención se ve dificultada por trabas burocráticas.

Por otra parte los funcionarios de distintas áreas del Estado deberían ser concientizados de manera que actúen coordinadamente y en acciones que tengan continuidad y obedezcan a un plan global: Que una de las principales actividades a favor de los discapacitados en el Ministerio de Educación se originara por casualidad, mas allá de lo interesante y positivo de ese accionar no es lo que debiera ser. La improvisación no debe primar aún cuando a veces la misma de resultados positivos como en ese caso. Por otra parte, el ejemplo de la falta de continuidad en la Secretaría de Cultura nos debe alertar sobre los mecanismos para que el accionar en tal sentido tenga continuidad real en el tiempo. Mas aún cuando han dado un “paso atrás” respecto de la página Web, mientras el INADI recomienda generalizar lo eliminado en dicha página.

Y que uno de los organismos que con mayor énfasis encare el tema sea la Defensoría del Pueblo, pone de relieve la falta de peso del organismo específico, la CoNADis.

La presencia del tema en la mayoría de las constituciones locales pone de relieve que no es un problema meramente normativo, sino de ejecución. Y es en ese aspecto donde debe profundizarse. Como bien expresara una autoridad de la CoNADis hay que incluir el tema en la agenda de quienes realmente tienen poder de decisión en el Estado. En resumen, es mucho lo que se puede hacer en este campo, pero falta fundamentalmente decisión para que el mismo sea considerado relevante y así tener logros positivos.

INDICE

INTRODUCCIÓN Y DEFINICIÓN DEL ÁREA TEMÁTICA.....	1
1.- UNIDAD DE ANÁLISIS: LA COMISIÓN NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS (CoNADis).....	3
2.- UNIDAD DE ANÁLISIS: LA LEY DE CHEQUE	6
3.- UNIDAD DE ANÁLISIS: DISTINTOS ORGANISMOS QUE APLICAN O DEBERÍAN APLICAR LAS POLÍTICAS.....	9
3.1.- SUBUNIDAD DE ANÁLISIS: MINISTERIO DE SALUD.....	9
3.2.- SUBUNIDAD DE ANÁLISIS: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.....	26
3.3.- SUBUNIDAD DE ANÁLISIS: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	30
3.4.- SUBUNIDAD DE ANÁLISIS: SECRETARÍA DE CULTURA	45
3.5.- SUBUNIDAD DE ANÁLISIS: INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO	46
3.6.- SUBUNIDAD DE ANÁLISIS: SECRETARÍA DE DEPORTES	47
3.7.- SUBUNIDAD DE ANÁLISIS: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI).....	51
4.- UNIDAD DE ANÁLISIS: MENCIONES CONSTITUCIONALES SOBRE LA TEMÁTICA DE LA DISCAPACIDAD	53
4.1.- SUBUNIDAD DE ANÁLISIS: CONSTITUCIÓN NACIONAL	54
4.2.- SUBUNIDAD DE ANÁLISIS: CONSTITUCIONES LOCALES	55
5.- UNIDAD DE ANÁLISIS: EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN	70
5.1.- SUBUNIDAD DE ANÁLISIS: BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.....	73
5.2.- SUBUNIDAD DE ANÁLISIS: TRANSPORTE	79
5.3.- SUBUNIDAD DE ANÁLISIS: DISCRIMINACIÓN POR DISCAPACIDAD.....	86
5.4.- SUBUNIDAD DE ANÁLISIS: LEY DE CHEQUE.....	97
5.5.- SUBUNIDAD DE ANÁLISIS: OTORGAMIENTO DE TURNOS PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD.....	97
6.- UNIDAD DE ANÁLISIS: DISCRIMINACIÓN: EL INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFobia Y EL RACISMO (INADi).	101
7.- UNIDAD DE ANÁLISIS: BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y URBANÍSTICAS	105
7.1.- SUBUNIDAD DE ANÁLISIS: ACCESIBILIDAD	105
7.2.- SUBUNIDAD DE ANÁLISIS: BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.....	106
7.3.- SUBUNIDAD DE ANÁLISIS: EL COMITÉ DE ASESORAMIENTO Y CONTRALOR.	114
CONCLUSIONES.....	116